

ecologíaPolítica

Cuadernos de debate internacional

Soberanía local

Democracia de base y resistencia popular
Bienes comunes y autogestión comunitaria
Soberanía alimentaria y economía social y solidaria
Remunicipalización de los servicios públicos

Índice

EDITORIAL

OPINIÓN

- 8 Sembrando turismo. El viaje como pieza clave del capitalismo histórico**
Ivan Murray Mas
- 12 Nowtopistas**
Chris Carlsson
- ### EN PROFUNDIDAD
- 18 Del 15-M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional**
Entrevista a Joan Subirats
Miquel Ortega Cerdà e Irmak Ertör
- 28 La dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales**
Daniel López-García, Laura Calvet-Mir,
Josep Espluga, Marina Di Masso,
Guillem Tendero-Acin y Ariadna Pomar-León
- 35 ¿Certificación ‘de papel’ o de relaciones humanas? Los sistemas de garantía participativa como iniciativas de soberanía alimentaria local**
Mario Coscarello y Beatriz Rodríguez-Labajos
- 42 La búsqueda de la soberanía entre la neoextracción y el viejo acaparamiento de tierras**
Felipe Milanez y Charles Trocate
- 51 Recuperar los comunes para un país vivo: perspectivas desde la lucha contra el despojo y por la autogestión comunitaria en Casa Pueblo, Puerto Rico**
Gustavo García López

BREVES

- 62 Monedas sociales**
Kristofer Dittmer
- 65 Cooperativas**
Nadia Johanisova, Ruben Suriñach Padilla
y Philippa Parry
- 68 Eco-comunidades**
Claudio Cattaneo
- 71 Neorrurales**
Rita Calvário y Iago Otero
- 76 El nuevo paso hacia la relocalización energética**
Pablo Cotarelo Álvarez
- 80 Municipios: desperdicio alimentario y necesidad, cara a cara**
María Mestre Montserrat
- 84 Minería de oro en Venezuela: luchas simbólicas vs políticas redistributivas**
Francisco F. Herrera y Iokiñe Rodríguez
- 89 Soberanías de los territorios étnicos. Una visión desde Colombia**
Hildebrando Vélez Galeano
- 93 Humedal de «Villa María» hacia una conservación efectiva, Chimbote, Perú**
Alejandro Samuel Flores Lozano
- 98 Gobernanza de la pesca en el sistema socio-ecológico de Barú: aproximaciones a la autoorganización comunitaria**
Esteban García Romero y Felipe Hernández Crespo

102 Basura cero como alternativa a la incineración de residuos en cementeras
Movimiento Pro Salud, Apaxco, México
Brisa Violeta Carrasco Gallegos
y Jorge Tadeo Vargas Juvera

106 La remunicipalización de la gestión de servicios municipales
Jordi Colomer i Missé

REDES DE RESISTENCIA

112 Ambiente mortal
Marien González Hidalgo

116 Resistencias agroecológicas en Yucatán, México
Mauricio López Barreto

REFERENTES AMBIENTALES

120 Entrevista a Enrique Leff
Sofía Ávila Calero

CRÍTICA DE LIBROS, INFORMES Y WEBS

128 En la espiral de la energía
Luis González Reyes

130 Anarquistas contra el terror y el dolor. Debates sobre una ecología de la modernidad
Jaume Valentines Álvarez

Editores:

Joan Martínez-Alier, Ignasi Puig Ventosa, Anna Monjo Omedes, Miquel Ortega Cerdà.

Coordinación editorial:

Maria Mestre (secretariado@ecologiapolitica.info).

Gestión de artículos:

Irmak Ertör (articulos@ecologiapolitica.info).

Subscripciones y venta:

Mar Santacana (subscriptores@ecologiapolitica.info).

Diseño, maquetación e impresión:

Gina Rosquelles y Pol-len edicions, scl.

Cubierta:

Maria Barrachina (maria.barrachina@gmail.com) y Leire Urkidi.

Secretariado:

Fundació ENT.

C/Sant Joan 39, primer piso.

08800. Vilanova i la Geltrú. España.

Tf/Fax: +34 938935104.

Edita: Fundació ENT / Icaria editorial.

Consejo de Redacción:

Gualter Barbas Baptista, Iñaki Bárcena Hinojal, Gustavo Duch, José Aniol Esteban, Eva Hernández, Mariana Walter, Santiago Gorostiza, Marc Gavaldà, Gloria Gómez, David Llistar, Florent Marcellesi, Patricio Igor Melillanca, Ivan Murray, Marta Pahissa, Jesús Ramos Martín, Albert Recio, Tatiana Roa, Jordi Roca Jusmet, Carlos Santos, Carlos Vicente, Núria Vidal y Joseph H. Vogel.

Consejo Asesor:

Federico Aguilera Klink, Elmar Altaver, Nelson Álvarez, Manuel Baquedano, Elisabeth Bravo, Esperanza Martínez, Jean Paul Deléage, Arturo Escobar, José Carlos Escudero, María Pilar García Guadilla, Enrique Leff, José-Manuel Naredo, José Augusto Pádua, Magaly Rey Rosa, Silvia Ribeiro, Giovanna Ricoveri, Victor Manuel Toledo, Juan Torres Guevara, Ivonne Yanez.

Impreso en Catalunya

Julio de 2015. Revista bianual.

ISSN: 1130-6378

Dep. Legal: B. 41.382-1990

Ecología Política en internet



<http://www.ecologiapolitica.info>



<http://www.facebook.com/revistaecopol>



http://twitter.com/Revista_Eco_Pol/



Licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes:

- **Reconocimiento.** El material puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en los créditos.
- **No comercial.** No puede utilizar esta obra para fines comerciales.
- **Compartir igual.** Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a esta.

Esto es un resumen legible del texto legal (la licencia completa) se encuentra disponible en <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es>

Editorial



«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo»

Eduardo Galeano

A finales de la década de 1970, perseguido en Uruguay y Argentina, Eduardo Galeano se exilió a la costa catalana. Hasta 1984, entre Calella y Pineda de Mar, el autor de *Las venas abiertas de América Latina* (1971) escribió buena parte de la trilogía *Memoria del Fuego*. Terminadas las dictaduras, regresó a Montevideo a mediados de los 80. Años después, en 2011, de vuelta por unos días a Barcelona, Galeano asomaba curioso y sonriente por la acampada indignada del 15-M, en plaza Catalunya. Preguntado por el futuro que deparaba al movimiento, el escritor fue contundente: «Este mundo de mierda está embarazado de otro mejor».

Sólo cuatro años después, en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, diversas formaciones de nuevo cuño, en parte herederas

del espíritu de las plazas, han logrado sorprendentes resultados. En el caso de Barcelona, la activista anti-desahucios Ada Colau encabezó una plataforma ciudadana con el apoyo de varios partidos políticos que se ha hecho con la alcaldía por un estrecho margen. Galeano no alcanzó a verlo. Falleció en Montevideo el pasado 13 de abril.

Eduardo Galeano fue un ejemplo de que la ecología política es transitada no sólo por académicos, sino sobre todo por activistas, escritores, periodistas o intelectuales. Comunicó conceptos complejos con un lenguaje no sólo accesible sino bello, cercano a veces a la poesía. *Las venas abiertas de América Latina* fue una auténtica historia ambiental de Latinoamérica desde el punto de vista de la ecología política, y ha marcado a generaciones de lectores. La atención a los grandes procesos socioambientales – la depredación colonial, la extracción de minerales y su transferencia a Europa – y su impacto en las soberanías nacionales latinoamericanas se combinó en Galeano

con un gran amor por lo pequeño.

En el espíritu de la cita que encabeza este editorial, en este número de la revista exploramos propuestas de «pequeñas soberanías». Propuestas locales desde la ecología política que trascienden, por su contenido o la forma en la que se realizan, el estricto marco en el que tienen lugar. Que pueden constituir semillas de inspiración para otros lugares, o que contribuyen por su originalidad a formas de pensar diferentes.

Tanto en la sección de Opinión como en Breves reproducimos textos de varios autores recientemente incluidos en el libro *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era* (2015), publicado por Icaria Editorial. Esta obra, publicada originalmente en inglés (<http://vocabulary.degrowth.org/>) está dirigida por Giacomo d'Alisa, Federico Demaria y Giorgos Kallis. Incluimos las entradas referentes a Nowtopistas, monedas locales, cooperativas, eco-comunidades y neorrurales.

Otros temas tratados en la sección Breves son la relocalización energética a escala municipal (Pablo Cotarelo), la cuestión de los desechos alimentarios (Maria Mestre) o la creciente tendencia a la remunicipalización de la gestión de servicios municipales (Jordi Colomer). También se tratan diversos casos de estudio como la cuestión de la minería de oro en Venezuela, la conservación de humedales en Perú, las alternativas a la incineración de residuos en México o la gobernanza de la pesca y la soberanía de los territorios étnicos en Colombia.

En la sección En Profundidad entrevistamos a Joan Subirats, catedrático en Ciencia Política vinculado a la plataforma ciudadana que ha ganado las elecciones municipales en Barcelona. Subirats analiza la evolución de los movimientos políticos y sociales en España durante los últimos años, con especial atención al impacto del 15-M y los discursos sobre los bienes comunes. Otros artículos de análisis en esta sección abordan la importancia de la dinamización agroecológica para la configuración de soberanías locales, así como los sistemas de garantía participativa como iniciativas de soberanía alimentaria. Finalmente, Gustavo García analiza el movimiento ambiental

y la defensa del común en Puerto Rico, mientras que Felipe Milanez y Charles Trocate indagan en los impactos locales de las conexiones entre el capitalismo rentista y el sistema extractivista en la Amazonía.

Enrique Leff protagoniza en este número la sección de Referentes Ambientales. Entrevistado por Sofía Ávila Calero, el sociólogo ambientalista mexicano desgrana las influencias intelectuales en su formación desde los movimientos estudiantiles mexicanos en 1968. Leff desarrolla su visión de la crisis ambiental como una crisis epistemológica, así como las conexiones entre ecología política y economía ecológica.

En la sección Redes de Resistencia, Mauricio López Barreto aborda las resistencias agroecológicas en Yucatán (México). Marien González Hidalgo, por su parte, analiza el informe de *Global Witness* que denuncia el dramático aumento de asesinatos de activistas ambientales en los últimos años.

Finalmente, en la sección de Crítica de Libros incluimos una revisión de dos obras que adoptan una perspectiva histórica en su acercamiento a la ecología política. La primera es una historia ambiental del alambre de púas, analizada por Jaume Valentines Álvarez. La segunda, *En la espiral de la energía*, es presentada por uno de sus autores, Luis González Reyes, y se configura como una historia de la humanidad con especial atención al uso de la energía.

Con el próximo número, la revista *Ecología Política* cumplirá 50 números y entrará en su 25 aniversario (1991 – 2016). En el número 50 miraremos al pasado y al futuro de la Ecología Política desde las perspectivas de distintas partes del globo. Miquel Ortega, miembro del equipo editorial desde el número 31, deja de coordinar la revista al incorporarse al Ayuntamiento de Barcelona como integrante de Barcelona en Común, si bien continuará formando parte del consejo de redacción. Sirvan estas líneas como testimonio agradecido a su trabajo en *Ecología Política* desde 2006. ■

Santiago Gorostiza, Joan Martínez Alier e
Ignasi Puig



Revista Iberoamericana de Economía Ecológica ISSN 13902776 NÚMERO PRÓXIMO A PUBLICARSE EN AGOSTO 2015: Volumen 24.

Medición de Indicadores de Desarrollo Sostenible en Venezuela: Propuesta Metodológica. *Anna Gabriela Pérez y Montserrat Hernández.*

Sostenibilidad institucional y social de la expansión de la frontera agropecuaria. Boom sojero, políticas redistributivas y pago por servicios ambientales en el norte de Salta, Argentina. *Francisco R. Barbarán, Lorena Rojas, Humberto M. Arias.*

Justicia y equidad social en los sistemas de Pago por Servicios Ambientales. *Ingo Gentes y Francois Jost.*

Minería metalífera multinacional en Argentina: su costo de oportunidad económico-estatal y escenarios alternativos. *Diego I. Murguía.*

Análise da eficiência econômica e termodinâmica da produção de soja em primavera do leste. *Elisama Fonseca de Carvalho, Alexandre Magno de Melo Faria, Dilamar Dallemole, Vallência Maira Gomes.*

Indutores de impacto ambiental nos municípios do Rio Grande do Sul: aplicação de um modelo global de probabilidade. *Ely José de Mattos, Eduardo Ernesto Filippi.*

Agroecosistemas periurbanos, un potencial latente. Contribución al análisis de la multifuncionalidad a partir de indicadores de sustentabilidad. *Ernesto Navarro Hinojoza y Ma. Edna Álvarez Sánchez.*

Economía ecológica, desenvolvimiento alternativo e decrescimento: proposição de uma matriz de convergencia. *Ricélia Maria Marinho Sales y Gesinaldo Ataíde Cândido.*

Recursos naturales y económicos en disputa. Bosques nativos y fondo compensatorio en la provincia de Salta, Argentina. *Mariana Andrea Schmidt.*

Instituições e Governança Ambiental: Uma Revisão Teórica. *Tomás de Oliveira Bredariol y Valéria Gonçalves da Vinha.*

Desequilibrios en la balanza comercial Andina: ¿Se ajustan biofísicamente? *Pablo Samaniego, María Cristina Vallejo, Joan Martínez-Alier.*

Intercambio ecológicamente desigual e Intercambio desigual en Oscar Braun. Nexos, puntos en común y especificidades. *Guillermo Peinado.*

Descarga gratuita, números anteriores y más información en www.redibec.org

DICCIONARIO IRREVERENTE DE ECONOMÍA



Una combinación explosiva:



ENRIC GONZÁLEZ



DARÍO ADANTI

20 conceptos económicos como nadie te los ha explicado. Los entenderás y te reirás.



Alternativas económicas

Búscalo en librerías o pídelo a contacto@alternativaseconomicas.coop o al 93 611 63 05

Opinión

Sembrando turismo. El viaje como pieza clave del capitalismo histórico

Ivan Murray Mas

Nowtopistas

Chris Carlsson



Sembrando turismo. El viaje como pieza clave del capitalismo histórico



Ivan Murray Mas*

La aventura, el descubrimiento, lo desconocido, la desconexión, la búsqueda de vivencias auténticas, el viaje interior... El viaje ha sido un aspecto central en la evolución de las sociedades humanas. Mitos y leyendas se han construido en torno al viaje. El tránsito del feudalismo al capitalismo estuvo marcado por profundos cambios geoeconómicos y geopolíticos, con la colonización de América como piedra angular de las lógicas espaciales del capital europeo. El viaje también era fuente de conocimiento, captura (y saqueo) de información de lugares remotos y sus gentes. La preparación del viaje resultaba costosa, pero las expectativas de beneficios superaban con creces los riesgos. Así, con el viaje se difundió la violencia del capital a múltiples rincones del planeta.

En plena revolución industrial, la lucha por la hegemonía global condujo a los estados europeos a una carrera desenfrenada por la conquista de nuevos espacios para ampliar su marco de actuación. Así, a través del control territorial se aseguraban los recursos básicos para abastecer a la gran industria y por supuesto se ampliaban las plusvalías de las clases dominantes. Por aquel entonces se llevaron cabo grandes descubrimientos científicos que eran también geográficos: recordemos los viajes de Darwin a bordo del *Beagle*, por ejemplo. Por aquellos mismos años, la clase ociosa europea (alta burguesía y aristocracia) se lanzaba a conocer mundo por placer, o al menos esta es la versión oficial que se ofrece. En realidad, muchos de aquellos románticos, de

manera consciente o no, serían la punta de lanza del capital europeo para penetrar en lugares exóticos. Mientras que las campañas coloniales al uso resultaban muy costosas y arriesgadas, la penetración occidental a través de sus viajeros aventureros resultaba más barata. En función de sus observaciones, las potencias decidirían su entrada.

Ya a mediados del siglo XIX, Thomas Cook vio que la organización de viajes podría ser un interesante nicho de negocio. La incorporación de la máquina de vapor en los medios de transporte, ferroviarios y marítimos, junto con la incipiente industria de los viajeros – primeras agencias de viajes y hoteles – condujeron a la transformación de espacios para la producción del ocio. La modernidad en la ciudad industrial cristalizó en grandes eventos, como por ejemplo las exposiciones universales, y con ellos, los turistas. Además la mercantilización turística se propagaba por las ciudades del Sur de Europa cargadas de historia, donde el patrimonio se convertía en producto turístico. Pero no sólo eran las ciudades hacia donde se dirigían los viajeros, sino que en aquellos momentos la «naturaleza» también se integró en el paquete turístico. Con la exaltación romántica de la naturaleza llegaron los primeros parques naturales y esos tuvieron desde sus inicios una vocación recreativa y turística. Ello coincidía con la progresiva sustitución de la biomasa por los combustibles fósiles, dejando paso a la alianza entre conservación y uso recreativo/turístico, desplazando otros usos y otras gentes.

* Profesor asociado del Departament de Ciències de la Terra, Universitat de les Illes Balears (ivan.murray@uib.es)

Después de la Primera Guerra Mundial, durante los locos años veinte se desató la fiebre del sol y la playa, entre la burguesía de los países del capitalismo avanzado. Los espacios litorales que hasta entonces estaban poco poblados y que eran utilizados fundamentalmente por las comunidades rurales pesqueras empezaron a convertirse en piezas suculentas del capital turístico e inmobiliario. Sin embargo, solamente los privilegiados podían participar de la fiesta turística, y la incidencia socio-espacial del turismo era limitada. Ya por aquel entonces la frontera de mercantilización turística se había desplazado cada vez más hacia el Sur geográfico y político.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial interrumpió la difusión turística hacia las periferias del placer del Sur. Una vez finalizado el conflicto y con el relanzamiento del llamado capitalismo regulado o monopolista (que, entre otras cosas, fructificó en la llamada sociedad del consumo de masas) dio lugar a un salto cualitativo y cuantitativo de la industria turística global. A ello se le añadió el reciclaje de pilotos y aeronaves de guerra, dando lugar al vertiginoso aumento de la aviación comercial que durante los *Treinta Gloriosos* (1945-1975), que se benefició del petróleo barato. Contradictoriamente, las conquistas sociales de la clase trabajadora en los espacios centrales (p. ej.: vacaciones pagadas) permitieron vertebrar el músculo económico de lo que serían los grandes grupos turísticos¹. Muchos espacios semiperiféricos fueron incorporados a la producción turística y las viejas estructuras coloniales se transformaron bajo el dominio del capital turístico internacional. Así pues, diversos autores hablaron de una recolonización turística que reforzó el *statu quo* social. En el caso español, contrariamente a lo que se ha dicho – que a través del turismo se erosionaron las bases morales de la dictadura franquista –

la realidad es que el régimen salió reforzado gracias a las divisas turísticas y los empresarios de la dictadura abrazaron con entusiasmo el negocio de los viajeros.

El turismo sirvió como una potente arma cultural e ideológica mediante la cual penetraban los valores más radicales (y los mitos) de la sociedad del consumo de masas. El «animal turístico» como «animal apolítico» invadía los espacios turísticos donde las autoridades debían mantener un buen clima empresarial y agradable de cara a los clientes. Al respecto destacan eslóganes del estilo «un turista, un amigo» o el conocido «*Spain is different*». Paulatinamente, el poder del dinero turístico arastró todas las otras actividades económicas, especialmente las agrarias y manufactureras, quedando tan sólo aquellas que formaban parte del conglomerado industrial turístico: construcción, transporte, alojamiento, comercio, restauración y entretenimiento. En menos de una década la revolución turística se había esparcido como una plaga, erosionando la autonomía económica, y sentando las bases de un modelo social en torno al consenso turístico, sin dejar prácticamente aire para la disidencia política u otras formas de organización social. En el contexto de la Guerra Fría, tanto en el Mediterráneo como en el Caribe o el Sudeste asiático, la colonización turística de los espacios periféricos servía también de vacuna geopolítica contra la «amenaza comunista», por lo que los organismos multilaterales como el Banco Mundial apoyaron decididamente proyectos turísticos.

La crisis de los setenta se saldó con una profunda reestructuración del capitalismo global tanto en los espacios centrales como periféricos, inaugurando la etapa neoliberal. Por un lado, algunas regiones turísticas fordistas entraron en crisis (y muchas de ellas todavía continúan en ella), pero ello no condujo al abandono de la vía turística, sino que se optó por su intensificación mediante la devaluación del producto turístico. El ataque neoliberal contra la clase trabajadora tuvo su contrapartida turística en dos aspectos: por un lado, el reciclaje de zonas

1. Cabe señalar que ese proceso presentaba bifurcaciones y no todo el ocio y el viaje pasaban por los filtros del capital. Existían otras formas de organización social como por ejemplo el turismo social promovido por los potentes sindicatos europeos.

turísticas degradadas para el consumo turístico de la castigada y denostada clase trabajadora de los espacios centrales; y por otro, la reducción de costes mediante la experimentación de los ajustes laborales en las plantillas turísticas (p. ej.: subcontratación, contratos precarios, sueldos mínimos, etc.). Sin embargo, en muchas de esas regiones también fructificaron nuevas formas de explotación turística que estaban estrechamente vinculadas a fórmulas de acumulación financiera. La combinación entre financiarización, liberalización del espacio aéreo (con la aparición de las compañías *low cost*) y un período de veinte años de petróleo barato, desembocó en el llamado turismo inmobiliario o residencial. Si hasta entonces quedaban fragmentos del territorio sin turisticar – aunque estaban claramente afectados por la dinámica turística –, a partir de ese momento se convirtieron en espacios susceptibles de ser convertidos en piezas del *monopoly* turístico, valorizándose el suelo rural y desplazando las pocas actividades agrícolas existentes. En esta especie de contrarreforma agraria, los poderes locales se lanzaban a la promoción de megaproyectos urbano-turísticos, compitiendo con otras regiones. De esta manera, en los espacios turísticos de las regiones del capitalismo avanzado se cerraba el ciclo turístico, ya sin dejar lugar a otra opción económica. Y, políticamente no cabía ninguna voz que cuestionara el consenso turístico, el proyecto de la clase dominante (el capital).

Las regiones del Sur Global, atizadas por la deuda externa y el disciplinamiento neoliberal posterior, adoptaron la industrialización turística, que formaba parte de los paquetes de ajuste estructural. Especialmente en las zonas litorales del Mediterráneo meridional, Caribe y sudeste asiático, la exportación turística sustituyó progresivamente la exportación de materias primas. La caída del precio de las materias primas agudizó los desequilibrios comerciales y la situación financiera de la periferia y la opción turística permitió captar divisas de manera rápida y con escasa inversión. Además, la opción turística sería pionera en la penetración del capi-

tal internacional ya que ante la «urgencia» de la situación se abrieron las puertas a las compañías extranjeras que eran las que tenían experiencia y capital. Algunos autores han señalado que en determinados territorios el «resort sustituyó a la plantación», reproduciendo a grandes rasgos las mismas estructuras sociales. Además, el capital turístico procedente de los espacios centrales encontró en esas nuevas periferias turísticas una solución a sus problemas de rentabilidad. Se conjugaron de esta manera la disponibilidad de nuevos espacios (baratos) y la creciente capacidad de compra del capital turístico ampliada por los nuevos medios financieros. Como ocurrió en las zonas turísticas del litoral español, las nuevas zonas turísticas del Sur Global producidas sobre territorios hasta entonces escasamente ocupados arrastraron población obrera, procedente de las áreas rurales, que se ubicará en las afueras de los resorts. Esos barrios obreros turísticos surgen desgajados de las zonas de producción turística, en muchas ocasiones sin servicios ni dotaciones urbanas mínimas. Dos mundos se dan la espalda: el lujo en las fortalezas turísticas y la vida humilde en los barrios obreros.

En las nuevas periferias del placer y durante los años de euforia financiera global, las «etapas turísticas» se han comprimido y en un breve lapso de tiempo se ha pasado del resort a los mega-complejos turístico-residenciales. No obstante, en el Sur Global todavía persisten amplias zonas con menor penetración del capital, especialmente los espacios rurales. Algunos de esos espacios quedaron gravemente dañados en décadas anteriores, ya fuera por conflictos armados o por los efectos de la revolución verde u otras actividades extractivas. Ahora, el Capitalismo Verde ha lanzado nuevas fórmulas de mercantilización turística, mediante la retórica de lucha contra la pobreza o la conservación de la naturaleza, con productos como el *pro-poor tourism*, el ecoturismo o el turismo rural. Sin embargo, en las áreas rurales del Sur Global, la casuística es muy diversa y compleja, pudiéndose encontrar desde experiencias cooperativistas hasta operaciones dirigidas por los grandes agentes turísticos internacionales. Tal como defienden autores

como Ernest Cañada², aquí también hay bifurcaciones en la disputa por el control de las rentas turísticas y cabría observar formas campesinas colectivas de organización social de la economía en las que la dimensión turística puede reforzar su autonomía. Así pues, la cuestión central radica en cómo se organiza y quién controla esas nuevas formas de producción turística.

Paradójicamente, en el contexto de la crisis global y en el marco de expansión del capitalismo verde, los lobbies han situado el turismo como herramienta clave tanto para la salida de la crisis económica como para la lucha contra la crisis ecológica. En plena crisis el capital turístico a escala mundial ha presentado unas cifras récord: mil millones de turistas internacionales y cinco mil millones de turistas domésticos anuales. Por si eso no fuera poco, en espacios afectados por las crisis global, como el Sur de Europa, se defiende la profundización turística entre las medidas anticrisis. El aparato turístico sale indemne en cuanto a su relación al complejo financiero-inmobiliario causante de la crisis, y además se alza como la gran promesa de más crecimiento.

Finalmente, cabe señalar que detrás del «escenario» turístico se esconden toda una serie de conflictos socioecológicos que ensombrecen buena parte de la mitología de la propaganda turística. En primer lugar, el metabolismo turístico resulta ser extremadamente exigente en recursos naturales. Y en la mayoría de casos los flujos de materiales y energía proceden del exterior, desvinculándose los usos del territorio del abastecimiento de recursos, y por tanto desplazándose también los conflictos que acompañan a las actividades de extracción y producción. La actividad turística permite extraer unas rentas del suelo más elevadas que las que se derivan de otras actividades (p. ej.: las agrarias) y con esos ingresos turísticos se adquieren, a un precio más barato, los diferentes materiales que requiere la máquina de crecimiento turística. Esto ha sido posible en un contexto de petróleo abundante y

barato. Sin embargo, esas economías con monocultivos turísticos son doblemente dependientes, de turistas y recursos del exterior, y por ende extremadamente vulnerables. Tal como ha ocurrido con otros monocultivos en plantaciones regidas por capataces, las sociedades turísticas han experimentado un progresivo declive de los saberes tradicionales de los usos del territorio y sus recursos, así como de las formas de organización autónoma y autogestionaria. Los eslóganes de universalización del consumo turístico resultan inviables a escala planetaria ya que solamente una pequeña fracción de la población mundial puede permitirse viajar. Y, los escenarios futuros, tanto por lo que respecta al final del petróleo barato como a la recomposición de las clases medias sometidas a la crisis, apuntan hacia un futuro no muy lejano en que las promesas turísticas se verán incumplidas. Entonces y a la fuerza, en ciertas zonas del planeta, se impondrá el *decrecimiento turístico*. ■

Referencias

- BECKEN, S. (2015), *Tourism and oil. Preparing for the challenge*. Channel View Publications, Bristol.
- BUADES, J., CAÑADA, E., Y GASCÓN, J. (2012), *El turismo en el inicio del milenio. Una lectura crítica a tres voces*. Foro de Turismo Responsable, Madrid.
- MOWFORTH, M. y MUNT, I. (2009), *Tourism and sustainability: new tourism in the Third World*. Routledge, Londres.
- MURRAY, I. (2015), *Capitalismo y turismo en España. Del «milagro económico» a la «gran crisis»*. Alba Sud, Barcelona.
- VIR SINGH, T. (Ed) (2012), *Critical debates in tourism*. Channel View Publications, Bristol.

2. En relación a estas cuestiones se recomienda consultar: <http://www.albasud.org/elbloccernestcanada>

Nowtopistas¹

Chris Carlsson*

Reparadores, inventores y espíritus improvisadores, que aportan un enfoque artístico a tareas importantes que son ignoradas o infravaloradas por la sociedad de mercado, son los que yo denomino nowtopistas. Basándose en prácticas que han ido surgiendo durante las pasadas décadas, en la relación de los nowtopistas con el trabajo destaca una vertiente de política de clase auto-emancipatoria que va más allá del tradicional ámbito del trabajo asalariado. Estas prácticas incluyen actividades como la **agricultura/horticultura urbana**, las cooperativas de auto-reparación de bicicletas a menudo llamadas «cocinas de bicis», colectivos de hackers comprometidos con el diseño de herramientas de software libre y con la expansión y mejoramiento de las comunicaciones sociales, confeccionadores de ropa reciclada, cooperativas de biocombustibles, y muchos más. Una característica de muchas de estas actividades es que la gente deja de aportar su tiempo y sus conocimientos al mercado y – trabajando gratuitamente – se reapropian del flujo de desechos del **capitalismo** moderno a la vez que utilizan las tecnologías de formas inesperadas. Vistos con una perspectiva amplia, están inventando los fundamentos sociales y tecnológicos para una forma de vida post-capitalista. Cada vez más gente, al reconocer la degradación inherente en las relaciones comerciales, comienza a crear re-



des de actividades que rechazan ser evaluadas en dinero. Las actividades nowtopistas comparten senderos con las prácticas del movimiento decrecentista, aun cuando esto no sea explícitamente reconocido. Cuando la gente deja de aportar al mercado su tiempo y sus conocimientos tecnológicos y decide a qué destinar sus esfuerzos está provocando un cortocircuito en la lógica de la sociedad de mercado que depende del **crecimiento** incesante. Están «saliéndose de la economía», que es el lema del decrecimiento. Su habitual utilización de materiales descartados y reciclados del flujo de desechos del **capitalismo** demuestra también una transición a actividades productivas que por definición no equivalen a «**crecimiento**».

Este trabajo auto-dirigido y llevado a cabo fuera de la esfera del trabajo asalariado puede ser interpretado en términos de clase y, en última instancia, de una sociedad sin clases. Los dos componentes esenciales son el *tiempo* y la *tecnosfera*. La gente se involucra en actividades que se desarrollan fuera de sus empleos, en su llamado tiempo «libre». Tales prácticas, con frecuencia intensivas en tiempo y agotadoras, requieren compartir y ayudarse mutuamente, y constituyen el origen de nuevos tipos de comunidades. Esto representa una «recomposición» de la clase trabajadora, pese a que la mayoría de los participantes no se identificaría con tal marco de referencia. Dado que estas personas están embarcadas en una apropiación creativa de las tecnologías para propósitos que ellas mismas han diseñado y escogido, estas actividades implican la (parcial) trascendencia de la prisión del trabajo asalariado por parte de «trabajadores» que tie-

* Fundador y co-director del proyecto *Shaping San Francisco* (<http://shapingsf.org/>) (carlsson.chris@gmail.com)

1. La versión inglesa de este artículo se ha publicado en el libro *Degrowth: a vocabulary for a new era* (Giacomo D'Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis (eds.), 2014). La versión traducida al castellano puede encontrarse en *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era*, Icaria Editorial (2015).

nen cosas mejores que hacer que en sus empleos convencionales. Cuando se siente liberada de las restricciones coercitivas del trabajo asalariado y de las jerarquías arbitrarias, la gente *trabaja duro*. Son reparadores y herreros que trabajan con el flujo de desechos en los espacios abiertos del **capitalismo** tardío, generando nuevas prácticas a la vez que redefinen el sentido de la vida.

En una sociedad que eternamente se alaba a sí misma como democrática, el debate público en torno a nuestro más preciado secreto público, el trabajo, pocas veces se plantea. No hay ningún control público sobre las fundamentales decisiones que definen nuestras vidas, ya sea *qué* trabajo hacemos, *cómo* lo hacemos, con *quién* trabajaremos o, más generalmente, la naturaleza de la investigación científica, las clases de tecnología que deberíamos aceptar o rechazar (en función de una divulgación pública de las consecuencias de cada opción), etcétera. Es en esta profunda separación que surge la clase, la separación de la mayoría de nosotros del mundo que (re)producimos con nuestro trabajo compartido.

Al involucrarse con la tecnología de modos creativos y experimentales, los nowtopistas se comprometen en una guerra de guerrillas por el rumbo de la sociedad. En infinidad de comportamientos y de modos humildes, «invisibles», los nowtopistas están hoy mejorando la vida, pero también sentando las bases, tanto técnicas como sociales, de un genuino movimiento de liberación de la vida condicionada por el mercado.

Al mismo tiempo que el **capitalismo** continúa con su inexorable impulso para acorralar cada centímetro cuadrado del planeta dentro de su lógica de dinero y mercados, a la vez que intenta colonizar nuestros pensamientos y controlar nuestros deseos y comportamientos, surgen nuevas prácticas que están redefiniendo la política y abriendo espacios impredecibles. En lugar de hacerlo a través de formas políticas tradicionales, como los **sindicatos** o los partidos, la gente confluye en proyectos prácticos.

La misma inventiva y el genio creativo que erróneamente se atribuyen al capital y a los negocios están siendo aplicados a la ecología planetaria. Actuando localmente ante las catástrofes

mundiales que se despliegan (muchas de ellas evitables, si lo intentásemos), amigos y vecinos están rediseñando los principales fundamentos tecnológicos de la vida moderna. Tales rediseños son elaborados mediante programas de «investigación y desarrollo» en garajes y patios traseros, entre amigos que utilizan los detritus de la vida moderna. Nuestros **procomunes** contemporáneos adoptan la forma de bicicletas descartadas y aceite vegetal de freidoras, de solares vacantes y de anchos de banda abiertos. «Verdaderos mercados libres», anti-mercancías, festivales y servicios gratuitos son los imaginativos *productos* de una anti-economía, provisionalmente en construcción por parte de personas libremente cooperativas e inventivas. No esperan un cambio institucional desde arriba, sino que están construyendo el nuevo mundo dentro del caparazón del antiguo.

Lo que observamos en el movimiento nowtopista no es una lucha por la emancipación de los trabajadores dentro de la división capitalista del trabajo (que es lo mejor que podría esperarse de la estrategia de los **sindicatos**, *si* le concediésemos el beneficio de la duda).

En cambio, vemos personas que reaccionan ante el trabajo excesivo y el vacío de una vida bifurcada que les es impuesta en el precario ámbito mercantil impulsado por el crecimiento. Una creciente minoría de gente está *trabajando* para escapar de la eterna rutina del consumismo y el trabajo agobiante. Para cada vez más gente, el tiempo se ha vuelto más importante que el dinero. El acceso a los bienes ha sido el principal incentivo para acatar la dictadura de la economía. Pero en reductos de uno u otro sitio, la fascinación por una hueca riqueza material, y con ella la disciplina impuesta por la vida económica, comienzan a resquebrajarse.

Esta es, también, la esencia fundamental de una política de decrecimiento. La incesante lógica impuesta por una economía anónima encuentra su contrapartida en la cotidiana afirmación de la subjetividad y la productividad creativa que se desarrollan fuera de la economía monetaria. En este contexto, el decrecimiento no equivale a un hundimiento del bienestar material, sino

a una reorganización voluntaria de la actividad humana para que podamos trabajar menos, despilfarrar menos, tener todo aquello que necesitamos o deseamos, y disfrutar de la vida plenamente. Los únicos que pueden reorganizar la vida de este modo son aquellos que hoy se levantan y producen dentro de una sociedad capitalista; en otras palabras, sólo podemos hacer esto juntos. Reclamar el control de lo que hacemos y de cómo lo hacemos es el primer paso para escapar de la rutina del **crecimiento** incesante; el crucial primer paso hacia una sociedad que adhiera al decrecimiento. ▣

Referencias

- CARLSSON, C. (2008), *Nowtopia: How Pirate Programmers, Outlaw Bicyclists, and Vacant-Lot Gardeners Are Inventing the Future Today*, Londres: AK Press.
- GORZ, A. (1981), *Adiós al proletariado: Más allá del socialismo*, Barcelona: El Viejo Topo.
- GORZ, A. (1999), *Reclaiming Work: Beyond the Wage-Based Society*, Malden, MA: Blackwell Publishers Inc.
- HOLLOWAY, J. (2002), *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Barcelona: El Viejo Topo.
- HOLLOWAY, J. (2011), *Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo*, Barcelona: El Viejo Topo.



Granja Alemany² (Fuente: Nowtopians, Chris Carlsson)



Cyclecide Bike Rodeo, una noria que funciona a pedales (Fuente: Nowtopians, Chris Carlsson)

2. Una granja de 2,5 acres al lado de la autopista interestatal 280, al sur de San Francisco. Está gestionada por voluntarios y la comunidad y suministra comida gratis a la gente que vive al lado, en un proyecto de vivienda pública.

Pueblos

Información y Debate

- Análisis político
- Comunicación
- Economía
- Multinationales
- Feminismo
- Entrevistas
- África
- Alternativas
- Opinión
- América Latina
- Lucha social
- Medioambiente
- Futuro
- Culturas
- Internacionalismo
- Palestina
- Fotografía
- Solidaridad

Periodicidad trimestral
y números especiales

Distribución en librerías,
quioscos, bibliotecas
y por suscripción.

info@revistapueblos.org

Ilustración: Virginia Pedrero. Portada del número 66.

www.revistapueblos.org
@revista_pueblos

En profundidad

Del 15-M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional

Entrevista a Joan Subirats

Miquel Ortega Cerdà e Irmak Ertör

La dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales

Daniel López-García, Laura Calvet-Mir, Josep Espluga,

Marina Di Masso, Guillem Tendero-Acin

y Ariadna Pomar-León

¿Certificación 'de papel' o de relaciones humanas? Los sistemas de garantía participativa como iniciativas de soberanía alimentaria local

Mario Coscarello y Beatriz Rodríguez-Labajos

La búsqueda de la soberanía entre la neoextracción y el viejo acaparamiento de tierras

Felipe Milanez y Charles Trocate

Recuperar los comunes para un país vivo: perspectivas desde la lucha contra el despojo y por la autogestión comunitaria en Casa Pueblo, Puerto Rico

Gustavo García López

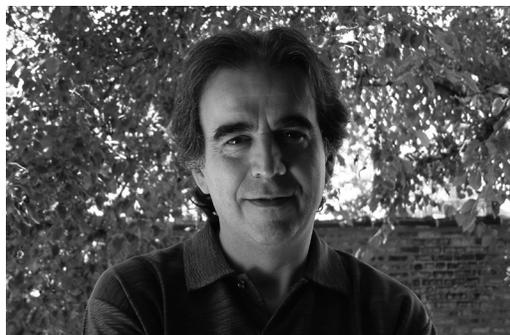


Del 15-M y las gobernanzas locales al asalto de la política institucional

Entrevista a Joan Subirats*

Entrevista realizada por Miquel Ortega Cerdà e Irmak Ertör el 12 de mayo de 2015

Traducción: Ester Jiménez de Cisneros Puig y Verónica Núñez Reyes



El 15 de mayo de 2011 hubo una importante protesta ciudadana que sobrepasó claramente el marco institucional. Unos años después nos encontramos con unas elecciones municipales donde habrá una considerable entrada de nuevos partidos políticos en el marco institucional existente. ¿Qué lectura haces de este proceso?

Las movilizaciones de 2011 mostraban la incapacidad de los partidos políticos tradicionales y de los sindicatos – es decir, las entidades construidas en torno al modelo fordista – para seguir canalizando, articulando y organizando el descontento, las reivindicaciones y las necesidades de un sector de la población.

En el caso de los sindicatos, porque represen-

tan estructuras institucionales en clave patrón-trabajador que no siempre se corresponden con la situación de muchos jóvenes, que se encuentran en condiciones de trabajo autónomo, de autoexplotación, de precariedad, de no continuidad, y que por tanto no ven a los sindicatos en su mundo habitual.

En el caso de los partidos, porque el eje derecha-izquierda ya no funciona. Había funcionado tradicionalmente, sobretudo en Europa desde 1945, con una lógica socialdemócrata, conservadora, liberal y, por tanto, con dos polos de un mismo espacio (que es el espacio de la economía de mercado, pero con más o menos énfasis redistributivo). Sin embargo, ese eje no es aplicable a una situación donde lo que está en peligro es la propia capacidad redistributiva. Los equilibrios propios del 45 eran entre una lógica de Estado y de mercado nacionales, pero se han roto porque ahora los mercados son globales y los Estados siguen siendo «locales» o «territoriales». Por lo tanto, los partidos no son capaces de ejecutar los compromisos y muchos ciudadanos perciben que su futuro no está ligado a estos acuerdos, sino que las élites están principalmente preocupadas por su propia supervivencia. Expresiones tales como «No nos representan» serían un claro ejemplo de este malestar. No nos representan porque no hacen lo que nos dicen que van a hacer y no son capaces de hacerlo. No nos represen-

* Joan Subirats (joan.subirats@uab.es) es catedrático de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y ha sido fundador y director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP). Su investigación se ha centrado en el análisis de políticas públicas, la innovación democrática y sociedad civil. Desde 2014, ha estado vinculado a la plataforma ciudadana *Guanyem Barcelona*, que tras aliarse con distintos partidos políticos ganó la alcaldía de Barcelona el pasado 24 de mayo. En esta entrevista, realizada antes de las elecciones, Subirats discute las novedades que el 15-M ha supuesto en el marco institucional actual, el cambiante rol de las ONG en los últimos años, o la emergencia de conceptos como la “coproducción política” o el “bien común” en la política municipal.



15-M. Puerta del Sol, Madrid (Fuente: contested-cities.net)

tan porque no viven como nosotros ni viven los mismos problemas que nosotros. Por lo tanto, lo que hace falta es más democracia.

Lo que tenemos en 2011 no es una revolución clásica en el sentido ideológico, sino una reclamación de democracia, una demanda para que se cumplan los compromisos que la democracia había incorporado al sistema, los cuales, en el fondo, son igualdad y justicia.

Se pone en duda que se puedan alcanzar los compromisos que había detrás del Estado democrático, que eran representación, capacidad de mejora, lógicas de igualdad razonables, la idea de justicia, etc. y que articulaban la división de poderes con ciertos equilibrios entre ellos. Los que están presentes en las protestas denuncian que, en el fondo, no hay división de poderes, que todos están conjurados, que hay una lógica de élites de ámbito europeo, que no hay espacios reales para el cambio, etc. El ejemplo más claro fue el de mayo de 2011, cuando el propio Zapatero¹ dice públicamente que le han llamado

de Europa, que hay que cambiar la política y se acabó la discusión. Entonces se pierde toda credibilidad.

De entrada, las protestas de 2011 son un grito, una indignación, «No se nos escucha», «Democracia, te quiero mucho pero te veo un poco ausente». No se ve salida.

Otro factor importante es que una parte importante de la gente que expresa esta indignación no pertenece al clásico sector politizado. Llega mucha gente nueva, que empieza de nuevo, de cero. Para muchos de los que ya estábamos era una especie de pérdida de tiempo porque se discutían las mismas cosas de siempre: si es justo el sistema electoral, etc. Sin embargo, lo que en el fondo reflejaban estas discusiones era una estructura horizontal, una lógica asamblearia en la que todo el mundo tiene derecho a expresarse, la visión de que no hay que ser experto para participar, la idea de que somos productores y consumidores de los debates. Una lógica que enlaza con la lógica tecnológica de las redes. Ese fenómeno no lo había convocado nadie, no era un movimiento. Esto también es un hecho importante. No era un movimiento. Nadie podía

1. José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces presidente del gobierno español.



Decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid bajo el lema ¡Democracia Real Ya!
(Autor: Olmo Calvo, Creative Commons)

llamar por teléfono al 15-M, no podías visitar el local del 15-M. Era una explosión que duró y tenía la lógica de pervivir, pero no pretendía organizarse como organización del 15-M. De hecho, cuando se quiso crear la organización, machacaron a los que lo intentaron.

Inmediatamente después vienen las elecciones generales y gana el PP por mayoría absoluta. Entonces mucha gente pensó que todo aquello no había servido para nada pero visto con perspectiva es evidente que se mantenía el espíritu del 15-M, que aparecía de vez en cuando como por ejemplo en el caso de Gamonal². Era un movimiento latente que tenía unas expresiones en momentos determinados y que seguía conectado mediante las redes.

En 2014 aparecen expresiones políticas como la de Podemos, que son capaces de interpretar esto y de no hacerlo de manera torpe. Sin querer capitalizar el 15-M, son capaces de canalizar la expresión de las principales demandas y expresarlas. Por ejemplo, mediante ideas tales como: «No es tanto un problema de derecha-izquierda

como de un 99% contra un 1%, de las élites contra la gente, de un cambio constituyente, etc.», «Las instituciones han sido secuestradas. Recuperémoslas», etc.

Podemos da el salto a la política institucional en el ámbito de las elecciones europeas porque es lo más fácil. La gente está dispuesta a experimentar más y hay menos costes de acceso. Y consiguen la sorpresa. Una sorpresa relativa si analizamos los canales utilizados para difundir su propuesta política. En las elecciones europeas de 2014 la articulación política de Podemos era muy débil pero en la red, si los seguidores de Pablo Iglesias eran 500.000, los del siguiente de los candidatos eran 30.000. La visualización de los videos de YouTube de Podemos quizá era 5 veces mayor que la del resto y la presencia en Facebook de Podemos no tenía nada que ver con la de los demás. Es decir, la hegemonía de Podemos en las redes y en los nuevos lenguajes era abrumadora. Si a esto añades su capacidad de presencia multicapa, en los medios: en televisión, en *Público*, etc., se va creando una dinámica de comunicación que rompe las estructuras tradicionales, aparentemente controladas por las élites. Y, de golpe, consiguen ponerse de por me-

2. Referencia a las protestas vecinales acontecidas en enero de 2014 en este barrio de la ciudad de Burgos.



Barcelona en Comú y Ada Colau celebrando los resultados de las elecciones municipales en Barcelona (Autor: Emilio Morenatti, Fuente: www.theguardian.com)

dio, utilizando los nuevos instrumentos, con una presencia no prevista.

Que después su existencia puede ser capitalizada por las élites para debilitar al PSOE es otro tema. Es lo que se dice: que canales de televisión como la Sexta les priorizan y les dan mucho espacio, pero también que el asunto se les escapa de las manos y que quedan superados por la propia dinámica.

Podemos es un caso, pero hay otros. Por ejemplo, en Barcelona se presenta *Guanyem*, en junio de 2014, y aunque ya se estaba preparando desde unos meses atrás, responde a la misma lógica. Su apuesta es crear dinámicas diferentes en la política local. Su idea es «Esto de Europa está muy bien, pero nosotros vamos a trabajar sobre la realidad más cercana, donde las posibilidades de transformación son mayores». Y no se hace tanto con una lógica CUP³, que es una lógica más bien de «Vamos poniendo piedra sobre piedra y vamos construyendo poco a poco», sino

con una lógica de ir a ganar. Esto, de nuevo, no estaba previsto. Las élites no esperaban que este sector se organizara, que no se conformara con una posición minoritaria, sino que se presentara con la pretensión de ganar, de hacer un *reset*⁴.

Lo interesante de la apuesta municipalista es que hay más oportunidades de conformar nuevos agentes políticos y también la posibilidad de conseguir articulaciones más sólidas que las de arriba abajo, que es la fuerza pero también la debilidad de Podemos.

Las expresiones locales de las elecciones del 24 de mayo toman formas plurales y diversas, lo cual es también un elemento característico de nuestro tiempo. No hay una visión unitaria con una única ideología, pero sí algunos elementos unificadores como por ejemplo la transparencia, el límite de mandatos, la regeneración de la clase política, la intransigencia con los asuntos de participación o el acento en las personas más necesitadas. En cambio, la forma es muy diversa.

3. Referencia a la *Candidatura d'Unitat Popular*, organización política asamblearia y municipalista que se autodeclara socialista, ecologista e independentista. Partiendo de la escala local, ha ido mejorando sus resultados en las últimas elecciones (2003, 2007, 2011 y 2015).

4. Menos de quince días después de realizar esta entrevista, el 24 de mayo de 2015, *Barcelona en Comú* (nombre con el que *Guanyem* Barcelona se presentó finalmente a las elecciones) ganó las elecciones municipales en Barcelona.

Te queríamos preguntar también por otro actor importante en el análisis político de los últimos años: las ONG. En cierto modo, también entre las ONG hay una crisis, en el sentido de cambio de rol. Tradicionalmente habían sido entidades que canalizaban parte de las propuestas de transformación social y eran además recopiladoras de información, pero parece que también están desbordadas. Según tu análisis, ¿cómo está cambiando su rol?

En cierto momento, las ONG fueron la expresión de la capacidad de articulación social al margen de las instituciones, pero la debilidad de las instituciones para resolver problemas sociales en este cambio de época hizo que les fueran atribuyendo no sólo espacios sino también capacidad para proveer servicios. Allí donde las administraciones tenían más dificultades, porque eran rígidas y se movían con más dificultad, encontraron en las ONG una posibilidad de ser más flexibles, más cercanas al terreno. Y, por lo tanto, les transfirieron recursos. Esto evitaba que las administraciones se reformaran y, al mismo tiempo, les permitía conseguir resultados, además de más clientelismo y más legitimación, que ya les venía bien.

Lo que pasa es que esta lógica, que en un momento fue buena para las ONG porque las fortaleció económica y profesionalmente, también las hizo más dependientes y perdieron capacidad reivindicativa. Un ejemplo de los conflictos que hubo entre los diversos roles fue la tensión que se produjo en SOS Racismo, a quien las administraciones pidieron en cierto momento que prestara servicios a los inmigrantes. Un sector de la organización estaba de acuerdo y otro no. Los que estaban a favor de prestar servicios se fueron de SOS Racismo, que quedó configurada como una entidad reivindicativa, que lucha contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), etc. No han querido entrar en la provisión de servicios porque sabían que

hacerlo les acabaría limitando desde el punto de vista más reivindicativo.

También encontramos casos a la inversa. Por ejemplo, el de las organizaciones creadas por familiares de personas afectadas por el SIDA cabreados porque las instituciones no les hacen caso. Después de un tiempo, las instituciones les dicen que presten servicios de asistencia a los enfermos, lo aceptan y cada vez son más proveedores de servicios y menos resistentes.

Si dibujásemos un triángulo de incidencia, resistencia y disidencia, veríamos que muchas ONG se concentraron en la incidencia, en cómo conseguir cambios en algunas normativas, y fueron perdiendo la capacidad de resistencia que en muchos casos las había originado. Pero han dejado espacio para que haya organizaciones que digan: «No, nosotros no sólo queremos tener resistencia, queremos tener capacidad para organizarnos de forma autónoma, es decir, crear disidencia».

En los centros cívicos de Barcelona podemos ver todo el espectro de actitudes. Hay centros donde la gestión está delegada a una empresa para que gestione los servicios. Hay otros centros que están gestionados cívicamente, porque son las organizaciones las que los gestionan con autonomía. Y hay centros, como Can Batlló o Can Vies, que dicen: «Nosotros no queremos saber nada de la administración. Nosotros hacemos nuestra vida».

También aparecen otras propuestas como *Som Energia*, *Som Escola*, *Som Connexió*⁵, etc. Esta primera persona del plural, que también está en *Podemos* y *Guanyem*, que es *somos*, *ganamos*, simboliza esta visión de que somos colectivos que tenemos capacidad propia para organizarnos y resolver los problemas. En este sentido, el ejemplo que todo el mundo cita y que es el más emblemático es la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH no es una ONG. Realiza algunas de las funciones clásicas de las ONG: hace incidencia, se reúne con los políticos, etc., pero también ofrece resistencia:

5. Ver <http://www.somenergia.coop>, <http://www.somescola.cat>, <http://eticom.coop>

hace *scratches*, ocupa espacios, resiste a los desahucios, etc. y además, tiene su Obra Social: ocupa edificios, gestiona viviendas, etc. Y lo hace de manera autónoma, a contracorriente, en formato 15M. Cuando alguien va a la PAH no lo hace como quién va al Ayuntamiento, donde se encuentra con un técnico que le dice que rellene unas hojas y que ya le avisarán cuando sepan algo de su caso. No, intentan convertirle en un militante de la PAH. Le recibe una persona como ella, que ha sido antes desahuciada, que intenta demostrarle que no es un problema suyo sino una estafa, un problema sistémico. Le intenta explicar que su caso forma parte de una categoría de casos y que, por lo tanto, sólo lo resolverá si es capaz de articularse comunitariamente para que todos salgan adelante, no sólo ella. Esto supone claramente un empoderamiento de las personas. Cuando llegan no encuentran una experticia jerárquica, sino una vía para aumentar sus propias capacidades.

Durante muchos años a la Administración se le ha pedido transparencia. Luego, se ha puesto más énfasis en la participación. A tu entender, ¿estamos cambiando a una fase donde el foco se centra en el empoderamiento?

Hay una tendencia a diferenciar lo que es público y las instituciones. En la decisión sobre lo público están las instituciones, pero no sólo las instituciones. Por tanto, una respuesta pública a un problema social es la capacidad colectiva de hacer frente al problema social, con las instituciones o sin ellas. Esta dinámica es un poco distinta de la que había los últimos años. Esta idea de empoderamiento se basa en que no se quiere participar en la elaboración de las políticas públicas; se quiere coproducir las políticas públicas, que es diferente.

Es más, lo que ha pasado con la PAH es un ejemplo de la aparición de una nueva institucionalidad. Ahora, una persona que tenga una amenaza de desahucio puede plantearse ir a una institución que tenga una oficina de mediación

en temas de vivienda o puede ir a la PAH. Los de la PAH dicen que resuelven el 95% de los casos en un plazo mucho más rápido que por otras vías porque ahora les atienden al teléfono las instituciones financieras. Siendo así, ¿dónde va esa persona a buscar la solución a su problema? ¿A la institución o a la PAH? Esto empieza a ser diferente.

Por ejemplo, recuerdo una rueda de prensa del alcalde de Terrassa y Ada Colau (cuando era portavoz de la PAH) en la que proponían soluciones de vivienda para el caso de Terrassa conjuntamente, situándose en el mismo nivel, el alcalde y la PAH. Esto supone un cambio en la lógica más subordinada que tenían las ONG hasta hace pocos años.

¿Hasta qué punto crees que la emergencia de conceptos como la «coproducción política» está conectada con la emergencia de conceptos como el «bien común», que tienen una historia larga, pero que ahora incrementan su visibilidad?

Claro que están conectados, aunque confluyen tradiciones muy diferentes. Polanyi, en *La Gran Transformación* (1944), ya pone de relieve la falacia de que el mercado lo arrastra todo y de que el mercado es la única forma de relación en la sociedad. Señala otras formas como la reciprocidad, la solidaridad, el trueque, la cooperación, etc. que están presentes en la sociedad. La naturalidad del mercado como única forma de intercambio y relación social, el paso de la economía de mercado a la sociedad de mercado, es ahora lo que tiene más resistencias. La reaparición de lo común es una expresión de los límites de lo que presenta lo público convertido en institucional. Tradicionalmente, el conflicto del siglo XX y del XIX ha sido el conflicto entre lo público-estatal y el mercado, y ahora está la reivindicación de que hay un espacio que no se agota en estos términos.

Está claro que hay una coincidencia de tradiciones históricas de pensamiento como la que

hemos comentado, con otros hechos: que Elinor Oström, premio Nobel de economía, reivindique la forma de gestión comunitaria, que es incluso más sostenible; el desarrollo de iniciativas vinculadas con el ámbito digital como Wikipedia, Linux, Creative Commons, etc. que muestran que hay un potencial de producción y conocimiento que no tiene por qué ir ni hacia el ámbito mercantil ni hacia el estatal; la capacidad de resiliencia en el ámbito económico de las iniciativas cooperativas que muestran que hay una lógica de cooperación que va más allá de la competencia y que es más resiliente en el tiempo.

Este conjunto de circunstancias hace que la reaparición del debate sobre lo común sea importante. Hay gente a quién engancha y aparecen reflexiones y acciones diversas como el debate sobre el agua en Italia, o las aportaciones de Negri o de Harvey en el ámbito de lo común. Aquí existe la Fundación de los Comunes⁶, entre otros casos, que va recopilando propuestas. Ahora, por ejemplo, hay una aportación interesante de Jeremy Rifkin con su último libro *La sociedad de coste marginal cero*. Recupera estos elementos de lo común y los vincula a los elementos tecnológicos, dejando muy claro que la tecnología a la que nos acercamos tiene mucho más que ver con cooperar y compartir que con competir. Por lo tanto, hay también una reflexión sobre lo común.

¿Cuáles son, a tu entender, algunos puntos fuertes y débiles de este discurso?

En el concepto de lo común hay elementos fuertes y elementos débiles. Los elementos fuertes son esta idea de que los recursos sean controlados y gestionados por una comunidad; y que, por lo tanto, hay un protagonista, una fuerza que defiende estos recursos y lo hace sin pedir a la administración ni mercantilizar. Pero está claro que esta fuerza, que es una fuerza tradicional, tiene dos problemas: la escala y el grado de cierre o apertura.

6. <http://www.fundaciondeloscomunes.net/>

El problema de la escala es lo que el Estado tradicionalmente había resuelto. Por ejemplo, decía «Oye, eso que has hecho en el ámbito sanitario, donde has conseguido que en este pueblo se pongan de acuerdo y hagan una mutua y resuelvan el problema de la salud, yo te lo organizo a todas las escalas y así, algunos riesgos que tú no puedes asumir a esta escala los asumo yo, siempre que tú pagues impuestos, etc.» ¿Cómo se puede hacer esto desde un punto de vista comunitario? ¿Cómo se organizan estructuras de comunes anidadas?

El otro problema está relacionado con el hecho de que no siempre está claro cuál es la comunidad que gestiona el recurso. La comunidad es un concepto de identidad, de pertenencia, a veces confuso. Harvey habla del «commoning», es decir, que la comunidad son aquellos que están dispuestos a defender un determinado asunto y, por lo tanto, es un concepto abierto, muy vinculado a la movilización y a la acción y, en cierto modo, menos territorializado. Pero claro, en la medida en que abres más el sistema, también lo haces más frágil, con menos fortaleza interna. Michel Bauwens, de la P2P Foundation, está trabajando en la idea de cooperativas abiertas. Es muy importante porque la cooperativa tiene una lógica muy interesante: para evitar que la ganancia del valor creado se diluya, se reintroduce. Sin embargo, esto genera una lógica muy cerrada, hacia dentro. Entonces, ¿cómo conseguir un sistema de cooperación abierto que permita que el valor que genera la cooperativa se pueda compartir más allá sin que sea apropiado por el mercado? Este debate sobre lo común y las tensiones entre lo abierto y lo cerrado es muy importante. El otro es el de la escala.

En el ámbito tecnológico sí se ha avanzado mucho en esta dialéctica entre abierto y cerrado...

Sí, pero sigue habiendo problemas para establecer las métricas de valor y los intercambios. El dinero tiene la fantástica capacidad de simplificar la complejidad y convertir cualquier intercambio en un elemento aparentemente

objetivo que define cuál es el valor que tienen las cosas. Cuando intentas salir de la lógica del dinero y buscar otras formas de relación ya es más complicado. Eso hace que las dinámicas de solidaridad tengan dificultades para definir las formas de medir esta reciprocidad. Hay otras iniciativas, como las monedas alternativas, que buscan reforzar espacios o mercados sociales vinculados a un territorio. También se están buscando fórmulas que ayuden a crear niveles de protección diferentes de lo que consideramos común. Por ejemplo, Creative Commons, que te permite cierta capacidad de control sobre lo que produces y al mismo tiempo, compartirlo. Este es un terreno en el que se está trabajando, pero no se ha resuelto.

En el terreno productivo se están dando algunos cambios importantes, más allá del ámbito informático. Por ejemplo, la producción distribuida. Esto, en cierto modo, forma parte de estos cambios que comentas.

Está claro: lo que produce el cambio tecnológico es la crisis de la intermediación que no aporta valor. Si una institución se basa en la intermediación y esa intermediación puede ser cortocircuitada, superada, porque hay otras maneras de hacerla, esta institución tiene problemas. Estamos hablando de muchos ámbitos, aparentemente distintos. Las fábricas, las agencias de viajes, los partidos políticos, las universidades, etc. son espacios de intermediación. Estamos hablando de una estructura institucional que está en tela de juicio y, por supuesto, en paralelo, aparece el reto de cómo rehacer esta lógica de articulación de valores cuando han surgido también nuevos actores que están precisamente en las autopistas de la conexión. Estos son Google, Facebook, Twitter, etc., instituciones que han puesto su valor en el hecho de que tú circules. Estos actores ya no son prescindibles. Puedes utilizar Facebook, pero hay una apropiación de valor muy importante para ellos. Google ofrece muchas capacidades gratuitas, pero obtiene mucha información. Está

escaneando libros y eso debería hacerlo un Estado, teóricamente, para asegurar el acceso para todos. Dicen que no quieren ganar dinero con los libros, pero ganan dinero con la información que reciben de los libros que tú consultas. Estas nuevas institucionalidades ponen en cuestión las viejas. Por ejemplo, todo el sistema productivo fordista trabajaba sobre la hipótesis de acumular recursos en un ámbito determinado para que esta producción fuera después distribuida. Ahora, lo que tenemos es un conocimiento distribuido y, por lo tanto, lo que circulará son archivos, no productos, porque tendrás impresoras en tres dimensiones que serán las que fabricarán el producto. Este conocimiento, que es lo que tendrá valor, no tiene rivalidad de uso, a diferencia del producto. Puedes utilizar muchas veces el mismo archivo, pero eso no lo puedes hacer con un objeto: o lo tienes tú o lo tengo yo. ¿Cómo se mercantiliza esto?

Estos cambios afectan también de forma considerable a las ciudades. Las urbes responden, hasta cierto punto, a la lógica que, según comentas, se está empezando a superar. Ahora, en muchos sentidos, el intercambio es mucho más flexible.

Sin duda. Ya estamos viendo cambios. Por ejemplo, con Uber o Airbnb, que aprovechan la facilidad de saltarse normativas e intermediarios para hacer negocio. Servicios propios de la ciudad, como el taxi, los hoteles o la movilidad se pueden compartir. Aunque, de hecho, esto ya se daba en el pasado. No es la primera vez que alguien dice «Se alquila habitación», pero ahora lo hace con Airbnb. Tampoco es la primera vez que alguien dice «¿Puedes llevarme ya que vas allí?», pero ahora hay Uber. Lo que es interesante es que lo hacen actores que mercantilizan este proceso, pero se podía hacer también de forma autónoma. Por ejemplo, *Barcelona en Comú* ha planteado que se cree una especie de Airbnb desde la ciudad, con una lógica cooperativa, que la gente se pueda ganar la vida alquilando una

habitación, que no lo capitalicen los hoteles o las cadenas de apartamentos, como ocurre hoy en día. Lo mismo se podría pensar con el modelo Uber, pero claro, esto pone en duda las estructuras de regulación, en este caso del taxi. O sea que esta transición es múltiple. Afecta a todos los ámbitos. Por eso, no hay que caer en la confusión de pensar que internet es un mercado nuevo, es otra realidad.

Esta idea de transición está emergiendo en muchas ciudades...

Sí, iniciativas como las *Transition Towns*⁷ responden a una lógica inteligente de una autarquía conectada. Es decir, deberíamos ser lo más autosuficientes posible y, al mismo tiempo, estar lo más conectados posible. Como una especie de edad media con internet. Es una estructura de ciudades capaz de contener el máximo posible, por ejemplo, mediante el consumo energético de proximidad, de kilómetro cero, pero con una gran conexión entre las ciudades, aprovechando el conocimiento compartido. Efectivamente, la ciudad es a la vez lo más local y lo más global que tenemos. El libro de Benjamin Barber *¿Por qué los alcaldes deberían gobernar el mundo?* dice que cuando se encuentran alcaldes de cualquier ciudad del mundo y se ponen a hablar, hablan de lo mismo; mientras que cuando se reúnen los jefes de estado, hablan de cosas totalmente diferentes.

La idea de ciudad en red, que tomó mucha fuerza en los 90, hasta cierto punto también cambia, ¿verdad? Antes, la idea era la de una ciudad especializada, que se apoya en otras ciudades para crear polos de producción mediante grandes infraestructuras. Ahora esto es un poco distinto.

Sí, porque se tiende a ver las dependencias como riesgos. Por lo tanto, hay que ser capaz

de ser resiliente como ciudad. Esta resiliencia también está muy vinculada a la sostenibilidad. Incluso las monedas locales tienen esta mirada: gastemos aquí dentro, tratemos de apoyar estos aspectos que nos permiten fortalecernos como comunidad. Así ocurre por ejemplo en Bristol. Y todo ello sin poner en peligro la globalización, esta capacidad de aprendizaje cruzado.

El concepto de desarrollo sostenible, lanzado principalmente en los 90, hasta cierto punto, ha ido a menos. Ha ido a más institucionalmente, pero muchos actores consideran que ha perdido capacidad de cambio, de transformación de la sociedad.

Está más institucionalizado. Uno de los defectos que históricamente ha tenido el planteamiento de la sostenibilidad es la aparente contradicción entre democracia y ecología. La democracia se basa en aquellos que deciden hoy, de acuerdo a los problemas de hoy, y la incorporación del futuro es entonces complicada. Sobre todo porque los menores de 18 años, que son los que podrían tener una visión más clara de este factor, no pueden votar. Había aquella propuesta de Demos, el *think tank* laborista, que proponía que se votara desde los 0 años y que los tutores tuvieran tantos votos como niños o niñas tuvieran a su cargo, para tener más en cuenta los problemas de la infancia, ya que ahora, como no pueden votar, sus problemáticas tienen menos peso; y para incluir la dimensión ecológica, de futuro. Cuidado con el efecto sombra que pueden tener estas decisiones en el futuro. Tal vez la propuesta es una tontería pero, en el fondo, pone de relieve el desajuste que hay. A medida que los problemas de subsistencia se hacen más potentes, las dinámicas de sostenibilidad se alejan porque uno está preocupado por el día a día. De todas formas, la sostenibilidad sí se ha introducido en la lógica de la proximidad. Y, en este aspecto, sí ponen énfasis las *Transition Towns*, por ejemplo. Al poner el acento en la proximidad, se está planteando la propuesta de sostenibilidad de una manera mucho más vivida, más vivencial, más cercana.

7. <http://www.transitionnetwork.org/>

No es una retórica. Tiene que ver con la energía, con el agua, con el consumo, con la moneda que nos une, etc. Mediante esta lógica de ir juntos podemos resolverlo; no sólo vendiéndonos lo que tenemos.

Un aspecto que preocupa a colectivos que impulsan esta idea de proximidad es cómo lo utilizan algunos grupos de extrema derecha en conceptos como «primero lo nuestro», «primero los de casa», etc.

El elemento clave es la definición de lo que se considera «los de casa», los de la comunidad. Se puede tener un concepto de ciudad abierta o cerrada. En el fondo, la lógica de Marine Le Pen, por ejemplo, es una lógica obsoleta porque parte de la hipótesis que es posible cerrar una puerta y que dentro tengamos sólo a los franceses. La idea es que Francia es como una gran casa, nosotros somos una gran familia que nos debemos proteger del exterior, y si somos capaces de cerrar la puerta saldremos adelante y si no, no. Pero la pregunta es: ¿Es posible cerrar la puerta? Daniel Rodrik, un economista, habla de la tríada: democracia, globalización y soberanía nacional. Su hipótesis es que de este «trilema» sólo es posible coger dos polos, no los tres. Si quieres globalización y soberanía nacional sacrificarás democracia. La gente votará cosas que no estaba previsto que votasen. Eso es lo que decía un twit después de las elecciones de Grecia: «Esto de que la gente vote se nos ha ido de las manos». Votan cosas que «no tocan». Aquí el sacrificado sería la democracia. Otra opción sería la de la derecha y de los sectores más conservadores en muchos lugares de Europa: soberanía nacional y democracia. Pero entonces sacrificamos globalización y está claro que la globalización ha venido para quedarse. Por lo tanto, queda otra opción: hacer más democrática la globalización, buscar estructuras de rango medio, como Europa, que puedas democratizar sin renunciar a la globalización.

Justamente en relación con esto, da la sensación que si bien en

los 2000 se había fortalecido el análisis crítico de la gobernanza de la globalización, ahora lo que se refuerza es lo local, sin ir acompañado del fortalecimiento de este pensamiento global.

Lo que se ve es que es muy complicado trasladar las lógicas estatales a las globales. No funcionan de la misma manera. Hay que buscar otros mecanismos. Hay gente que piensa en ello: por ejemplo, algunos teóricos en Harvard están planteando escenarios de futuro con un mercado como gran regulador global, las ciudades como núcleo local y en medio no se sabe muy bien el qué. Son elucubraciones. Lo que está claro es que la idea de ampliar la lógica de Estado, por ejemplo, convirtiendo Europa en un Estado, no parece fácil. Si al mismo tiempo quieres heterogeneidad, ¿cómo lo combinas? Los «path dependence» («trayectorias dependientes», en español) de cada país son diferentes. Hemos hecho la moneda única pero deberíamos usar un sistema fiscal único, un sistema social más o menos compartido, etc. Sin embargo, los sistemas de partida son muy diferentes. ¿Cómo se consigue el equilibrio entre estos diferentes ámbitos? No está claro. El proceso de democratización de la Unión Europea es muy experimental. ▀

La dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales

Daniel López-García*, Laura Calvet-Mir**, Josep Espluga***, Marina Di Masso****, Guillem Tendero-Acin***** y Ariadna Pomar-León*****1

Palabras clave: agroecología, transición agroecológica, gobernanza alimentaria, soberanía alimentaria

La Dinamización Local Agroecológica (DLAe) forma parte del paradigma agroecológico, un paradigma alternativo de desarrollo rural que se despliega en tres frentes: como disciplina científica, como conjunto de prácticas de manejo agrario y como movimiento social transformador. La triple propuesta ofrecida por la DLAe

* Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla.

** Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona y Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental Universitat Autònoma de Barcelona.

*** Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona.

**** Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental y Grup de Recerca en Agricultura, Ramaderia i Alimentació en la Globalització, Universitat Autònoma de Barcelona.

***** Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona.

***** Institut de Govern i Polítiques Públiques, Universitat Autònoma de Barcelona.

(dlopgar@upo.es)

1. Los y las autoras del artículo conforman el equipo de coordinación del posgrado en Dinamización Local Agroecológica de la Universidad Autónoma de Barcelona. <http://blogs.uab.cat/dlae2/>

cuestiona el sistema agroalimentario industrial basado en el productivismo e incentiva la soberanía local mediante el análisis de las acciones de los diferentes actores sociales, de sus relaciones de interdependencia y de las formas en las que interactúan con el sistema agroalimentario local, al tiempo que promueve la gestión colectiva y sostenible de bienes comunes como la alimentación, la tierra, las semillas o el agua. La DLAe es una estrategia que promueve la soberanía local porque parte de un enfoque eminentemente territorial y participativo, empoderando a la población local, redefiniendo el papel del Estado y promoviendo la resiliencia de las sociedades locales.

La propuesta de la Dinamización Local Agroecológica

Nos hallamos en un escenario de crisis multidimensional, atribuido al metabolismo urbano-agro-industrial, que se evidencia en el cambio climático, la dificultad creciente de acceso a los combustibles fósiles y otros recursos minerales, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad social y la crisis de los mecanismos de reproducción social (Fernández Durán y González Reyes, 2014). En el sector agroalimentario la promoción de la «modernización agrícola», complementada con

una estrategia específica de «extensión agraria», ha acentuado dicha crisis provocando una homogeneización cultural de la que la pérdida de memoria biocultural es una expresión particular (Toledo y Barrera, 2010; López y Guzmán, 2013).

Para afrontar dicha crisis multidimensional y su expresión en el sistema agroalimentario, la Dinamización Local Agroecológica (en adelante, DLAE) trata de operativizar las propuestas teóricas de la agroecología, articulando sus tres facetas: como disciplina científica, como conjunto de prácticas de manejo agrario y como movimiento social transformador (Wezel *et al.*, 2009). Concretamente, la DLAE es una propuesta práctica de ámbito local para construir un sistema agroalimentario sostenible mediante la promoción de la soberanía alimentaria, la cohesión territorial y social, la reproducción social de las comunidades locales y la conservación de los ecosistemas. En este proceso de transición agroecológica, la DLAE trata de movilizar los actores, los recursos y las capacidades endógenas de las comunidades locales. Pone en el centro de las estrategias de desarrollo local la necesidad de construir redes alimentarias alternativas que se basen en la reactivación de la producción agropecuaria, el protagonismo del campesinado, el conocimiento ecológico tradicional y el fortalecimiento de los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización. Y trata de reforzar la capacidad y el derecho que tienen las comunidades locales para decidir cómo y con qué finalidad se deben gestionar algunos de los bienes comunes más básicos, como son la alimentación, la tierra, las semillas o el agua. En definitiva, la DLAE construye a nivel local respuestas a los desequilibrios que generan el sistema agroalimentario industrial y las políticas de desarrollo económico convencionales. Para ello se articulan metodologías participativas de investigación-acción junto con otros métodos y técnicas de investigación y dinamización provenientes de distintas disciplinas.

La alimentación: punto de encuentro temático para la sostenibilidad local

La alimentación se ha convertido en un importante «punto de encuentro temático» para distintos procesos y movimientos sociales y políticos alternativos (Renting y Wiskerke, 2010). La emergencia en distintos países y territorios de políticas integrales e intersectoriales vinculadas con la alimentación (como las estrategias alimentarias locales) abre un nuevo espacio político en el que se reconfiguran los protagonismos y las relaciones de poder. En este contexto, la DLAE aparece como una respuesta al anhelo de radicalidad democrática que están expresando sectores cada vez más amplios de la sociedad. Desde el enfoque de la DLAE se insiste en promover la participación en la identificación y definición de los retos a superar en el sector primario y el ámbito local, en el diseño de las estrategias para superar esos retos, y en la toma de decisiones sobre qué medidas y estrategias se implementarán y cómo.

La DLAE se inserta en una corriente más amplia de construcción de autonomías locales y de proyectos políticos que reconstruyen lo comunitario a partir de nuevas estructuraciones de los flujos económicos (Holloway, 2003; Zibechi, 2011; Holt-Giménez, 2013). Nos situamos en una corriente que plantea el ejercicio de la soberanía local como proceso de desmercantilización de la economía, para poner la vida en el centro de los procesos sociales (Borderías *et al.*, 1994; Pérez-Orozco, 2014) y reconstruir así comunidades locales. En este sentido, nos apoyamos en las líneas teóricas que han puesto el acento en la persistencia de espacios sociales y económicos no-mercantilizados bajo la hegemonía capitalista (estudios post-coloniales, economía ecológica, economía feminista, neopopulismo ecológico, recampesinización), para tratar de amplificar estos espacios y construir propuestas de futuro más allá de la mera supervivencia.



Taller con productores implicados en RAA. II Seminario en Circuitos Cortos de Comercialización, Estella-Lizarrá, 2013 (Fuente: Ecologistas en Acción)

Recursos, flujos y conocimientos locales

Del cruce de las perspectivas territorial y de cadena productiva surge una propuesta de manejo de los recursos locales para el sostenimiento y la reproducción de la vida. Así, las nuevas arquitecturas institucionales que se promueven han de ser capaces de articular a los distintos actores presentes en el entorno local, así como sus distintos intereses, alrededor del proyecto local de construcción de sostenibilidad. En el marco de la DLAE, se identifican dos bloques de contenido centrales para lanzar procesos territoriales de transición agroecológica: las Redes Alimentarias Alternativas (RAA) y el Conocimiento Ecológico Tradicional (CET).

Las RAA construyen intereses comunes entre actores locales agrarios y no agrarios, en torno a la producción y circulación de los alimentos de proximidad. A su vez, permiten un reequilibrio en las relaciones de poder entre los actores locales y extra-locales. En efecto, más allá de la referencia al territorio como estrategia de diferenciación de un producto frente a los mercados globales, las redes alimentarias alternativas permiten construir flujos sociales para la desmercantilización de las economías, vinculándose a territorios concretos pero potencialmente extensos. Es decir: la DLAE trata de articular los sujetos y flujos en las distintas escalas de análisis en base a nuevas configuraciones de lo territorial, de forma que

sean las comunidades locales las que mantengan el poder sobre los productos sociales en circulación.

Las RAA suponen una defensa de las producciones locales frente al mercado global, pero son sobretudo un laboratorio de nuevas formas de organización social mediante las cuales se trata de trascender el valor de cambio para construir valores de uso y, en definitiva, comunidad (López-García, 2015). En este sentido se promueven las redes de consumo y de pequeños establecimientos (tiendas tradicionales, restaurantes, etc.) que apoyan el producto local: las redes locales de personas productoras (en sus muy diversas formas) y especialmente las redes territoriales que día a día construyen la soberanía alimentaria en el ámbito local y regional, articulando sistemas agroalimentarios locales basados en los principios de radicalidad democrática, sostenibilidad y justicia ecosocial.

La literatura sobre RAA es extensa, y las prácticas que dan cuerpo al concepto son muchas y muy diversas. En el Estado Español encontramos realidades como las redes de grupos de consumo que se articulan en las aglomeraciones metropolitanas de manera informal; o a través de encuentros (La Repera en Catalunya, La Rehuerta en Madrid, o los encuentros organizados por Ecologistas en Acción a nivel estatal); o mediante estructuras formales como la FACPE en Andalucía o Ecoconsum en Catalunya. También encontramos redes que articulan producción y consumo en las que el sector productor lidera, como ARCo (impulsado por el sindicato COAG), Nekasarea (Bizkaia) y muchas otras en distintas provincias y Comunidades Autónomas. Por último, encontramos redes territoriales más o menos formales y que en muchos casos trascienden la mera circulación de alimentos para liderar procesos integrales de transición agroecológica, como la promovida por ASACAM en Ciudad Real; los proyectos que se han creado en torno a l'Escola de Pastors de Catalunya; o las redes comarcales vinculadas con el pequeño comercio que se están creando en Andalucía a través del proyecto de «territorialización del comercio» (López-García y Tendero, 2013; López-García, 2015).

Por su parte, el Conocimiento Ecológico Tradicional y las variedades agrícolas tradicionales pueden tener un importante papel en los procesos de DLAe. Estudios científicos en los diversos lugares del Estado Español (Aceituno-Mata 2010, Calvet-Mir 2011) han corroborado que agroecosistemas como los huertos tienen asociada una gran cantidad de conocimiento ecológico tradicional. También se ha visto que este conocimiento contribuye a la gestión de dichos agroecosistemas y a la preservación de la diversidad biocultural. Por ejemplo, en dos estudios en el Pirineo Catalán (Calvet-Mir *et al.* 2010, Riu-Bosoms *et al.* 2012) se encontraron más de 50 refranes y prácticas concretas asociadas tanto a la gestión y los usos de los cultivos como al manejo general de los huertos.



Horticultor junto a una variedad tradicional de calabaza en la Vall Fosca, Pirineo Catalán
(Autora: Laura Calvet Mir)

Uno de los principales escollos que se presentan al intentar activar la transición agroecológica es que la lógica dominante de la agricultura industrial ha invisibilizado ciertas formas alternativas de vivir de la agricultura y la ganadería que de hecho existen en el presente. El CET, además de aportar soluciones prácticas para el manejo agrario sostenible (Toledo y Barrera-Bassols, 2008), resulta imprescindible para reconstruir, en las comunidades rurales, nuevas identidades híbridas que combinen los rasgos campesinos que aún subsisten y las identidades globalizadas ligadas a la agricultura industrial, para construir en el presente nuevas propuestas

alternativas (López y Guzmán, 2012). La puesta en valor de las variedades, los saberes o las herramientas tradicionales puede provocar cambios en el imaginario y la autoestima colectivas que faciliten la dinamización del sector agrario hacia procesos de transición agroecológica. A su vez, esta memoria biocultural es un elemento central en la puesta en marcha de estrategias productivas sostenibles a nivel de finca.

Redes de actores y relaciones de poder

Las redes sociales operan en muchos niveles y juegan un papel crítico en la determinación de la forma en que se resuelven los problemas sociales. En el campo de la gestión de los recursos naturales, se ha demostrado que las características estructurales de los procesos sociales, como por ejemplo los diferentes niveles de colaboración entre personas, son claves para una gestión sostenible de los ecosistemas (Bodin y Prell, 2011). La densidad y el grado de estructuración de estas redes (más allá de las organizaciones formales) son aspectos que juegan un papel fundamental en los procesos clave de la transición agroecológica, como la conservación y reproducción de la agrobiodiversidad (Zimmerer, 2003; Calvet-Mir *et al.*, 2012); y resultan asimismo centrales en la articulación de Redes Alimentarias Alternativas y procesos de Desarrollo Rural Endógeno (Ploeg y Marsden, 2008). Estos aspectos se trabajan de manera prioritaria mediante la estrategia metodológica que despliega la DLAe, ya que el sistema agroalimentario está fuertemente atravesado por relaciones de poder; y el poder «no es más que una configuración determinada de relaciones sociales» entre sujetos, cuyos vínculos son más fáciles de transformar que los sujetos en sí (Villasante, 2006).

Las redes sociales son la materia prima para el trabajo en DLAe, y las metodologías participativas de investigación-acción la herramienta sobre la que se diseñan los procesos de transición. Sobre un armazón central participativo es posible articular técnicas cuantitativas y cualitativas procedentes de distintas metodologías, para abrir procesos de acción-reflexión-acción desde

la lógica de hacer ciencia con la gente, y situar el protagonismo en las comunidades locales. La estrategia participativa se adapta al trabajo específico con distintos grupos sociales y subjetividades presentes en cada territorio, con especial atención a los grupos subalternos (mujeres, jóvenes, migrantes, neo-rurales, etc.) y a la movilidad de sujetos en el entorno local. También a distintos ámbitos de la realidad como el manejo productivo en finca, la circulación de los alimentos o el conocimiento local. Sin embargo, cobra una mayor profundidad cuando se aplica a procesos integrales de dinamización territorial.

Un ejemplo de dinamización territorial a escala municipal se desarrolló en Morata de Tajuña (Madrid) entre 2006 y 2009, articulando en un mismo proyecto participativo la creación de estructuras colectivas para la transformación del producto agrario y la comercialización; la mejora de las condiciones en las contrataciones de personas jornaleras; la introducción de actividades formativas de perspectiva agroecológica en los centros educativos locales; y la recuperación de CET como herramienta de la transición agroecológica. A escala comarcal encontramos otras referencias en Las Alpujarras (Granada) y en la Vega de Granada, con el diseño e implementación del Plan Estratégico comarcal de Agricultura Ecológica; pero encontramos proyectos incipientes con este enfoque en diversas comarcas andaluzas, catalanas y en Euskadi (Cuéllar y Calle, 2011; Guzmán *et al.*, 2013; Pomar y Tendero, 2015).

La DLAE como estrategia para la soberanía local

En definitiva, la DLAE promueve la soberanía local al menos por dos vías: en primer lugar, a través de una aproximación territorial a los sistemas socio-ecológicos y de una redefinición de su relación con los organismos estatales, cuyo papel pasa a ser sobre todo de acompañamiento de las iniciativas locales, (i) favoreciendo la participación y el empoderamiento de la población local; y (ii) potenciando nuevas institucionalidades sociales para avanzar hacia la gobernanza



Actividades de educación agroecológica con escolares de Morata de Tajuña, Madrid (Autor: Daniel López)

alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios locales.

En segundo lugar, aumentando la resiliencia (es decir la capacidad de una sociedad de recuperarse frente a impactos externos) de las comunidades locales mediante la construcción de entramados de relaciones que articulan a los distintos actores del contexto local y a estos con los agroecosistemas, a la vez que articulan distintas escalas de análisis. El enfoque participativo de la DLAE permite construir arreglos específicos de transición agroecológica, de acuerdo a objetivos comunes contruidos a lo largo de cada proceso particular. A través de este enfoque se pretenden conseguir transformaciones combinadas en el corto, medio y largo plazo que reviertan las dinámicas insostenibles, injustas y antidemocráticas que los metabolismos urbano-agro-industriales generan, tanto en la escala global como en el ámbito local.

Actualmente nos encontramos en un punto de inflexión derivado del agotamiento del modelo clásico de desarrollo rural, que no ha conseguido revertir las tendencias de despoblamiento, pérdida de población activa agraria, pérdida de calidad alimentaria, etc. Las pequeñas pero cada vez más numerosas iniciativas de DLAE ya existentes se están convirtiendo, como punto de encuentro temático, en un poderoso referente para muchos sectores sociales interesados en recuperar soberanías locales a través de la desmercantilización de la economía y de la democracia radical. Además,

nos acercan a una actividad agraria sostenible, una alimentación justa y de calidad, un mundo rural vivo e interconectado, y unas relaciones entre campo y ciudad construidas en base a la diversidad y la justicia sociales. ■

Referencias

- ACEITUNO-MATA L. (2010). *Estudio etnobotánico y agroecológico de la Sierra Norte de Madrid*. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España.
- BODIN, Ö., y PRELL, C. (Eds.) (2011). *Social Networks and Natural Resource Management. Uncovering the Social Fabric of Environmental Governance*. Cambridge University Press: New York.
- BORDERÍAS, C., CARRASCO, C. y ALEMANY, C. (Eds.) (1994). *Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales*. Barcelona: Icaria.
- CALVET-MIR L., CALVET-MIR M. y REYES-GARCÍA V. (2010). «Traditional ecological knowledge and landraces *in situ* conservation in high mountain home gardens of Vall Fosca, Catalan Pyrenees, Iberian Peninsula». En: M.L. Pochettino, A.H. Ladioand P.M. Arenas (Editors), *Tradiciones y transformaciones en etnobotánica*. CYTED, Argentina, pp. 457-464.
- CALVET-MIR, L. (2011). *Beyond food production: Home gardens as biocultural conservation agents. A case study in Vall Fosca, Catalan Pyrenees, northeastern Spain*. PhD Thesis. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain.
- CALVET-MIR, L., CALVET-MIR, M., REYES-GARCÍA, V. y MOLINA, J.L. (2012). «Seed exchange as an agrobiodiversity conservation mechanism: A case study in Vall Fosca, Catalan Pyrenees, Iberian Peninsula». *Ecology and Society*, vol. 17(1): 29
- CUÉLLAR, M. y CALLE, A. (2011). «Can we find solutions with people? Participatory action research with small organic producers in Andalusia». *Journal of Rural Studies*, vol. 27, pp. 372-383.
- FERNÁNDEZ DURÁN, R. y GONZÁLEZ REYES, L. (2014). *En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no sólo)*. Tomo 1. Madrid: Libros en Acción.
- GUZMÁN, G.I., LÓPEZ-GARCÍA, D., ROMÁN-BERMEJO, L. y ALONSO, A.M. (2013). «Participatory Action Research in Agroecology: Building Local Organic Food Networks in Spain». *Agroecology and Sustainable Food Systems*, vol. 37(1), pp. 127-146.
- HOLLOWAY, J. (2003). *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*. Barcelona: El Viejo Topo.
- HOLT-GIMÉNEZ, E. (Ed.) (2013). *¡Movimientos alimentarios unidos! Estrategias para transformar nuestros sistemas alimentarios*. Barcelona: Icaria.
- LÓPEZ-GARCÍA, D. (2015). *Producir alimentos, reproducir comunidad. Redes alimentarias alternativas como formas económicas para la transición social y ecológica*. Madrid: Libros en Acción.
- LÓPEZ-GARCÍA, D. y GUZMÁN-CASADO, G. (2012). «Si la tierra tiene sazón... El conocimiento tradicional campesino como movilizador de procesos de transición agroecológica». *Agroecología*, vol. 7 (2), pp. 7-20.
- LÓPEZ-GARCÍA, D. y GUZMÁN-CASADO, G. (2013). *Metodologías participativas para la transición agroecológica*. Catarroja: SEAE.
- LÓPEZ-GARCÍA, D. y TENDERO, G. (2013). *Sembrando alternativas. Pequeño manual para la dinamización local agroecológica*. Barcelona: ASAC-IGOP-Fundació ENT-Ecologistas en Acción.
- PÉREZ-OROZCO, A. (2014). *Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida*. Madrid: Traficantes de Sueños.
- PLOEG, J.D. y MARSDEN, T. (Coords.) (2008). *Unfolding webs. The dynamics of regional rural development*. Assen: Van Gorcum.
- POMAR, A. y TENDERO, G. (2015). *Ja volem el pa sencer. Respostes a la pobresa alimentària en clau de Sobirania Alimentària*. Barcelona: ASAC.

- RENTING, H. y WISKERKE, H. (2010). «New Emerging Roles for Public Institutions and Civil Society in the Promotion of Sustainable Local Agro-Food Systems». 9Th European IFSA Symposium. Vienna.
- RIU-BOSOMS, C. (2012). *El coneixement ecològic local en la gestió dels horts: Com es transmet? Un cas d'estudi entre els hortolans de la vall de Gósol. Pirineu Català. Península Ibèrica*. Tesis de máster. Universitat Autònoma de Barcelona.
- TOLEDO, V.M. y BARRERA-BASSOLS, N. (2008). *La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria.
- VILLASANTE, T. (2006). *Desbordes creativos. Estilos y Estrategias para la transformación social*. Madrid: La Catarata.
- WEZEL, A., BELLON, S., DORÉ, T., FRANCIS, C., VALLOD, D. y DAVID, C. (2009). «Agroecology as a science, a movement and a practice. A review». *Agronomy for sustainable development*, vol. 29, pp. 503-515.
- ZIBECHI, R. (2011). *Territorios en resistencia. Cartografía política de las periferias urbanas latinoamericanas*. Barcelona: Virus-Zambra.
- ZIMMERER, K.S. (2003). «Geographies of seed networks for food plants (Potato, Ulluco) and Approaches to Agrobiodiversity Conservation in the Andean Countries». *Society and Natural Resources*, vol. 16, pp. 583-601.

¿Certificación ‘de papel’ o de relaciones humanas?

Los sistemas de garantía participativa como iniciativas de soberanía alimentaria local

Mario Coscarello* y Beatriz Rodríguez-Labajos**

Palabras clave: sistemas de garantía participativa; certificación ecológica; agricultura ecológica, economía social y solidaria; soberanía alimentaria, Italia

¿Qué son los sistemas de garantía participativa?

El auge de los mercados de productos ecológicos parece generar la necesidad de garantizar estándares de producción a los consumidores. De ahí la aparición de distintos sistemas de certificación ecológica¹. El más difundido, el sistema de certificación por tercera parte (CTP), generalmente involucra a un ente regulador, que establece normas de producción, y entes certificadores independientes formalmente acreditados, que las verifican.

La CTP posibilita que productores ecológicos

* Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università della Calabria (mario.coscarello@unical.it)

** Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona (beatriz.rodriguez@uab.cat)

1. Siguiendo a Cuéllar (2008: 69), los cuatro sistemas existentes son: la ‘*garantía por primera parte*’ o autocertificación, que depende del compromiso declarado de los productores; la ‘*garantía por segunda parte*’, en la que actores que adquieren el producto (como los comercializadores) se aseguran del cumplimiento de las normas; la ‘*garantía por tercera parte*’, en la que una entidad acreditada externa garantiza el cumplimiento de la normativa; y finalmente, el ‘*Sistema de Garantía Participativa*’ que se describe en este artículo.



Cultivo de dos ecotipos de trigo antiguo (‘Gentil Rosso’ y ‘Senatore Cappelli’) en modalidad ecológica en el sur de Italia (Autora: Alessandra Corrado)

y consumidores con preocupaciones de consumo ético o agroecológico estén, de hecho, desconectados a pesar de su relación con la misma mercancía. En la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, este sistema es el único institucionalmente reconocido (Velleda Caldas y Sacco dos Anjos, 2014). Si bien resultan ventajosos a la hora de llevar productos a los mercados de exportación, los sistemas de CTP son costosos, burocratizados y no reconocen diferencias entre tipos de productores o territorios. Así, un pequeño campesino – acostumbrado a un proceso de tutela de la agrobiodiversidad propio de las condiciones ambientales y e identidades territoriales de su región –, está sometido exactamente a los mismos estándares que un empresario que maneje varias hectáreas de producción orientada a la exportación. En el extremo, la CTP para actividades agroindustriales ha llegado a causar importantes conflictos locales (como en el caso de la certificación de plantaciones de árboles en Brasil).

Según la red ILEIA², unos 400 millones de campesinos utilizan técnicas tradicionales y ecológicas a nivel global, mientras que sólo 1,8 millones están certificados por terceros. ¿Qué explica esta brecha? El coste de las entidades de control y las dificultades inherentes a procesos burocráticos son razones frecuentemente aducidas. No obstante, hay que subrayar la limitada inserción mercantil de la agricultura a pequeña escala que, por otro lado, tiene una enorme relevancia en términos de alimentación. De hecho, el grueso de los alimentos a nivel mundial se originan en pequeñas unidades de producción, bien sea campesina (50%), agricultura urbana (7,5%) o procesos de caza y recolección (15,5%) (ETC, 2009).

Este artículo enfatiza la alternativa que suponen los sistemas de garantía participativa (SGP), no sólo para superar algunas limitaciones de los sistemas CTP, sino también para fortalecer de manera sinérgica a movimientos sociales, apuntalando además las bases de una soberanía alimentaria local y regional. La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM³, por sus siglas en inglés) define los SGP como «*sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores tomando como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento*». El propio IFOAM sugiere ciertos principios estructuradores de los ejercicios de SGP, en particular la participación activa del productor, el desarrollo de una visión compartida, la transparencia, la confianza, la horizontalidad, la responsabilidad compartida y el fomento al aprendizaje. En América Latina, donde los SGP operan desde hace más de una década, se han definido como sistemas solidarios de generación de credibilidad que surgen como actividades en red vinculando a los productores y a los consumidores a través de sus propias relaciones de confianza local (Mance, 2003).

2. ILEIA - Centre for learning on sustainable agriculture (www.ileia.org)

3. International Federation of Organic Agriculture Movements (www.ifoam.bio)

La historia (breve) de los sistemas de garantía participativa

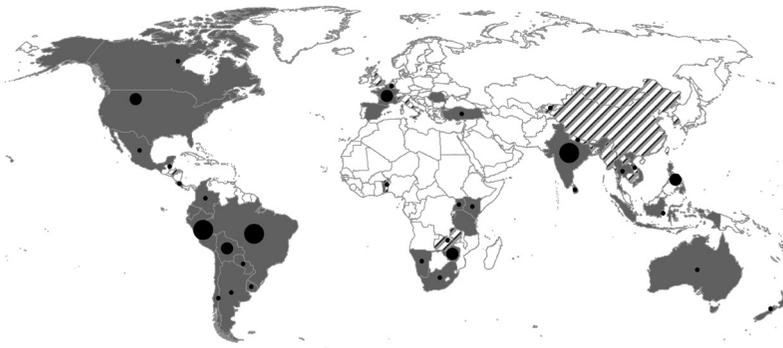
Como tantas otras innovaciones institucionales de apoyo a los movimientos de base, los SGP prosperan inicialmente en el Sur global. Aunque la experiencia de organizaciones como Nature & Progrès, en Francia, se remonta a los setenta, es en 2004 en Brasil cuando un taller internacional sobre certificación alternativa sirve de catalizador para el impulso formal a los SGP en diferentes países. El caso brasileño se ha analizado de manera exhaustiva (véase, por ejemplo, Sacco dos Anjos y Velleda-Caldas, 2014; Velleda-Caldas, 2013), siendo tal vez su rasgo más destacado la aceptación institucional de la que gozan los SGP, lo que ha reforzado su expansión. Paulatinamente, lo mismo ha sucedido en otros países de Latinoamérica.

India es otro país con amplia aceptación de los SGP, iniciados a partir de 2006. Allí los SGP prosperan, pese a que el marco legal no los reconoce formalmente, ya que se admiten declaraciones voluntarias de productos orgánicos para el mercado interno. Dos sistemas, uno gubernamental y otro promovido por ONGs, apoyan a alrededor de 5200 productores. Las claves de este caso están en la implicación de redes preexistentes de organizaciones campesinas, que resuelven de manera práctica retos como la traducción de materiales a múltiples idiomas locales, la adaptación a tradiciones de producción y prácticas socio-culturales diversas, y el remedio al desconocimiento de estándares de producción ecológica (Castro y Kirchner, 2013). Es posible que los SGP resulten una opción más eficaz para estos contextos muy diversificados que una CTP estandarizadora.

En Europa, la federación francesa Nature & Progrès (2007) ha impulsado décadas formas asociativas de certificación, destacando sus ventajas en lo relativo a la difusión de información, la transparencia y el control civil, a partir de la implicación activa de los consumidores en el conocimiento de las prácticas de los productores asociados al sistema. En España, hay diversas iniciativas de SGP con raíces en planteamientos agroecológicos de larga tradición, particularmen-

te en Andalucía. No obstante, su implantación se ha visto dificultada por la dominancia de la CTP, inducida por los sistemas de incentivos de la Política Agraria Común (Velleda Caldas et al., 2014).

Actualmente, la región del mundo con mayor implantación de los SGP (Figura 1) es, claramente, América Latina, donde no sólo existe un mayor número de países con sistemas esta-



Mapa de experiencias de SGP (Fuente: IFOAM, 2015)

Legenda: área gris – Países con SGP consolidados; área con línea quebrada – Países con SGP en desarrollo;

- hasta 500 productores, ● 501 hasta 1500 productores;
- 1501 hasta 5200 productores

blecidos sino también un mayor número de productores. Cabe subrayar la expansión del sistema en la región Asia-Pacífico, donde hay varios casos de SGP en desarrollo. En Europa, el país con mayor número de productores en SGP es Francia, y hay SGP en fase de desarrollo en Italia y el Reino Uni-

do (IFOAM, 2015). Sintetizando la experiencia de diferentes países, Cuéllar (2008) y Ruggeri (2011) señalan las diferencias entre los SGP y la CTP (Tabla 1).

Tema	Certificación por tercera parte	Sistemas de Garantía Participativa
¿Quién solicita la garantía?	Entidades legalmente constituidas	Asociaciones formales e informales
¿Ámbito territorial?	De local a internacional	Fundamentalmente local y regional
¿Destino de la producción?	Diverso, enfoque en la exportación	Fundamentalmente local
¿Tipo de responsabilidad en la garantía de la calidad?	Individual (del ente certificador, del agricultor), eventualmente grupal	Colectiva y compartida
¿Financiamiento?	Autofinanciamiento vía ventas	Trabajo voluntario (reduce costes), donaciones, porcentaje de ventas o cuotas (diferenciadas)
¿Carácter de la participación?	Guiada por valores de mercado, no discriminatoria	Guiada por un plano de acción político-social
¿Cómo se fija el estándar?	Normas detalladas, fijadas externamente conforme a la ley y aceptadas pasivamente por el productor. No incluyen aspectos sociales (p.e. condiciones laborales)	Estándares poco detallados (p.e. conjunto de principios) que pueden vulnerar la normativa. Construidos y decididos colectivamente por los integrantes de la asociación. Incluyen normas sociales, laborales y de comercio justo
¿Quién certifica?	La entidad de certificación externa	El colectivo de productores, de manera descentralizada
¿Quién controla el proceso?	Expertos externos, con base en información documental (a una muestra), control sumario	Autocontrol y valoración recíproca, aprendizaje y búsqueda de mejora progresiva

Tabla 1. Certificación por tercera parte y sistemas de garantía participativa, comparados (Fuente: Adaptado de Cuellas, 2008: 76 y Ruggeri, 2011: 22)

En definitiva, en algunos países los SGP han funcionado durante años e incluyen a muchos productores, y en otros países están en fase de desarrollo. Éste último es, precisamente, el caso de estudio abordado en la siguiente sección. La selección de esta experiencia, un SGP sin reconocimiento formal por IFOAM, es deliberada, y busca reflexionar sobre cómo las iniciativas en desarrollo pueden contribuir a construir un proceso social que apoye de manera efectiva a la soberanía alimentaria local.

Un caso: asociación CampiAperti y la campaña Genuino Clandestino en Italia

El caso aquí presentado se trata de uno de los primeros SGP en Italia. Tiene una relevancia destacada, ya que ha adquirido una adhesión significativa y se ha expandido al nivel nacional.

La experiencia empieza en 2001, como movimiento informal de apoyo a la agricultura biológica y campesina impulsado desde un colectivo de estudiantes, que crearon la asociación CampiAperti en 2007 en Bolonia. Cuenta con unos 200 socios, entre productores (aproximadamente 40) y consumidores (fundamentalmente urbanos) que comparten principios asociativos enunciados en documentos de base (*Carta de Principi, Regolamenti dei Mercati*) (CampiAperti, 2014).

En 2010, fundan el movimiento *Genuino Clandestino*⁴ que reúne a alrededor de 30 organizaciones de otras partes de Italia, y otras tantas adhesiones de asociaciones a nivel territorial. El calificativo 'genuino' alude a sus prácticas de producción, totalmente naturales y biológicas. Se autodesignan 'clandestinos' para ubicarse deliberadamente fuera de los sistema de negocio agro-industrial. Se proyectan como alternativa al sistema capitalista, a partir de proyectos concretos de pequeños y medianos productores, generalmente en torno a la agricultura familiar. Sus motivaciones son diversas, si bien manifiestamente asocia-

das a valores políticos como el acceso a la tierra como bien común, la construcción de comunidades territoriales, o la soberanía alimentaria local, en el marco de la red de economía solidaria italiana (Genuino Clandestino, 2010).



Logo para el etiquetaje de los productos de Genuino Clandestino, donde se lee «Comunidad(es) en lucha para la autodeterminación alimentaria» (Fuente: Genuino Clandestino, <http://genuinoclandestino.noblogs.org/>)

Entre sus objetivos principales se encuentra la creación de un SGP, un sistema de 'control participativo' que ha venido evolucionando desde prácticas de certificación asociativa en los mercados biológicos boloñeses desde 2002. En ese entonces, y reconociendo los límites de la certificación oficial, se buscó generar una forma de garantía sencilla, pero eficaz, con objetivos de sostenibilidad ambiental y social. Los productores que desearan participar debían presentar en la asamblea su caso y su modalidad de producción. De ser aceptado, el productor podía vender en mercado incluso sin contar con una CTP.

Este sistema pronto enfrentó problemas de participación deshonesto (con CTP o no), lo que exigió generar una nueva estrategia. Se dio impulso a un reglamento más preciso, cuya norma

4. Movimiento Genuino Clandestino (www.genuinoclandestino.noblogs.org)

fundamental era la producción biológica propia. La autorización a participar en el mercado se otorgaba sólo a personas que gozaran del conocimiento directo de toda la comunidad. Surge así una responsabilidad colectiva, compartida y abierta al cambio.

Hoy por hoy, cuando un nuevo campesino se pone en contacto con CampiAperti debe hacer una declaración que describe sus propios productos, garantizando su origen ecológico, informa los mercados en los que va a participar, y se hace responsable de informar a los integrantes del movimiento sobre posibles cambios en sus procesos de producción o mercantiles (CampiAperti, S.F). Actualmente, se llevan a cabo cuatro mercados autogestionados semanales en diferentes barrios de Bolonia. Cada uno tiene una asamblea propia que, tras leer la declaración, admite o no al productor. Se organiza una visita obligatoria a la finca (*via dei campi*), con la participación del mayor número posible de personas, que examinan diversos aspectos de la producción, incluyendo los laborales. Tras la visita, la asamblea autoriza o no, con algunas consideraciones. El aumento en la oferta de productos del mismo tipo no se percibe como una competencia entre productores, sino como una forma de aumentar la comunidad, tanto de productores como de consumidores, de productos biológicos.

El control participado del SGP no empieza con la visita, sino cuando el productor lleva sus productos al mercado y expone una ficha con su declaración. Ello informa sobre las condiciones de producción a los consumidores y sirve para facilitar la supervisión. Los productores se autocontrolan, al tiempo que se inicia un proceso de intercambio de conocimiento (de tecnologías, métodos de control de plagas, etc.). El sistema incluye mecanismos para resolver problemas prácticos de tipo colectivo, como la reducción de residuos.

De esta manera, el proceso de certificación involucra ciertamente una certificación documental, pero, claramente descansa en las relaciones humanas, en particular la confianza, el respeto, y el hecho de compartir. En 2014, como parte de un esfuerzo de conexión, integrantes del mo-

vimiento Genuino Clandestino organizaron un viaje por toda Italia que buscaba un encuentro entre campesinos e intercambio de experiencias. La experiencia quedó documentada en el libro *Viaje por las agri-culturas resistentes en el tiempo de las grandes obras* (Potito et al., 2015).

Reflexión: Las condiciones para un SGP en apoyo a la soberanía local

El presente artículo se encuadra en un tema de primer orden, la agricultura y la alimentación, en el que la subordinación local a sistemas externos puede tener efectos demoledores. Las iniciativas alimentarias locales abren posibilidades para pequeños productores y permiten hacer del consumo de alimentos ecológicos y de proximidad algo cotidiano.

En este sentido, los SGP son un sistema en expansión que subsana las tensiones asociadas a la CTP en algunos contextos. Las iniciativas concretas de SGP no aspiran a integrar productores más allá de su ámbito local o regional. Serían, pues, una herramienta más de apoyo a la agricultura familiar que resultan fácilmente adaptables a canales cortos de comercialización. No buscan el control de los productores, sino su inclusión – paulatina, si es necesario –, en un conjunto de prácticas agroecológicas.

Constituyen una forma evidente de fortalecer la gobernanza del sistema alimentario. Un paso más allá del eslogan ‘visión global, acción local’, los SGP son mecanismos institucionales que operan a pequeña escala, están relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, pero cuentan con un enorme capacidad adaptativa a la diversidad local y un gran potencial articulador a través de redes de relaciones humanas a diferentes escalas. Tienen la vocación de vincular la vida urbana con el mundo rural.

A partir de los datos presentados, cabe destacar que los SGP no siempre prosperan en todos los lugares donde se ha buscado su implantación. Para que la experiencia fructifique, la existencia de redes de confianza, en el marco de la economía solidaria, parece una condición previa a la implantación de los SGP. Éstos tienen sentido

allí donde las relaciones sociales preexistentes facilitan el intercambio entre productores y consumidores. Muchas de las iniciativas, y en particular el caso italiano presentado, surgen desde un proceso que inicialmente involucra movimientos locales, que se agrupan como asociación y, posteriormente, se expanden en su ámbito nacional inmediato.



Productos artesanales de un mercado campesino en Calabria (Autor: Mario Coscarello)

Están acompañados de un grupo de consumidores críticos, que normalmente apoya redes de economía solidaria. El consumidor, en su decisión de adquirir un determinado producto, no lo hace por que está amparado por un sello de calidad, más o menos reconocido, sino porque participa de una red de relaciones sociales que, de manera material, se expresa en el producto adquirido. Así, los SGP requieren, y al la vez fomentan, un cambio real en las relaciones sociales y materiales de producción.

Cuando el movimiento es capaz de desarrollar estas prácticas, el objetivo deja de ser el reconocimiento formal o la creación de un sello de calidad, sino el crecimiento de las relaciones humanas. Los SGP (re)construyen comunidades locales con claras motivaciones políticas y en ciertos valores (como antifascistas o antisexistas en el caso de *Genuino Clandestino*), desde el fomento a las relaciones humanas y de manera vinculada a acciones concretas. Un SGP basado en fuertes relaciones de confianza y de intercambio no requiere una formalización (como el

reconocimiento de IFOAM) que puede incluso no ser bienvenida por algunos movimientos sociales. En definitiva cada iniciativa de SGP es un mecanismo de apoyo a la soberanía alimentaria local que, por su enfoque en las relaciones humanas, constituye una semilla de inspiración para un pensamiento alternativo sobre la agricultura y la alimentación en nuevos lugares. ▀

Referencias

- CAMPIAPERTI (2014), Documenti. www.campiaperti.org, consultado el 10 de abril de 2015.
- CAMPIAPERTI (S.F) Documenti SGP – documentos internos de referencia para los miembros de Genuino Clandestino.
- CASTRO F., KIRCHNER, C., (2013), *Participatory Guarantee Systems - Making organic certification more accessible for small scale farmers*, LEISA India, vol. 15 (2), p. 24-25.
- CUÉLLAR PADILLA, M. C. (2008), *Hacia un sistema participativo de garantía para la producción ecológica en Andalucía*. Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 305 p.
- ETC Group, (2009), *Who will feed us? Questions for the food and climate crises*, Comunicqué 102, November, 32 p.
- GENUINO CLANDESTINO (2010), «Genuino Clandestino: Comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare. Il manifesto». <http://genuinoclandestino.noblogs.org/il-manifesto/>, consultado el 10 de abril de 2015.
- MANCE, E. A. (Ed.) (2003), *Como organizar redes solidàrias*, DP&A Editora, 392 p.
- NATURE & PROGRÈS (2007), *Les Systèmes de Garantie Participatifs, pour l'agriculture biologique associative et solidaire*, Uzès (France): Éditions Nature & Progrès, 63 p.
- POTITO, M., BORGHESI R., CASNA, S., LAPINI, M. (2015), *Genuino Clandestino. Viaggio tra le agri-culture resistenti ai tempi delle grandi opere*. Bologna: Terra Nuova, 280 p.
- RUGGERI, L. (2011), *I sistemi di garanzia par-*

tecipata (PGS) come strumento di sviluppo locale rurale: l'impatto dell'inclusione della comunità e dei valori sociali nella certificazione biologica, Tesis de licenciatura, Università degli studi di Parma, 135 p.

SACCO DOS ANJOS, F., VELLEDA CALDAS, N. (2014), *Para além de qualidade. Trajetórias de valorização de produtos agroalimentares*. Capecó: Argos, 239 p.

VELLEDA CALDAS, N. (2014), *A certificação de productos orgánicos no Brasil e na Espanha*. Pelotas: UFPel, 262 p.

VELLEDA CALDAS, N., SACCO DOS ANJOS, F. (2014), *Agricultura familiar y sistemas participativos de garantía en el sur de Brasil. Eppure si muove*. Anuario de la Fundación de Estudios Rurales, pp. 173-178.

VELLEDA CALDAS, N., SACCO DOS ANJOS, F., LOZANO CABEDO, C. (2014), *La certificación de productos ecológicos en España y Brasil*. Agrociencia Uruguay, vol. 18 (1), pp. 163-171.

La búsqueda de la soberanía entre la neoextracción y el viejo acaparamiento de tierras

Felipe Milanez* y Charles Trocate**

Palabras claves: Ecología política; neoextractivismo y neodesarrollo; *land grab*; resistencia popular

Introducción

La Amazonia ocupa casi el 60% del territorio de Brasil, y en los últimos años ha recibido masivas promesas de inversiones, por un total aproximado de 100.000 millones de euros hasta 2020. No es en vano que en los planes de aceleración del desarrollo de los gobiernos Lula y Dilma, la Amazonia sea considerada un «motor de desarrollo»¹. Las inversiones siguen el modelo del neoextractivismo latinoamericano (Gudynas, 2009) y tienen como objetivos la construcción de mega-hidroeléctricas, la instalación de grandes explotaciones mineras, y la implantación de infraestructuras logísticas de apoyo a la exportación hacia el norte, la «dirección correcta del flujo» según el discurso de la presidenta Dilma Rousseff en la región el 14 de marzo de 2014. A las inversiones extractivistas se le suman los subsidios e inversiones vinculadas a la agroindustria, sobre todo destinadas a la plantación de soja y a la ganadería, productos de los que la región ya es el más grande productor del país y que se destinan hacia la exportación. No obstante,

como veremos más adelante, las inversiones realizadas en los últimos años han generado un motor de conflictos socio-ambientales más que favorecer un «motor de desarrollo».

Una de las regiones prioritarias de las intervenciones fue la provincia minera de Carajás, en el sur y sureste del estado de Pará, en la parte oriental de la Amazonia. Carajás se ve afectada por mega-proyectos mineros de la compañía Vale do Rio Doce (a partir de 2007, fruto de una estrategia de marketing, solamente «Vale»), agroganaderos con los grandes mataderos de JBS-Friboi, e hidroeléctricos (repotencialización de la mega-presa Tucuruí, construcción de la presa Marabá, e inversiones de Vale en la hidroeléctrica de Belo Monte), que presionan el precio de la tierra en toda la región. Esta fuerte intervención tiene el Estado como principal agente del crecimiento y de una compleja coalición de intereses. En primer lugar, una alianza del neo-desarrollo o la neoextracción (Gudynas, 2009), caracterizada por una fuerte intervención del Estado en el mercado de tierras y en infraestructuras, con intereses privados neoliberales; como resultado se acaba constituyendo un modelo, al principio antagonico, de «neodesarrollo neoliberal». En segundo lugar, estos distintos intereses privados se articulan en una alianza entre el tradicional y viejo latifundio y los modernos proyectos de extracción orientados al mercado global de *commodities* agrícolas y minerales.

* Investigador del Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra, y European Network of Political Ecology (ENTITLE) (fmilanez@gmail.com)

** Dirigente del Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) y del Movimento Nacional pela Soberania Popular Frente à Mineração (MAM) (charlestrocate@hotmail.com)

1. Portada del periódico *Folha de S. Paulo*, el mayor periódico de circulación nacional, 16 de octubre de 2011: «Amazônia virá motor do desenvolvimento».



Acampamiento del MST en las tierras de un dueño de una industria siderúrgica de arrabio
(Autor: Felipe Milanez)

Frente a esta intervención niveladora del poder del Estado a través de políticas de desarrollo se constituye la unión de intereses de distintos grupos sociales, no necesariamente homogéneos, pero que se organizan como «unidades de movilización» (Almeida, 2004:10). En este sentido, en 2013 empezaron a organizarse en la lucha por la soberanía contra la gran minería distintos grupos sociales que también luchan contra el latifundio. Estos se encuentran formados por campesinos sin tierra, agricultores familiares, indígenas y cimarrones (*quilombolas*), agrupados en una amplia movilización denominada Movimento Nacional Popular pela Soberania Frente à Mineração (MAM). En el origen de la movilización del MAM está el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, el MST, que ha identificado esta alianza entre la mega-minería y terratenientes en una amplia red de expansión del capital. Según sus líderes y sus primeras publicaciones, este movimiento tiene por objetivo una lucha socio-ecológica por la justicia ambiental y el control soberano y popular del suelo y del subsuelo.

El presente artículo pretende comprender este complejo conflicto socio-ambiental establecido en un triángulo formado por extractivistas (la

gran minería) y terratenientes versus un movimiento popular formado por ecologistas «empobrecidos» (Martinez-Alier, 2013). Para ese fin se contó con el soporte teórico de dos líneas de investigación fundamentales para la explicación de la instalación del Proyecto Grande Carajás, en 1980, aún en la dictadura (1964-1985), como condicionante de la situación actual. Estas dos líneas de investigación son el subdesarrollo resultante del sistema de extracción, de Stephen Bunker (1985, 2005), y la contradicción de la tierra por el capitalismo rentista, de José de Souza Martins (1980, 1981, 1984, 1994, 2009).

Sobre estos marcos teóricos, y en el contexto actual de la Amazonía, argumentamos que para enfrentar la concentración de la tierra y del latifundio, también es necesario hacer frente al capital financiero e industrial que se estableció en la región por el sistema extractivo minero. Finalmente concluimos que el análisis de los antagonismos que se construyen en el ámbito de la ecología política local frente a diferentes fuerzas del capitalismo puede ser una importante contribución para la comprensión de los conflictos distributivos del metabolismo social (Martinez-Alier, 2005).

La articulación política y ecológica entre la tierra y la minería en Amazonia

Según indica el «Plano de Mineração Nacional 2030» del gobierno federal, «la Amazonia es la frontera de expansión minera actual en Brasil». Entre 2015 y 2030, el gobierno planea aumentar la exportación de hierro de 231 a 797 millones de toneladas. Sin embargo, las principales «preocupaciones» están relacionadas con los «conflictos sobre el uso y ocupación del territorio» (Ministério Minas e Energia, 2011:57).

En Brasil, a partir de la Constitución Federal de 1988, todos los recursos minerales, incluso el subsuelo, pasaron a ser bienes de propiedad federal. La explotación se comenzó a realizar mediante autorización del gobierno en cualquier parte del territorio nacional, con excepción de las tierras indígenas. Éstas no han tenido reglamentación hasta el momento pero hay al respecto un nuevo proyecto de ley en trámite en el Congreso. Por lo tanto, nos encontramos por una parte con los intereses mineros, que están regulados por el *Departamento Nacional de Produção Mineral*; y por otra parte con los intereses asociados a la propiedad de la tierra, con una compleja regulación en la que intervienen los Estados, el Gobier-

no Federal, y diversas instituciones específicas fijadas por la ley del uso de la tierra.

Como resultado de estos dos regímenes de control del suelo y el subsuelo, la región amazónica de Carajás está integrada en el sistema mundial de recursos primarios por dos modos de capitalismo, «fuerzas» (Bunker, 2005), o «frentes» (Martins, 1981): el extractivismo y la renta de la tierra. El primero se expande como una frontera internacional del capitalismo agro-minero, mientras que el segundo opera por contradicciones históricas de la acumulación rentista y la transformación de la tierra en mercancía. Una forma concentra el control sobre el subsuelo, la otra concentra la propiedad de la tierra.

Al mismo tiempo la globalización del mercado de recursos produce desigualdades en el sistema social y ecológico local (Bunker, 2005:7), por lo que la extracción destinada a la exportación tiende a debilitar los sistemas locales. Aunque sobresalga jurídicamente el interés federal del subsuelo, los conflictos sobre la tierra afectan directamente a la instalación de la empresa minera. Buen ejemplo es la reciente «preocupación» del PMN, o el caso reportado por Bunker (2005:65), en el cual la intensidad de los conflictos agrarios en el sur de Pará, en los años 1980, llegó a amenazar la instalación de la com-

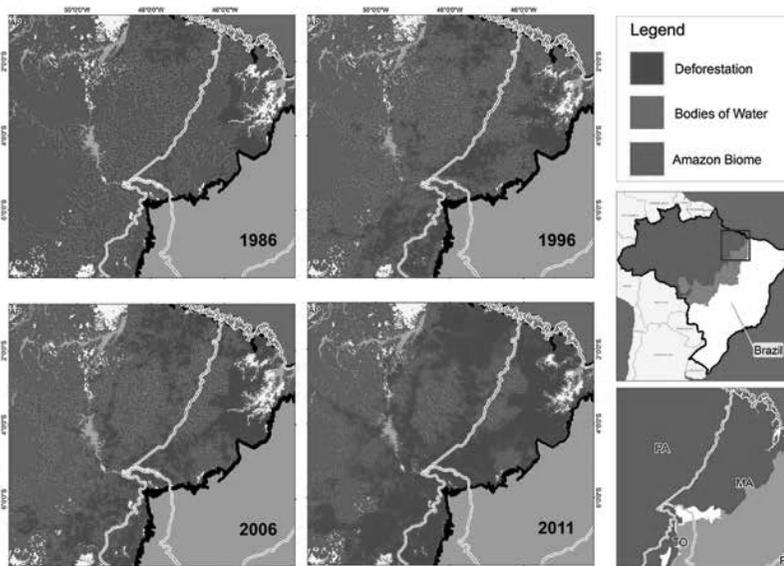


Figura 1: Deforestación en la región afectada por Carajás (1986 - 2011) (Fuente: Greenpeace, con datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE)

pañía Vale. La tierra es condición fundamental para extraer el subsuelo, y esta realidad fue bien percibida por Vale desde su llegada a Amazonía.

Esta es una de las razones por las cuales, desde el principio, el Proyecto Grande Carajás se convirtió en un plan geopolítico de transformación del territorio para el capital. La dictadura nacionalizó el control de la tierra e incentivó la apertura para las grandes empresas, con transferencias de incentivos fiscales a los capitalistas del sur del país a fin de impulsar inversiones en la región, con explotaciones forestales y ganadería. A partir del extractivismo mineral, el Proyecto Grande Carajás establecería una cadena industrial que incluiría la siderurgia y producción del arrabio. El arrabio serviría, además, como otro enlace con el sector ganadero y maderero, consumiendo la biomasa del bosque nativo, transformado en carbón vegetal como combustible para los altos hornos.

A partir de este polo extractivista, agro-ganadero y de la industria primaria, la región debía convertirse en un foco de gran desarrollo. Sin embargo, el polo industrial terminó por transformarse solamente en un centro exportador de *commodities*, con el arrabio enviado directamente para los Estados Unidos, el hierro a Japón, la madera a Europa y el ganado a distintos países. Además, como ha señalado Bunker (2005), la producción de desigualdades locales es parte del sistema de extracción. De este modo, la región se ha convertido en la más deforestada de Amazonia, con un profundo cambio del paisaje que ha puesto fin a los más grandes castaños de toda la región. El resultado de este proceso de privatización del subsuelo y de concentración de la tierra se puede observar en la figura 1, especialmente después de la entrada en operación del proyecto en el año 1985.

La concentración de la tierra

El desarrollo desigual y contradictorio del capitalismo en Brasil, como apuntan Oliveira y Faria (2009), tiene como base el carácter rentista que se forma a partir de la apropiación de la tie-

rra en la expansión del capitalismo. La propiedad privada de la tierra sirve estrictamente a la concentración del capital. Para Martins (1994), la propiedad de la tierra es el centro histórico de un viejo sistema político que persiste por años. Durante la dictadura, la asociación de este sistema con el moderno capital renovó su fuerza como un «poder del retraso». El modelo autoritario de desarrollo de la dictadura, que afecta aún hoy a las relaciones de poder, sobretudo en Amazonía, ha promovido la fusión en el control de la tierra entre el capitalista (moderno) y el terrateniente (retraso), según formas tradicionales y comunes del uso del territorio. La apropiación capitalista de la tierra se realiza con intención de lucro. Según Martins (1980:60): «O la tierra sirve para explorar el trabajo de los que no tienen tierra, o la tierra se va a vender por altos precios». El régimen de la propiedad no garantiza ni la voluntad de trabajar la tierra, ni una ocupación tradicional de la tierra y el trabajo como instrumento de supervivencia, sino la intención de acumulación que se fundamenta en la propiedad. Los conflictos constituyen la expansión del control capitalista de la tierra sobre otras formas del control común, incluso no capitalista.

Es a partir de la relación entre la propiedad de la tierra y la renta agraria que el propietario, sin producir, puede enriquecerse. El centro de este concepto (Martins 1980:54) está la distinción entre la tierra de exploración, apropiada por el capital, y la tierra de trabajo, «de quienes en ella trabajan», y por lo tanto el problema de la transformación de la tierra en mercancía y la expropiación de la tierra como instrumento de trabajo. El análisis de Martins se fundamenta en la resistencia a este proceso: ocupar la tierra con trabajo y no pagar la renta es contestar el orden capitalista y resistir a la expropiación. De esta manera, deviene un desafío al capitalismo.

Nuestro argumento es que con la expansión del neoextractivismo el propietario de la tierra de exploración, que ya goza de mecanismos para ganar sin producir, puede beneficiarse de la asociación con la minería no solamente por incentivos estatales, como antes, sino con distintos enlaces



Nueva mina de Vale en Canaã dos Carajás S11D
(Autor: Felipe Milanez)

privados. Y es que para acceder al subsuelo, la minería depende de la intervención del Estado para el control del suelo, aunque en la Constitución Federal el subsuelo pertenezca al Estado. Es una relación distinta de la que presentan el campesino, indígena, sin tierra, o movimientos sociales territoriales de grupos que dependen de la tierra para vivir. Un ejemplo de esta situación de conflicto sobre el distinto uso del suelo para acceso al subsuelo es la reciente expansión de la empresa Vale en Carajás. Las inversiones apuntadas desde 2008 para dos sitios mineros, la mina de níquel de Onça Puma (Ourilândia do Norte) y el hierro de la S11D (Canaã dos Carajás), generaron conflictos con territorios indígenas (de los Kayapó y de los Xikrin), con dos asentamientos campesinos y con una ocupación de sin tierras. En cambio, las negociaciones de las empresas mineras con los grandes terratenientes fueron rápidas, con más ventajas y mejor pago por las tierras. Los terratenientes, a su vez, reinvirtieron parte de las indemnizaciones en nuevas tierras y en la circulación del mercado local de las ciudades (hoteles, restaurantes, tiendas). Estos conflictos constan en informes de la Comisión Pastoral de la Tierra y en el Mapa de Conflictos Ambientales de EJOLT (FIOCRUZ/EJOLT, 2015).

La concentración de la tierra, un problema histórico de Brasil exacerbado durante la dictadura, se agudizó de nuevo con la expansión neoextractivista. Los antiguos acaparamientos de tierra iniciados en la dictadura volvieron a ocurrir como resultado de la Medida Provisoria

458, popularmente conocida como MP del Acaparamiento, que fue aprobada en 2009. El objetivo fue la regularización de más de 60 millones de hectáreas en la Amazonia, favoreciendo sobre todo a los *grileiros* (acaparadores). En la última década hubo un nuevo pacto en contra de la reforma agraria, realizado por los gobiernos Lula y Dilma, y una preferencia política por el agronegocio, que ha recibido más inversiones y beneficios de las intervenciones del estado. Esto ha resultado en un incremento en la concentración de la tierra (O'Globo, 2013). El impacto de la «regularización» de tierras en Carajás, por estas nuevas medidas legislativas, se sumó en el mismo periodo, a la expansión minera de Vale.

En la sociología agraria de Martins, «la lucha de los campesinos (*posseiros*) es una lucha por el *instrumento de producción*, que es la tierra» (Martins, 1984:93, énfasis en el original). Por lo tanto, para el autor la lucha por la tierra no es un problema de «explotación» sino de «expropiación». La expropiación de los medios de producción, en este caso las tierras, es una forma primitiva de acumulación y que puede tener carácter continuo, según ha sugerido David Harvey (2003) con la idea de «acumulación por desposesión». Nuestro argumento es que esta forma de acumulación es el proceso continuo de la expropiación de los medios de producción por la violencia, según lo descrito por Martins (1980) al respecto de los conflictos agrarios. La expansión del extractivismo minero sobre las *tierras de trabajo* ocupadas por los campesinos los expropia de su herramienta de trabajo, al mismo tiempo que la expansión minera sobre la tierra de exploración del capitalista puede servir para pagar la renta por la especulación sobre la tierra como mercancía. Esta nueva alianza es mutuamente beneficiosa para los empresarios mineros y los terratenientes. El MST, que es la base del MAM, nace de estas contradicciones territoriales.

Viejas desigualdades del neoextractivismo

En estudios realizados a lo largo de 30 años en la provincia minera de Carajás, Bunker se preocupó de señalar los efectos de una economía

construida en base a la extracción de materias primas para la exportación. En un análisis histórico, propone una comparación de distintas «commodities» de granel, desde el caucho (hasta 1920), la castaña de Brasil (*Bertholletia excelsa*) y, al final, la hegemonía del hierro, todos ellos productos destinados a alimentar los mercados globales.

El caucho de Amazonia, que suministró goma a la segunda revolución industrial hasta el cambio global de producción para Asia (a partir de 1913), fue reemplazado a partir de la segunda década del siglo pasado por la castaña, que era abundante en los grandes castañales del estado de Pará. La sustitución económica no implicó, sin embargo, un cambio en las condiciones de trabajo, y se reprodujo el sistema del *aviamento*, que consiste en una forma de inmovilización de la fuerza de trabajo y de dominación basada en el crédito y en la violencia. A lo largo de casi un siglo de extractivismo vegetal, esta economía concentró en las manos de pocas familias la disponibilidad de recursos y territorio, permitiendo una estructura de poder local que se rompe con el plan geopolítico de nacionalización de la dictadura (Emmi, 1999). A partir de este momento la modernización del capitalismo extractivista se construye desde las nuevas elites capitalistas, de los incentivos para el avance de las grandes empresas sobre la tierra, y de la instalación del Programa Grande Carajás (1980). De acuerdo con Bunker, las propiedades de cada *commodity* y sus capacidades de inputs tecnológicos y de transporte influenciaron la transformación del sistema extractivista, sobre todo del cambio de la castaña para el hierro (Bunker, 2003).

Bunker sugiere que existe un impacto social y ecológico local, sin profundizar en el análisis de esta relación. Afirma que es en las intersecciones entre las disputas globales y las relaciones locales de poder donde se construyen alianzas entre distintas fuerzas del capitalismo que impactan a las poblaciones y los ecosistemas. En sus últimos trabajos, el autor dedicó más atención a las transformaciones locales producidas por el sistema extractivista: «La inserción de un gran proyecto mineral, con intensidad de capital (...) recreó en ese lugar aislado las desigualdades del

poder económico y político dentro de los más amplios círculos de relaciones e interacciones del comercio y de las finanzas internacionales» (Bunker, 2003:10).

Como ejemplo de este proceso, la organización social alrededor de la mega-minería de Vale ha producido nuevas desigualdades en la región. Los grandes terratenientes productores de ganado fueron estimulados a moverse en busca de pastos más amplios y aprovechar los salarios y el mercado consumidor vinculado a la construcción del proyecto (Bunker, 2003:13). Mientras que los primeros se beneficiaron de los recursos locales del extractivismo y gozaron de la atención de los agentes del Estado, los campesinos pasaron a ser cada vez más víctimas de la violencia de sicarios y de la policía militar. Los inmigrantes llegaron de distintas partes del país, siguiendo la promesa de empleos asociados a la construcción de la ferrovía y la minería. Al lado de la «ciudad-fortaleza» de Carajás se formó, por la llegada de trabajadores que buscaban empleo, la ciudad de Parauapebas, hoy con una población estimada de 182.352 habitantes (IBGE). Junto a Curionópolis y Eldorado dos Carajás, Parauapebas es escenario de conflictos muy violentos, donde las élites beneficiadas por el capital del extractivismo se enfrentan a los campesinos sin tierra. Ejemplo de ello es la Masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en 1996, con el asesinato de 19 activistas del MST. En la actualidad hay seis campamentos de sin tierras del MST, que se enfrentan a las presiones de sicarios fuertemente armados².

Para instalar la minería, la compañía Vale, por entonces una empresa estatal, utilizó el sistema local de expropiación, incluso con mecanismos de violencia del Estado dictatorial, para expulsar a campesinos y mineros de oro en Sierra Pelada. Como resultado, se ampliaron las contradicciones de la tierra, sin proporcionar un incremento satisfactorio del presupuesto municipal para la población desplazada. La estrategia de la empresa, según Bunker, fue la de «aislarse» de este caos provocado

2. «Fazendeiros atacam acampamento do MST em Curionópolis» <http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1274-fazendeiros-atacam-acampamento-do-mst-em-curionopolis>, consultado el 5 de abril de 2015.

por la extracción del hierro, con la protección del Estado: «El proyecto de ingeniería (...) permaneció, así, como una isla fuertemente defendida en medio de un mar de desorden, destrucción, violencia y pobreza, que sus propias actividades trajeron a la región» (Bunker, 2003:15-16). Estos mismos mecanismos expropiatorios se reproducen, ahora, con la expansión minera de la empresa privatizada, en el régimen democrático neoliberal del neodesarrollo.

El movimiento de la lucha por la tierra y la resistencia al mega-extractivismo

El poder nivelador de la intervención del estado, a través de políticas de desarrollo, agrarias, ambientales, extractivistas, o mega obras de infraestructuras, puede aproximar intereses difusos y unir a grupos heterogéneos (Almeida, 2004). De este modo se organizan las unidades de movilización de distintos grupos, incluso étnicos y de «poblaciones tradicionales». Estos grupos pueden reivindicar conjuntamente cuestiones de justicia ambiental y oponerse a la desposesión ambiental extractivista como ecologistas de los pobres, aunque inconscientemente (Martinez-Alier, 2002). En este sentido, el Movimiento Nacional Popular pela Soberanía Frente à Mineração (MAM), formado en su base por campesinos sin tierra que luchan contra la concentración de la tierra y el latifundio, intenta organizar una resistencia popular al extractivismo mineral y, por tanto, a la expansión del capital.

Las primeras articulaciones del MAM tuvieron en Parauapebas, en 2013, durante la preparación de las protestas por los 30 años

del proyecto Grande Carajás, con una serie de movilizaciones y encuentros en los estados directamente afectados, Pará y Maranhão. Ahí se reunieron activistas del MST y Vía Campesina, Movimento dos Trabalhadores na Mineração (MTM), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), junto con la Comisión Pastoral de la Tierra, Justiça nos Trilhos, los sindicatos locales de los trabajadores rurales, intelectuales del movimiento Debate e Ação y Cepasp (Centro de Educação, Pesquisa e Assessoria Sindical e Popular). El año siguiente se agregaron a este grupo comunidades nativas como los pueblos indígenas Aikewara, Akratikateje y comunidades *quilombolas* (cimarrones). Frente a un adversario común producido por la intervención de un imperativo extractivista, esta movilización empieza a vencer un desafío histórico, al unir grupos que hasta muy recientemente se enfrentaban entre ellos como enemigos.

Argumentamos que es posible verificar empíricamente intersecciones de las contradicciones



Movilización de campesinos por la reforma agraria en los carriles de Vale (Autor: Evandro Medeiros)

de distintas modalidades del capital, como apuntaron en otro momento en la misma región de Carajás, Martins y Bunker. Según el análisis del movimiento de resistencia por la soberanía popular, los «empobrecidos» se enfrentan a la desposesión ecológica contra la concentración de la tierra y el sistema de mundo extractivista.

En la primera publicación del MAM se apuntan los impactos sufridos por estos grupos, como la apropiación de tierras y minerales, la deforestación, la polución, la desterritorialización de las poblaciones campesinas, o la proletarianización y precarización del trabajo (MAM, 2013). Especialmente la desterritorialización, que afecta a todos ellos, es un importante factor de unión. Cruz y Pinassi (2012) apuntan que durante los últimos años la compañía Vale, con ayuda del Estado, expulsa a los trabajadores de sus tierras en un proceso similar al iniciado por los terratenientes en los años 1970, tal y como expusimos anteriormente. Sirvan como ejemplos los casos ya apuntados de la expansión de la mina Onça Puma, propiedad de Vale, o la expulsión de los trabajadores de la villa de Racha Placa³, mientras que a la vez los grandes terratenientes recibían generosas indemnizaciones en sumas considerables para la instalación del mega-proyecto de extracción de hierro S11D (Mapa; CPT, 2012). Ante esta situación, líderes indígenas del pueblo Gavilán (Akratikatêje, Parkatêjê y Kyikatêgê), que hasta 1989 estaba en guerra con los campesinos (Emmi, 1999), han optado por integrarse en el MAM y se sublevan contra la duplicación de la ferrovía en su territorio. El Estado, en contraste, favorece el proyecto mediante las intervenciones del gobierno federal y del poder Judicial (Milanez, 2015).

La apropiación de grandes extensiones de tierras por parte de grupos financieros, que en los últimos años han comprado latifundios por un total de unas 500.000 hectáreas, puede representar el deseo de establecimiento del proyecto minero del grupo. Según interpretan los movimientos sociales, también podría tratarse de una especulación sobre la valorización de las tierras con las inversiones mineras⁴. El subsuelo

de la región de Carajás tiene 17 mil lotes, de 50 a 100 hectáreas, masivamente controlados por Vale mediante proyectos que afectan las cuencas hidrográficas de los ríos Itacaiúnas, Xingu, Tocantins y Araguaia (Cruz y Pinassi 2012).

El MAM agrega intereses locales pero se propone como una movilización nacional, siguiendo el ejemplo del MST. Propone transformar las luchas de defensa en luchas «ofensivas», incluso con actos de desobediencia civil, «sin miedo a desobedecer las leyes que nos criminalizan y nos oprimen» (MAM, 2013:17). A la vez que organizan protestas locales, participan en la política institucional en protestas contra el nuevo Código de la Minería. La propuesta del movimiento es que sólo la participación directa en las decisiones, mediante un proceso verdaderamente democrático, permite el ejercicio de la soberanía. Para enfrentarse al latifundismo, consideran necesario hacer frente al capital extractivista que se estableció en la región. Su diagnóstico es que al problema histórico de la concentración de la tierra se sumaron las contradicciones y desigualdades locales generadas por el neoextractivismo.

Conclusiones

Nuestro objetivo fue demostrar que en el modelo de neodesarrollo actual de Brasil se suman las contradicciones históricas sobre el control de la tierra a las desigualdades causadas por el neoextractivismo. En este escenario, la Amazonia – como ocurrió en el proceso de desarrollo acelerado de la dictadura (1964-1985) – es vista como un engranaje más del sistema. Se abren nuevamente las «fronteras», reproduciendo antiguos discursos, ya sea del Proyecto Grande Carajás (1980), o del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC, 2007 y 2011). Dos herramientas teóricas, una sobre las contradicciones de la tierra, con el tema de la renta y la concentración, de José de Souza Martins, y otra sobre la inserción de la región en el sistema mundial del extractivismo, de Stephen Bunker, pueden ser útiles para el análisis de la articulación de estas dos fuerzas. Frente a ellas, se articulan movimientos populares como el ecologismo de los empobrecidos, que luchan por la soberanía frente a la minería y por la tierra frente al

3. «Moradores da vila Racha Placa impedem acesso a obras da Vale». <http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1125-moradores-da-vila-racha-placa-impedem-acesso-a-obras-da-vale>, consultado el 10 de abril de 2015.

4. «Estudo feito em apenas quatro das fazendas do grupo Santa Bárbara aponta a existência de 25.504 hectares de terras públicas». <http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/12-conflitos/1566-estudo-feito-em-apenas-quatro-das-fazendas-do-grupo-santa-barbara-aponta-a-existencia-de-25-504-hectares-de-terras-publicas>, consultado el 10 de abril de 2015.

latifundio. El análisis de la resistencia de estos movimientos – como el llevado a cabo por el MAM – puede revelar el proceso político y ecológico de control y acceso a los recursos y la relación del capitalismo tanto con la tierra como con el subsuelo. ■

Referencias

- ALMEIDA, A. (2004), «Terras tradicionalmente ocupadas: processos de territorialização e movimentos sociais», *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, Vol. 6 (1), pp. 9-30.
- MINISTÉRIO MINAS E ENERGIA (2011), *Plano Nacional de Mineração 2030*.
- BUNKER, S. (1985), *Underdeveloping the Amazon: extraction, unequal exchange, and the failure of the modern state*. The University of Chicago Press.
- BUNKER, S. (2003), «Da castanha-do-pará ao ferro: os múltiplos impactos dos projetos de mineração na Amazônia brasileira», *Novos Cadernos NAEA*, Vol. 6 (2), pp. 5-38.
- BUNKER, S., y CICCANTELL, P. (2005), *Globalization and the Race for Resources*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- CRUZ, R. G. y PINASSI, M. O. (2012), «La minería y la lógica de producción destructiva en la Amazonía brasileña», *Revista Herramienta*, Vol. 51. Consultable en <http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-51/lamineria-y-la-logica-de-produccion-destructiva-en-la-amazonia-brasileña>
- EMMI, M. (1999), *A Oligarquia do Tocantins e o Domínio dos Castanhais*. Belém: UFPA/NAEA.
- HARVEY, D. (2003), *The New Imperialism*. Oxford: Clarendon.
- GUDYNAS, E. (2009) «Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo». En VVAA, *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187-225). Quito: Centro Andino de Acción Popular y Centro Latino Americano de Ecología Social.
- FIOCRUZ/EJOLT (2015). *Mapa de Conflitos por Justiça Ambiental*. <http://www.conflictoambiental.icict.fiocruz.br/> Consultado el 10 de abril de 2015.
- MOVIMENTO NACIONAL PERLA SOBERANIA POPULAR FRENTE À MINERAÇÃO (2013), *Documento básico: Por um país soberano e sério! Somos contra o saque de nosso minério!*
- MARTINS, J. S. (1980), *Expropriação e violência: a questão política no campo*. São Paulo: Hucitec
- MARTINS, J. S. (1981), *Os Camponeses e a Política no Brasil*. Rio de Janeiro: Vozes.
- MARTINS, J. S. (1984), *Militarização da questão agrária no Brasil*. Rio de Janeiro: Vozes.
- MARTINS, J. S. (1994), *O Poder do Atraso*. São Paulo: Hucitec.
- MARTINS, J. S. (2009), *Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano*. São Paulo: Contexto.
- MARTÍNEZ ALIER, J. (2005), *El Ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria.
- MARTÍNEZ-ALIER, J. (2014), «The environmentalism of the poor», *Geoforum*, Vol. 54, pp. 239-241.
- MILANEZ, F. (2015), *Vale suspende recursos a indígenas* <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/vale-suspende-recursos-a-indigenas-e-causa-reviravolta-em-comunidades-6892.html> Consultado el 5 de mayo de 2015.
- O'GLOBO (2013) «Concentração da terra cresce», <http://oglobo.globo.com/brasil/concentracao-de-terra-cresce-latifundios-equivalem-quase-tres-estados-de-sergipe-15004053> Consultado el 5 de abril de 2015
- OLIVEIRA, A. U., y FARIA, C. S. (2009), *O processo de constituição da propriedade privada da terra no Brasil*, anais do XII Encontro de Geógrafos da América Latina realizado em Montevideú, Uruguai.

Recuperar los comunes para un país vivo: perspectivas desde la lucha contra el despojo y por la autogestión comunitaria en Casa Pueblo, Puerto Rico

Gustavo García López*

Una visión política de los comunes

Casa Pueblo no es una de esas grandiosas construcciones de partidos ‘del pueblo’ o gobiernos populistas autoritarios. Es un experimento colectivo desde la solidaridad y el compromiso que surgió de la lucha por defender un territorio y su gente contra el despojo minero vestido de ‘desarrollo’. Hoy es mucho más: el intento de construir una casa *que es a la vez* un pueblo, un pueblo que sirva de semilla y esperanza para una «patria geográfica» caribeña más justa y ecológicamente sustentable.

En el contexto actual de crisis y austeridad, que es también una crisis de imaginarios radicales, se ha perdido mucha de la capacidad de imaginar alternativas al capitalismo (Smith, 2010). No obstante, de la experimentación y el debate en el seno de nuevas luchas sociales han comenzado a surgir nuevos imaginarios y prácticas. Tal es el caso de los «comunes». En este trabajo utilizaré el caso de Casa Pueblo para elucidar el potencial de ese tipo de imaginarios.

En la economía institucional los *comunes* se refieren a recursos naturales y ambientales *compartidos*, como los bosques, el agua, las pesquerías y el aire (Ostrom, 1990). Otras tradiciones los definen como las relaciones sociales de cooperación y solidaridad (un ‘estar en común’) que sostienen territorios y recursos comunes (Bollier, 2014; De Angelis, 2001; Reid y Taylor, 2010);¹

* Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, Universidad Autónoma de Barcelona (garcial.gustavo@gmail.com).

1. Reid y Taylor (2010) distinguen entre los comunes ecológicos

o «estructuras que conectan» a unos actores sociales con otros y a éstos con la ecología (D’Alisa, 2013).

Este enfoque en procesos de autogobierno (*self-governance*) está fuertemente ligado a nuevas formas de pensar la soberanía, no desde el estado-nación o desde el individualismo del mercado, sino desde lo común(itario): la autonomía para auto-organizarse y decidir en forma colectiva y solidaria sobre una diversidad de modos alternativos de ser/vivir: el tipo de economía, de gestión ecológica, de toma de decisiones, etc.²

La auto-gestión, no obstante, es insuficiente para entender las luchas actuales en favor de los comunes y su potencial para una transformación sistémica. El acercamiento institucional obvia la persistencia de fuerzas político-económicas del desarrollismo capitalista que buscan el encerramiento (*enclosure*) y despojo (*dispossession*) de los comunes, así como la gestión de los movimientos que resisten a estas fuerzas.

Un enfoque *político* de los comunes propone entenderlos desde cuestionamientos a las estructuras político-económicas hegemónicas y la búsqueda de modelos alternativos de sociedad que trasciendan el ámbito local. Como han planteado varios autores, para recuperar los comunes en su dimensión ecológica *es indispensable recuperar*

–las interdependencias entre la vida humana y no-humana– y los comunes cívicos –las redes de prácticas diarias por las cuales las personas interactúan, cuidan los comunes y reproducen las capacidades de cuidado de la ecología.

2. De hecho, Ostrom (1990) identificó la «autonomía» local como uno de los siete factores de longevidad y sustentabilidad de los proyectos de gestión comunitaria de recursos.



Bosque del Pueblo (Fuente: www.adjuntaspr.com/bosque_modelo/)

la dimensión cívica (los espacios y prácticas públicas de la soberanía popular; la res pública), así como la concepción de un bien común (commonwealth). A su vez, la recuperación de lo cívico debe pasar por un regreso a nuestra *ecología*. Como plantean Reid y Taylor (2010), lo cívico se debe dar en un lugar/espacio (territorio, espacio público) y está asociado a la producción y reproducción de identidades, conocimientos, procesos contestatarios y lazos individuales y colectivos.

En este trabajo analizo estas formas de co-constitución de luchas sociales y comunes desde la experiencia de 35 años en la Cordillera Central de Puerto Rico de la organización comunitaria Casa Pueblo, la cual no sólo derrotó, tras quince años de lucha, un mega-proyecto minero, sino que transformó su lucha en un proyecto de autogestión comunitaria; una «revolución comunitaria», en palabras de sus líderes (Massol González et al., 2006). Más que probar un planteamiento teórico específico, me interesa aquí explorar las reflexiones que nos ofrecen los propios movimientos en sus prácticas y discursos, que suelen trascender las teorías así como las ideologías de izquierdas (cf. De Angelis, 2003; Martínez Alier et al., 2014; Velicu y Kaika, 2015).

Desde la experiencia de Casa Pueblo quisiera argumentar dos cosas. Primero, que los movimientos pro-comunes y por la soberanía – que surgen vinculados a la defensa de *territorios* par-

ticulares – fomentan nuevos modelos de organización social y económica, de gestión del territorio, y de relaciones con la ecología, así como cambios importantes en la política estatal sobre los comunes. Segundo, que la construcción de modelos alternativos de soberanía desde los comunes no reside sólo en el proceso de *comunidad* propiamente. Más bien, reside en un cuestionamiento consciente y continuo a las estructuras jerárquicas-autoritarias del estado y al despojo de los comunes, y, más aún, en convertir ese cuestionamiento en propuestas para proyectos alternativos para una sociedad distinta. De esa forma, las «soberanías locales» se transforman en soberanía popular.

Esta experiencia aporta a los planteamientos de De Angelis (2013) sobre la necesidad de ir más allá de la falsa dualidad entre el neoliberalismo (Plan A) y el Keynesianismo (Plan B) como soluciones a la crisis, y pasar por un «Plan C+D», de los comunes y la democracia: los comunes solo pueden expandirse con una nueva política realmente democrática, a la vez que en ellos se sustentan las luchas y las transformaciones políticas. En ese sentido, los comunes son también espacios de creación de resistencias, alternativas, e imaginarios anti-capitalistas (Caffentzis, 2010).

Por tanto, es importante entender y analizar más a fondo como surgen nuevos procesos de

comunidad y de gestión del territorio como parte de luchas contra los proyectos de *despojo* del desarrollismo; así como los cuestionamientos de estos movimientos a las estructuras hegemónicas de ‘democracia’ liberal y ‘desarrollo’ capitalista desde el *ejercicio* en vez de la *demanda* de la igualdad política y la justicia ambiental (Velicu y Kaika, 2015).

Del desarrollo colonial a la «revolución comunitaria» en Adjuntas, Puerto Rico

El archipiélago de Puerto Rico, ex-colonia española y colonia de los Estados Unidos desde 1898, es ejemplo claro de las transformaciones socio-ecológicas asociadas al modelo de desarrollo en un contexto de «colonialismo ambiental» (Atilés-Osoria, 2013; Concepción, 1995). A partir de los años 40, el modelo agrícola industrial del país fue transformado radicalmente con el proyecto de industrialización «Manos a la Obra», fuertemente promovido por Estados Unidos. Junto a este vino la expansión del poder político, económico y militar estadounidense, y también un proceso amplio de encerramientos de bienes comunes para alimentar esta acumulación de capital. Simultáneamente, Estados Unidos impuso el modelo de «parques naturales», que fue separando progresivamente a la gente del bosque (Massol González et al., 2006).

En la década de 1950, con la necesidad de materias primas para alimentar el «boom» económico estadounidense de la posguerra, proliferaron en el país los permisos de exploración de minerales y una empresa estadounidense presentó oficialmente una propuesta para la explotación minera a cielo abierto (para cobre y oro) en 14,000 hectáreas de la Cordillera Central (Colón Rivera et al., 2014).

La primera lucha ambiental en Puerto Rico surge contra ese proyecto, primero con el lema nacionalista de «Minas puertorriqueñas o cero minas» y luego argumentando contra su impacto ambiental (Concepción, 1995; Colón Rivera et al., 2014). El proyecto fue derrotado por primera vez en 1968 y nuevamente en los años 70, pero resurgió en 1980, como parte de un gran plan de

industrialización y desarrollo de infraestructura diseñado por Estados Unidos (Cela, 2014; Ruiz Marrero, 2014). En respuesta, en el pueblo de Adjuntas se creó la entidad comunitaria Taller de Arte y Cultura para retomar la lucha con los lemas de «Sí a la vida, no a las minas», y «Cero minas bajo cualquier estatus».³ Para el Taller, el asunto no era ya sobre la distribución de costos y beneficios o sobre la soberanía política de Puerto Rico – temas centrales en el comienzo de la lucha – sino que Puerto Rico se volvería inhabitable y se convertiría en «un terraplén militar e industrial» (Massol Deyá, citado en Cela, 2014).

Posteriormente, como parte de su proceso de evolución hacia un proyecto de autogestión comunitaria, el Taller se rebautizó como «Casa Pueblo», nombre que sugiere mucho sobre los comunes y la soberanía. En 1995 Casa Pueblo logró que el entonces gobernador enmendara la Ley de Minas para prohibir la minería a cielo abierto (Ley 73-1995). Pero consciente de la posibilidad de futuras leyes que volvieran a permitir la explotación minera, Casa Pueblo no se limitó a esa ‘victoria’ de política pública y propuso exitosamente que en los terrenos se designara un bosque estatal, aptamente nombrado *Bosque del Pueblo* –la primera designación de este tipo en treinta años– y firmó un acuerdo de gestión compartida (co-manejo) del bosque con el gobierno, el primer acuerdo de este tipo en Puerto Rico.

De ese modo, Casa Pueblo dio un primer e importante paso para aniquilar la amenaza minera, vinculando su lucha a un proyecto alternativo de auto-gestión del territorio. Pasó de la protesta a la propuesta, y sustituyó la destrucción con la vida (Massol González, citado en Cela, 2014). Esta propuesta En otras palabras, se luchaba por «la autonomía existencial (...) contra la sustitución de relaciones mercantiles, de clientela, de dependencia a la capacidad de autonomía y de autodeterminación de los individuos.» (Gorz, 2012: 43) Por sus diversas acciones, en 2002 Casa Pueblo recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman.⁴ Esta experiencia contrasta con las de la mayoría de los movimientos am-

3. *Estatus* se refiere a la relación política con Estados Unidos: independencia, territorio no incorporado, o estado incorporado.

4. <http://www.goldmanprize.org/recipient/alexis-massol-gonzalez/>. Consultado el 10 de marzo de 2015.

bientales del país, que muestran una tendencia al localismo y a la despolitización, y se enfocan en la protesta y en cuestiones técnicas y de eficiencia más que de poder (Rosario, citado en Ruiz Marrero, 2005).



Marcha contra el gasoducto, 1ro de mayo de 2011
(Autor: Julissa Zoé Corporán)

Rompiendo la dependencia colonial por medio de la autogestión soberana y solidaria

Desde sus comienzos, Casa Pueblo presentó una visión distinta del ‘desarrollo’ y de la comunidad, fundamentada en los tres principios – considerados por sus líderes clave del éxito de su lucha contra la minería – que continúan siendo su brújula: «Ciencia, Cultura, Comunidad» (véanse Rivera Ramos, 2015; Ruiz y Aponte, 2010: 17). Ciencia se refiere a la investigación de un problema dado y las estrategias de restauración, conservación y uso del territorio y sus ecosistemas; la cultura es clave para las estrategias de organización y movilización, y para educar y crear vínculos con la comunidad; y la comunidad «es el eje, pues la comunidad organizada es la fuerza motriz del cambio» (Rivera Ramos, 2015).

Con esos principios rectores, Casa Pueblo proponía, en lugar del desarrollo dependiente de las grandes industrias, del ‘estado de bienestar’

y de las promesas de los partidos políticos, un modelo de «autogestión comunitaria»: un desarrollo «más resiliente y auto-suficiente», con el cual la comunidad pudiera transformarse a sí misma (‘autogobernarse’) por medio de estrategias de desarrollo que fuesen social, económica y ambientalmente sustentables (Massol González et al., 2006: 7). En otras palabras, una soberanía para definir alternativas al desarrollo hegemónico desde la comunidad y para ella:

«All Casa Pueblo’s work is grounded in its commitment to processes of community self-realisation, aimed at overcoming the sense of helplessness, dependency and marginalisation experienced by many poor rural communities... This implied breaking the bonds of dependency and political manipulation and learning to speak in its own voice and pursue its own vision through its own initiatives.»

Massol González et al. (2006: 7)

Esta orientación a hablar y decidir con voz propia sobre el ‘desarrollo’ local – la soberanía – fue evidente desde la lucha anti-minera. Luego de que en 1992 el gobierno volviera a proponer el proyecto minero (por cuarta ocasión), Casa Pueblo organizó un Foro del Pueblo en donde el estado tuvo la oportunidad de presentar su proyecto, que fue ampliamente cuestionado por representantes de diversos sectores. Esto contrastaba grandemente con el mecanismo tradicional de participación ciudadana mediante «vistas públicas» pro-forma organizadas por el gobierno. Posteriormente, en una movilización en 1995 en Adjuntas, días antes de la prohibición legal de la minería, cientos de manifestantes marcharon al principal depósito de minerales y sembraron árboles bajo el lema de «*Ya hemos decidido: No a las minas.*»

Cuando en 2009 el gobierno propuso un gasoducto que transcurriría por toda la costa norte y cruzaría de norte a sur pasando por la Cordillera Central, incluyendo terrenos del Bosque del Pueblo, Casa Pueblo invocó nuevamente esa soberanía del pueblo en una asam-

blea-movilización un primero de mayo: «La decisión que vamos a tomar es que se legisle desde las calles y que el pueblo decida. *La función de decidir es del pueblo soberano, ya ahí termina la función de [el entonces gobernador] Fortuño o de quien sea*» (Massol González, citado en Reyes Angleró, 2011, énfasis suplido). Reflexionando sobre esta lucha, Arturo Massol situaba nuevamente la soberanía en pasar de la «queja y la crítica» a la organización y la acción: «(...) cuando usted va de frente, con esa sabiduría de que lo guía el amor, puede detener las malas agendas (...) lo que es malo para el país. (...) *hay que ponerse de pie*» (citado en El Nuevo Día, 2012).

La soberanía para Casa Pueblo es, entonces, la *acción directa* que colectivamente recupera el territorio y lo siembra con alternativas; no se solicitan ni se esperan del estado el reconocimiento de derechos, la organización de procesos democráticos, o la gestión del territorio, simplemente se hacen. Esto recuerda el lema zapatista y sus consejos de buen gobierno: «Fuera el mal gobierno, aquí manda el pueblo». Es una propuesta de *practicar* la igualdad política como forma de justicia, por medio de una revalorización de las relaciones solidarias comunitarias, el territorio y la ecología (Velicu y Kaika, 2015). Es el «poder hacer» de la comunión en vez del «poder sobre» de la dominación (Holloway, 2014).

El amor del que habla Massol Deyá – por la «patria geográfica» y por su gente – es parte de la *solidaridad*, otro concepto clave del modelo de autogestión de Casa Pueblo. Por un lado, detrás de sus líderes visibles existe una gran masa de voluntarios que, con su trabajo, sus contribuciones económicas, sus visitas, sostienen a la organización. Por otro, Casa Pueblo desarrolla lazos de solidaridad con diversos sectores: agricultores con los que trabaja en el cultivo del café, pequeños empresarios locales, universidades, entidades cívicas como Agenda Ciudadana – que busca promover una democracia más participativa⁵ – y otros movimientos sociales por los comunes, la justicia

ambiental y la democracia.⁶ La solidaridad también queda representada simbólicamente en el recibimiento anual que hace Casa Pueblo al ave «Julián Chiví» en su travesía a Adjuntas desde la Amazonía. La actividad, además de aunar la ecología a un sentido patrio (*cf.* Martínez-Reyes, 2009), también representa la unión del Caribe con Suramérica. Esta expansión de la patria geográfica es muy importante en el contexto colonial del país, que promueve su aislamiento del exterior; en especial del mundo antillano y latinoamericano. La regionalización ha sido, de hecho, tema central de Casa Pueblo en años recientes. En 2009, lograron incorporar el Bosque del Pueblo y otras tierras de la Cordillera Central dentro de la Red Latinoamericana (hoy Iberoamericana) de Bosques Modelo, que promueve formas más democráticas y sustentables de gestionar territorios.⁷ Con estas acciones Casa Pueblo propone una solidaridad que no sólo funciona para la *comunión* local, sino que opera a múltiples niveles como mecanismo para *ejercer* y *realizar* el auto-gobierno y así fomentar transformaciones socio-ecológicas para un nuevo país:

*Con el devenir del tiempo, descubrimos que la comunidad no es solamente la inmediatez de nuestro pueblo natal sino que la autogestión comunitaria ha transformado su definición a lo siguiente: la comunidad es la patria y la gestión comunitaria son los deberes y derechos que la sociedad civil ha ejercido y realizado en torno a las metas comunes de los puertorriqueños en la búsqueda de una sociedad más justa, más armónica y más universal.*⁸

5. <http://agendaciudadanapr.com/>. Consultado el 5 de marzo de 2015.

6. Por ejemplo, Casa Pueblo estuvo involucrada desde el comienzo en la lucha contra la presencia de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la isla de Vieques (sobre este caso, véase McCaffrey, 2006), donde realizaron investigaciones que documentaron la gran contaminación producida durante 63 años de bombardeos militares (Massol Deyá y Díaz de Osborne, 2002).

7. <http://www.bosquesmodelo.net/>. Consultado el 5 de marzo de 2015.

8. http://casapueblo.org/?page_id=280, énfasis suplido. Ver también Massol et al., 2006: 25-26.

Reconectando ecología/economía/comunidad

Sin embargo, como señalan Reid y Taylor (2010), la recuperación de lo cívico también pasa por recobrar lo ecológico. Por eso no se puede entender ese cambio cívico-democrático que busca Casa Pueblo sin entender las iniciativas para reconectar a la gente con el bosque y su territorio como pilar de un proceso de transformación eco-social, colectiva e individual: la creación de una nueva lógica de relaciones sociales y relaciones con la naturaleza que, como sugiere Holloway (2014: 69), «privilegien el valor de uso por encima del valor de cambio [el *exchange value* del mercado], y la reciprocidad por encima de la acumulación», desde la cooperación solidaria. Estas iniciativas están centradas en revalorizar los bosques: como espacio de producción para proyectos económicos solidarios autosuficientes, como espacios de generación de conocimiento científico y de experiencias educativas transformativas, y como fuente de vida y valiosos servicios ecológicos (aire, agua, etc.) para todo el país.

La revalorización económica surgió en el seno de la lucha anti-minera, en una actividad donde, bajo el lema de «Sembrando Esperanza», se sembraron árboles enfatizando sus beneficios ecológicos (p. ej.: control de erosión, aire, sombra) así como su importancia en la producción de madera y frutos (Martínez-Reyes, 2009). Esto sentó las bases para el proyecto de producción y mercadeo de café de la región, que Casa Pueblo fundó en 1989 bajo el nombre de «Café Madre Isla», y que hoy continúa proveyendo una importante fuente de ingresos para la organización. También crearon una tienda comunitaria donde venden su café junto a artesanías y otros productos locales. Para Casa Pueblo esta estrategia económica está centralmente vinculada a su propuesta de autogestión y soberanía:

Through the process of establishing a viable organisation, it became evident to the volunteers at Casa Pueblo that economy is a

fundamental aspect in shaping social action, allowing for self-sufficiency and thus independence and self-determination.

Massol González et al. (2008: 6)

Estos espacios económicos sirven a su vez para fortalecer los lazos de solidaridad, de *comunidad*; la tienda, por ejemplo, es descrita por la organización como una escuela y un espacio de encuentro para que las personas se conozcan, intercambien conocimientos y planifiquen iniciativas de colaboración.

La revalorización del bosque como espacio pedagógico, por su parte, está basada en fomentar experiencias transformativas en su seno, donde se efectúan visitas guiadas, cursos cortos y semestrales, investigaciones y actividades culturales. Estas actividades son organizadas por el Instituto Comunitario de Biodiversidad y Cultura, fundado en 2002, y muchas se materializan fuera del salón de clases, en el «bosque escuela» La Olimpia, que funge como un gran aula sin paredes. El Instituto incluye una escuela de música y una galería de arte, además de cursos sobre temas ambientales, agroecología y arte, y proyectos de investigación. El objetivo es promover una «educación humanizadora» que genere estudiantes líderes y comprometidos «con sus familias, su comunidad, su pueblo y su ambiente»; es decir, con su patrimonio natural y cultural.⁹ El bosque se convierte así en un laboratorio para experimentar y *practicar* un aprendizaje que a su vez sirva para reconectar a las personas entre ellas, y con el territorio y su ecología, y que de este modo la comunidad «comience a *ser parte* de ese bosque» (Massol González, citado en Ruiz y Aponte, 2010). Es la creación de nuevas subjetividades solidarias, eco-lógicas y procomunes, que surgen desde las bases de la autogestión y de la experimentación en movimiento (cf. Holloway, 2001). Aludiendo al *ágora*, la plaza de asambleas populares de la antigua Grecia, dice Casa Pueblo:

9. http://casapueblo.org/?page_id=284. Consultado el 10 de agosto de 2014.



Voluntarios tuestan el Café Madre Isla (Fuente: www.casapueblo.org/index.php/tienda-artesana/)

El [Instituto Comunitario] debe ser en estos tiempos ese foro de reaprendizaje y discusión de los elementos de la naturaleza y de la vida misma para lograr procesar la realidad de una forma más ecléctica, integrada y universal... El cambio que se aspira es salirnos de un estado de inconsciencia a uno de atención concentrada sobre lo que somos y lo que nos rodea, ya que la conciencia va descubriendo la esencia y es precisamente la expansión de esa conciencia colectiva la que permitirá que la sociedad civil eleve entre sus prioridades la conservación del suelo patrio en torno a la integridad de nuestro ambiente, la cultura y las luchas como nación.¹⁰

Finalmente, la revalorización del bosque desde su valor como fuente de vida y espiritualidad es también parte de esa «educación humanizadora» de la que habla Casa Pueblo. Además, es clave para la proyección nacional del proyecto de Casa Pueblo. El bosque es *del pueblo*, y provee servicios ecológicos para todo Puerto Rico, en especial la conservación y purifica-

ción del agua.¹¹ Este acercamiento se entrelaza inevitablemente con la soberanía individual y colectiva, y con la autosuficiencia económica, igualmente fuente de vida. La cita de una activista y empresaria de ecoturismo en la asamblea popular en contra del gaseoducto expresa esta visión claramente:

Si Fortuño, su gobierno o quien sea, deciden imponer la construcción de este nefasto proyecto, sin dejar más alternativa que escoger entre la muerte o la vida, escogeré la vida. Por tanto, en mi derecho soberano a la autodefensa de las aguas, los bosques, el karso y la seguridad de nuestra gente, declaro que estoy lista para asumir la desobediencia civil pacífica como alternativa a la vida del pueblo de Puerto Rico.

Citada en Delgado Esquilín (2011)

Podría decirse que en este cometido de vincular a la gente con el territorio y el bosque – de reconstruir los *comunes* – el trabajo de Casa Pueblo ha sido exitoso: desde las decenas de

10. http://casapueblo.org/?page_id=280. Consultado el 10 de agosto de 2014.

11. En este bosque nace el Río Grande de Arecibo, que suple agua a 1,5 millones de personas, casi un tercio de la población de la isla (Martínez Reyes, 2009)

miles de visitantes anuales a Casa Pueblo y sus miles de voluntarios, desde los que respondieron a su llamado a ayudar a restaurar el Bosque del Pueblo tras un incendio intencional (Rodríguez, 2014), hasta las decenas de miles que marcharon en Adjuntas contra el gaseoducto.

Conclusiones: La lucha permanente y un proyecto de país

La lucha nunca cesa / La vida es lucha toda / por obtener la libertad ansiada / Lo demás es la nada, es superficie, es moda.

J.A. Corretjer (1957)

Desde el principio Casa Pueblo tuvo muy claro que su lucha no terminaba –por el contrario, comenzaba – con la victoria contra las minas. Por eso, habiendo derrotado aquel proyecto – y

reconociendo la tendencia del estado y el capital al despojo – se lanzaron a un proyecto *permanente* para recuperar un territorio y reconectar con sus comunes. Sus gestores lo llaman un proceso revolucionario de «autogestión comunitaria» en donde la soberanía se ejerce desde abajo por medio de la solidaridad, rompiendo con la dependencia política y económica del estado y la partidocracia, y enfatizando independencia de voz y criterio: en otras palabras, por medio del *poder hacer*.

Pero Casa Pueblo no sólo busca crear un espacio de autonomía local, sino que busca fomentar un proyecto político propositivo que cambie el estado retando sus lógicas dominantes – la jerarquía tecno-burocrática, el desarrollismo, y la separación de la ecología y la sociedad. Casa pueblo ha propuesto y logrado cambios importantes en la política estatal forestal. A la misma vez, la entidad ha puesto en práctica alternativas movidas por un amor y compromiso con la «patria geográfica»

Mapa 1. Bosque Modelo Nacional 2012 (Fuente: www.casapueblo.org)



fica», o en palabras de los Zapatistas: el «amor por nuestras familias y nuestras patrias (...) un deseo de mejorarnos a nosotros mismos y a nuestro país» (EZLN, 2002). Esto no es una abstracción de compromiso patrio de la democracia liberal, en donde los ciudadanos sirven en reverencia a un estado-nación, sino iniciativas que – desde lo local hasta lo transnacional – se unen en «un abrazo de compromiso para salir (...) hermanados, en un proceso de trascendencia encaminado a la acción reivindicadora al rescate de nuestro propio destino» (Massol González, citado en Delgado, 2011) Es una visión de soberanía en donde se fortalece la interdependencia entre las personas y con el territorio y su ecología. Desde esta perspectiva, los proyectos de recuperación de bienes comunes no deben verse meramente como proyectos de conservación ecológica, desarrollo económico o autonomía organizativa, sino como parte de un proyecto de país basado en un conjunto diverso de prácticas que «contribuyen a la transformación de la Patria» (Massol González, 2014).

Mas no se propone un modelo con pautas. Más bien, es un proyecto de experimentar con el *ejercicio* del poder político del pueblo, de andar y cuestionar sin contestaciones ideológicas pre-determinadas: «es un proyecto de evolución y reevolución... es dinámico. No tiene miedo de enfrentarse a los errores o las contradicciones» (Massol González, citado en Ruiz Marrero, 2014). Esta política del *andar* de Casa Pueblo es también una política de la *esperanza*, de transformar imaginarios. Por eso, tras el incendio que causó graves daños al Bosque del Pueblo, la entidad convocó a una siembra, como hicieron antes contra las minas. La clave, según ellos, está en poder visibilizar, mirando con un «lente fino», las iniciativas de autogestión que están en cada esquina del país y que son su «reserva moral» (Massol González, citado en Reyes Angleró, 2011). Dicho de otra forma, Casa Pueblo nos ofrece un discurso y una práctica que no constituyen una ideología de vanguardia, sino que se convierten, como dice el Subcomandante Marcos (citado en Reid y Taylor, 2010: 124), en «puente y piedra y maíz y árbol y la esperanza del mañana». ■

Agradecimientos

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo financiero del *Seventh Framework Programme (FP7) for research, technological development and demonstration (Marie Curie Actions)*, de la Unión Europea, «grant agreement» no. 289374 (ENTITLE). Agradezco además a Irina Velicu y a Dwight García por sus incisivos comentarios a versiones anteriores de este ensayo.

Referencias

- ATILES-OSORIA, J. M., (2013) «Colonialismo ambiental, criminalización y resistencias: Las movilizaciones puertorriqueñas por la justicia ambiental en el siglo XXI» *Revista Crítica de Ciências Sociais*, vol. 100 (mayo), p. 131-152, <http://rccs.revues.org/5262>.
- CAFFENTZIS, G. (2010) «The future of ‘the commons’: Neoliberalism’s ‘plan B’ or the original disaccumulation of capital?» *New Formations*, vol. 69, pp. 23-41.
- COLÓN RIVERA, J., CÓRDOVA ITURREGUI, F. y CÓRDOVA ITURREGUI, J. (2014) *El proyecto de explotación minera en Puerto Rico (1962-1968): Nacimiento de la Conciencia ambiental moderna*. San Juan, Puerto Rico: Ediciones Huracán.
- CONCEPCIÓN, C.M. (1995) «The origins of modern environmental activism in Puerto Rico in the 1960s» *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 19 (1), pp. 112-128.
- CORRETTJER, J.A. (1957) *Distancias*. San Juan: Ediciones Vel.
- D’ALISA, G. (2013) «Bienes comunes: las estructuras que conectan» *Ecología Política*, vol. 45, pp. 30-41.
- DE ANGELIS, M. (2013), «Plan C&D: Commons and Democracy» en ANGÉLIL, M. y HEHL, R. (eds.), *Collectivize! Essays on the Political Economy of Urban Form* (pp. 121-143). Berlin: Ruby Press.
- DE ANGELIS, M. (2003), «Reflections on alternatives, commons and communities», *The Commoner*, vol. 6, pp. 1-14.

- DELGADO ESQUILÍN, G. (2011), «Consideran al gasoducto Vía Verde el próximo Vieques», *Mi Puerto Rico Verde*, 2 de mayo. <http://www.miprv.com/sera-el-gasoducto-via-verde-el-proximo-vieques/>
- DÍAZ, N. (2012), «Casa Pueblo recibe galardón por su labor comunitaria y ambiental», *Diálogo*, 2 de octubre.
- EL NUEVO DÍA (2012), «La Gran Entrevista: Arturo Massol - La Solución está en las comunidades», *El Nuevo Día*, 22 de enero.
- EZLN - EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (2002), A Zapatista response to «The EZLN is not anarchist» (Traducción M. Antipathy), *Green Anarchist*, vol. 8 (Spring), p. 5.
- GORZ, A. (2012) *Ecológica*. (Traducción Pablo Betesh). Madrid: Clave Intelectual.
- HOLLOWAY, J. (2014) «¡Comunicemos!», en COMPOSTO, C. y NAVARRO, M.L. (compiladoras), *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina* (pp. 439-450). México, D. F.: Bajo Tierra Ediciones.
- HOLLOWAY, J. (2001) «El zapatismo y las ciencias sociales en América Latina», *Observatorio Social de América Latina*, no. 4 (enero), pp. 171-176.
- MARTÍNEZ-REYES, J. (2009) «Comunidad, Estado y naturaleza: La ecología política del manejo colaborativo de bosques», *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 20, pp. 128-155.
- MASSOL DEYÁ, A. y DÍAZ DE OSBORNE, E. (2002) *Ciencia y Ecología: Vieques en Crisis Ambiental*. Adjuntas: Publicaciones Casa Pueblo, Tercera Edición.
- MASSOL GONZÁLEZ, A., GONZÁLEZ, E., MASSOL DEYÁ, A., DEYÁ DÍAZ, T., y GEOGHEGAN, T. (2006), *Bosque del Pueblo, Puerto Rico: How a fight to stop a mine ended up changing forest policy from the bottom up*. International Institute for Environment and Development, Londres.
- MASSOL GONZÁLEZ, A., ANDROMACHE JOHNNIDIS, A. y MASSOL DEYÁ, A. (2008) *The Evolution of Casa Pueblo, Puerto Rico From Mining Opposition to Community Revolution*. International Institute for Environment and Development, Londres.
- MASSOL GONZÁLEZ, A. (2014) «Casa Pueblo con luz propia», *El Nuevo Día*, 14 de octubre.
- MCCAFFREY, K.T. (2006) «Social Struggle against the U.S. Navy in Vieques, Puerto Rico: Two Movements in History», *Latin American Perspectives*, vol. 33 (1), pp. 83-101.
- ORTIZ-CARRIÓN, B. Y MEDINA-MUÑOZ, J. (2011) «La vorágine del desarrollo industrial y una biofilia prevaecente. El caso de la comunidad Juana Matos, Cataño (Puerto Rico)», *Ecología Política*, vol. 41, pp. 62-66.
- OSTROM, E. (1990) *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Oxford: Oxford University Press.
- REID, H. y TAYLOR, B. (2010) *Recovering the Commons: Democracy, Place and Global Justice*. Chicago: University of Illinois Press.
- REYES ANGLERÓ, M. (2011) «Alexis Massol o el presente del porvenir», *80 grados*, 21 de abril, <http://www.80grados.net/alexis-massol-o-el-presente-del-porvenir/>
- RIVERA RAMOS, E. (2015) «Proyecto y país», *El Nuevo Día*, 20 de enero.
- RODRÍGUEZ, D. (2014) «Todos unidos por el Bosque del Pueblo», *Diálogo*, 26 de mayo
- RUIZ MARRERO, C. (2014) «La lucha ecológica venció al cobre en Puerto Rico», *IPS Noticias*, <http://www.ipsnoticias.net/2014/10/la-lucha-ecologica-vencio-al-cobre-en-puerto-rico/>
- RUIZ MARRERO, C. (2005) «El ambientalismo en el 2005», *Claridad*, 6 de enero.
- RUIZ SIERRA, A., y APONTE, L. (2010) «Casa Pueblo de Puerto Rico. El Co-Manejo del Bosque del Pueblo y la Gobernanza de los Recursos Naturales Comunes», *Serie Ocasional de Estudios de Casos Multimediales*, 1 (Agosto), pp. 1-53.
- SMITH, N. (2010) «The Revolutionary Imperative», *Antipode*, vol. 41 (s.1), pp. 50-65.
- VELICU, I. y KAIKA, M. (2015) «Undoing environmental justice: Reimagining equality in the anti-mining movement of Rosia Montana», *Geoforum*, en prensa.

Breves

Monedas sociales

Kristofer Dittmer

Cooperativas

Nadia Johanisova, Ruben Suriñach Padilla y Philippa Parry

Eco-comunidades

Claudio Cattaneo

Neorrurales

Rita Calvário y Iago Otero

El nuevo paso hacia la relocalización energética

Pablo Cotarelo Álvarez

Municipios: desperdicio alimentario y necesidad, cara a cara

Maria Mestre Montserrat

Minería de oro en Venezuela: luchas simbólicas vs políticas redistributivas

Francisco F. Herrera y Iokiñe Rodríguez

Soberanías de los territorios étnicos. Una visión desde Colombia

Hildebrando Vélez Galeano

Humedal de «Villa María» hacia una conservación efectiva, Chimbote, Perú

Alejandro Samuel Flores Lozano

Gobernanza de la pesca en el sistema socio-ecológico de Barú: aproximaciones a la autoorganización comunitaria

Esteban García Romero y Felipe Hernández Crespo

Basura cero como alternativa a la incineración de residuos en cementeras Movimiento Pro Salud, Apaxco, México

Brisa Violeta Carrasco Gallegos y Jorge Tadeo Vargas Juvera

La remunicipalización de la gestión de servicios municipales

Jordi Colomer i Missé



Monedas sociales¹

Kristofer Dittmer*

El dinero es definido tradicionalmente por sus tres funciones principales: una unidad de cuenta, un medio de cambio y un depósito de valor. Las monedas sociales son dinero no convencional, es decir, dinero no reconocido por ningún gobierno nacional como moneda legal. Las monedas sociales son creadas para toda una gama de diversos propósitos. Con diferentes connotaciones, son también definidas como monedas alternativas, complementarias o locales. Pretender una definición estricta no resulta sencillo; no obstante, los términos hacen referencia a monedas que principalmente son creadas por la sociedad civil y a veces por autoridades públicas, para circular a nivel subnacional.

Desde comienzos de la década de 1980, en todo el mundo ha habido experimentos con monedas sociales en una escala sin paralelos desde la Gran Depresión. Los cinco ejemplos actuales más significativos son las LETS (acrónimo en inglés de Sistemas o Esquemas de Intercambio Local), los bancos de tiempo, las HOURS, las monedas de mercados de trueque y las monedas locales convertibles (para una introducción detallada ver North, 2010). Muchas de estas se han extendido a través del movimiento ecologista internacio-

nal, para el que este tipo de monedas encarnan principios ecológicos como el de 'lo pequeño es hermoso' y la economía de bases. Sin embargo, el legado ideológico de las monedas sociales se remonta al menos a los socialistas utópicos del siglo XIX, como Owen y Proudhon, y sus intentos por crear mercados más progresistas mediante las innovaciones monetarias. Los experimentos contemporáneos con monedas sociales dentro de la izquierda pueden entenderse como parte de su reevaluación de los enfoques basados en el mercado, en vista del fracaso de la planificación centralizada en los países socialistas. Las monedas sociales también han sido reivindicadas por los libertarios de derechas en la tradición de E. C. Riegel, aunque generalmente con otras denominaciones, como «sistemas de crédito mutuo».

La importancia de las monedas sociales para el decrecimiento depende de qué se entiende por este último. En cierto sentido, el decrecimiento puede ser interpretado como un distanciamiento intencional de la sociedad basada en el **crecimiento**, con la finalidad de evitar una mayor destrucción ambiental y un mayor sufrimiento humano. Por otra parte, en el contexto de una crisis a largo plazo del **capitalismo** mundial que se manifiesta a través de niveles crónicamente deficientes de crecimiento (un escenario que muchos decrecentistas consideran probable en un futuro no muy distante), el decrecimiento puede ser visto como una adaptación socialmente equitativa a una sociedad sin **crecimiento**. Debido a que los experimentos contemporáneos con monedas sociales han tenido lugar dentro

* Recerca & Decreixement e ICTA (Institut de Ciències y Tecnologia Ambientals), Universitat Autònoma de Barcelona (kittditt@hotmail.com). El autor agradece a Peter North por las conversaciones sobre las monedas sociales.

1. La versión inglesa de este artículo se ha publicado en el libro *Degrowth: a vocabulary for a new era* (2014, eds. Giacomo D'Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis). La versión traducida al castellano puede encontrarse en *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era*, Icaria Editorial (2015).



Nodo de la Red Global de Trueque, Quilmes Argentina, marzo de 2003 (Autor: Peter North)

de los habituales altibajos del capitalismo, su historial es de mayor relevancia para el primer escenario que para el segundo. De acuerdo a este historial, las monedas sociales no han facilitado considerablemente ningún distanciamiento voluntario de la senda del **crecimiento**. Su potencial para un decrecimiento intencionado puede ser evaluado en relación a cuatro criterios, que están entre las motivaciones más comunes para establecer y participar en sistemas de monedas sociales. La *consolidación comunitaria*, es decir, la resurrección y mejoramiento de las redes sociales locales; la promoción de *valores alternativos* arbitrada mediante el intercambio económico (por ejemplo, cuestionando los valores convencionales relativos a raza, clase, género y naturaleza); la facilitación de *formas alternativas de subsistencia*, en las que una mayor autodeterminación sobre las actividades productivas reduzca el imperativo de buscar empleo sin tener en cuenta las consecuencias ambientales; y la *eco-localización*, es decir, la localización ecológica y políticamente motivada de redes de producción y consumo. Un estudio reciente de la bibliografía académica sobre LETS, bancos de tiempo, HOURS y monedas convertibles locales encontró que la base para proponerlas como herramientas para un decrecimiento intencionado era bastante débil, a juzgar por su desempeño respecto a los cuatro criterios antes citados (Dittmer, 2013).

La importancia para el decrecimiento de las monedas sociales en el segundo sentido es más especulativa, puesto que no hay un precedente de una crisis de larga duración del **capitalismo**. Las

experiencias recientes sugieren que las monedas sociales pueden jugar un papel interesante en situaciones en que las restricciones al acceso popular al dinero convencional provocan un aumento generalizado de necesidades insatisfechas, junto con capacidades productivas ociosas. La utilidad de las redes de monedas de trueque para millones de argentinos durante la crisis de 2001-2002 es un ejemplo destacado de este punto (ver por ejemplo Gómez, 2009; North, 2007). Sin embargo, estas redes en gran medida se basaron en el intercambio de posesiones domésticas de segunda mano de la clase media, que se habían acumulado en los años previos de relativa abundancia, y las redes se vieron sobrepasadas hasta colapsar, en parte porque esa capacidad de reserva se había agotado. Afortunadamente, en este estadio de la crisis el gobierno implantó una serie de importantes beneficios sociales. La atenuación de una crisis de mayor duración, donde podrían esperarse menores políticas de prevención social, requeriría de un impacto positivo mucho más vasto sobre los sectores productivos que los logrados por las monedas de trueque en Argentina.

Uno de los principales retos para la adopción de monedas comunitarias por parte de los sectores productivos formales es el problema de cómo superar las contradicciones entre un mayor acceso a los recursos provocado por la circulación a gran escala, y las dificultades para gestionar la moneda. A escala mundial, las monedas comunitarias sólo han escapado a esta contradicción, hasta cierto punto, respaldando el suministro monetario con dinero convencional; una solución poco viable en una situación de escasez de dinero. En Argentina, las monedas a gran escala que habían servido a gran parte de los participantes colapsaron por una hiper-inflación debida a la mala gestión monetaria, combinada con frecuentes casos de falsificación. Como esto demuestra, los sistemas monetarios a gran escala requieren de enormes cantidades de recursos financieros y organizativos, y podríamos generalizar afirmando que históricamente los ejemplos más estables han sido obra de los estados (léase también **dinero público**). Todo esto deja poco margen a favor del mantenimiento de sistemas

monetarios materialmente significativos en una posición de resistencia contra el estado. No obstante, en Argentina, algunas redes pequeñas lograron sobrevivir a pesar del colapso de las grandes; pero para entonces la peor parte de la crisis había pasado, por lo que estas redes sólo fueron útiles a unas pocas personas, con frecuencia más por razones sociales que económicas. Quizá en una crisis de larga duración semejantes redes puedan jugar un papel más perdurable. Su potencial para una gestión democrática, a diferencia de las incontrolables redes a gran escala, continuará siendo atractivo para muchos defensores del decrecimiento. En un escenario de crisis prolongada del **capitalismo**, en el que grandes sectores de la población se verán obligados a valerse por sí mismos, por ser considerados superfluos para los intereses de los gobiernos y de los capitalistas, las monedas comunitarias pueden tornarse especialmente útiles. ■

Referencias

- DITTMER, K. (2013), *Local Currencies for Purposive Degrowth? A Quality Check of some Proposals for Changing Money-as-Usual*, Journal of Cleaner Production, vol. 54, p. 3–13.
- GÓMEZ, G. M. (2009), *Argentina's Parallel Currency: The Economy of the Poor*, Londres: Pickering & Chatto.
- NORTH, P. (2007), *Money and Liberation: The Micropolitics of Alternative Currency Movements*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- NORTH, P. (2010), *Local Money: How to Make it Happen in Your Community*, Totnes: Transition Books.

Cooperativas¹

Nadia Johanisova*, Ruben Suriñach Padilla** y Philippa Parry***

El término cooperativa hace referencia a un tipo de estructura organizativa aplicable a diversas clases de empresas en muchos sectores. Muchas cooperativas también se ven a sí mismas como parte de un movimiento mundial originado en Europa en el siglo XIX. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI; una federación de redes de cooperativas que representa a mil millones de individuos) define una cooperativa como una 'asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes mediante una empresa de propiedad compartida y democráticamente controlada'. En 1995, la ACI adoptó los siguientes siete principios cooperativos: asociación voluntaria y abierta; control democrático por los miembros (principio de un miembro, un voto: los miembros participan en la gestión de la cooperativa y los representantes electos deben rendirles cuentas); participación económica de los miembros; autonomía e independencia; compromiso con la educación sobre la ética y la práctica cooperativa; cooperación entre cooperativas; interés por el desarrollo sostenible de sus comunidades (Birchall, 1997: 64-71).

Las cooperativas operan en toda una variedad

de sectores y se agrupan en tres clases principales: cooperativas de producción o de trabajo (desarrolladas primero en Francia e Italia), cooperativas de consumidores (desarrolladas inicialmente en el Reino Unido por los Pioneros de Rochdale) y cooperativas de crédito (desarrolladas primero en Alemania). Otro grupo importante es el de las cooperativas agrícolas de compra y venta (especialmente exitosas en Escandinavia).

Las cooperativas han tenido una historia de dificultades, controladas por dictaduras (como en la España franquista o en Checoslovaquia durante la etapa comunista), promovidas indiscriminadamente por muchos gobiernos durante las décadas de 1950 y 1960, denostadas luego en Europa central y oriental y en muchos países del Sur Global bajo el neoliberalismo (Birchall, 1997: 143, 169). Algunas cooperativas modernas que comenzaron con una ética vigorosa han ido luego perdiéndola, y están ahora predominantemente motivadas por el beneficio. Las razones por las que muchas cooperativas exitosas han perdido su ética y derivado hacia posiciones convencionales son diversas.

Una de las causas está vinculada a las presiones económicas de un entorno competitivo. Para sobrevivir económicamente, una cooperativa puede decidir reducir el número de socios, deslocalizar la producción o limitar los componentes locales y de comercio justo de sus productos. Otra causa fundamental tiene que ver con la escala. Las cooperativas en crecimiento pueden encontrarse con que no reúnen capital suficiente con las aportaciones de sus miembros, según las estrictas reglas del cooperativismo. Por lo tanto, pueden llegar a descartar la estructura cooperativa. Ade-

* Universidad Masaryk

** Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) (rubens@pangea.org)

*** Investigadora del Forum for the Future

1. La versión inglesa de este artículo se ha publicado en el libro *Degrowth: a vocabulary for a new era* (2014, eds. Giacomo D'Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis). La versión traducida al castellano puede encontrarse en *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era*, Icaria Editorial (2015).



La cooperativa consumidora Checa Konzum
(Autora: Nadia Johanisova)

más, a medida que la facturación y el número de socios de una cooperativa aumentan y su gestión se vuelve más compleja, sus miembros pueden dejar de identificarse con ella y volverse pasivos, a la vez que los gestores van acumulando cada vez más poder. En algunas grandes cooperativas de vivienda británicas, variantes en tal sentido han conducido a un proceso de des-mutualización, en el que los miembros votaron para reconvertirse en empresas compartidas. Dentro del movimiento de cooperativas de crédito en Austria, ha habido quejas sobre federaciones (grupos paraguas) que usurpaban el poder de toma de decisiones de las cooperativas miembro.

Las formas para conseguir que las cooperativas se ciñan a su ética son variadas. Un factor importante es el énfasis en la educación sobre los principios cooperativos y el establecimiento de políticas explícitas para favorecer la participación de los miembros en la gestión. Otro es fortalecer los vínculos entre las cooperativas para distanciarse de la economía convencional. Esto puede implicar instituciones de inversión ética y comunitaria. Las cooperativas que tienen lo que Richard Douthwaite llamó un 'mercado comunitario', como los socios-lectores de un periódico de propiedad cooperativa o los clientes-miembros de un sistema de agricultura apoyada por la comunidad, no tienen que depender exclusivamente de los precios como única motivación para los clientes. Finalmente, optar por una estrategia de replicación (cooperativas más pequeñas) o por una de crecimiento (una gran cooperativa) puede contribuir a conservar

el empoderamiento y la lealtad de los miembros.

Comparado con el modelo de empresa lucrativa convencional, basado en la propiedad de accionistas externos, el modelo de empresa cooperativa se adecua más al decrecimiento por lo siguiente (Johanisova y Wolf, 2012: 565):

- *Reglas sobre la participación en la empresa:* las participaciones que los miembros han invertido en su cooperativa habitualmente no son transferibles a otros y sólo pueden ser canjeadas por su valor original ('participaciones con valor nominal'). Esto desalienta un enfoque de crecimiento por el crecimiento mismo, pues el valor de la participación de un miembro no aumenta con el crecimiento de la cooperativa. Como no se puede especular con las participaciones, fomenta una asociación a más largo plazo y centrada en el territorio, más favorable a considerar valores comunitarios y ambientales a largo plazo.
- *Estructura de gestión:* la estructura de gestión democrática abre el espacio de toma de decisiones a un amplio espectro de sectores implicados. La estructura cooperativa, si está bien lograda, anula la distancia entre propietarios, accionistas, trabajadores y consumidores, y se desenvuelve dentro de una lógica de apoyo mutuo para satisfacer necesidades.
- *El dinero como 'servidor, no como amo':* una cooperativa está exenta de los requisitos del deber fiduciario (la obligación legal de maximizar los beneficios de los accionistas). Una vez más, esto favorece objetivos tales como la priorización de la continuidad de la organización, la protección de los puestos de trabajo y la atención a los problemas ambientales. Además, una cooperativa que da prioridad al servicio a sus asociados tiende principalmente a satisfacer necesidades reales, no superfluas. Puesto que el tercer principio cooperativo enfatiza que los miembros que trabajan para la cooperativa, o que están activamente comprometidos con ella, tienen el mismo derecho a una participación en los beneficios que aquellos que han invertido dinero en lugar de trabajo, los activos financieros son

distribuidos de manera más equitativa dentro de una cooperativa.

Pocas de las grandes cooperativas convencionales y sus federaciones han tenido alguna interacción con los movimientos ecologista y por el decrecimiento y sus respectivos debates. Al mismo tiempo, hay dos ámbitos emergentes que ofrecen ejemplos de nuevas estructuras cooperativas vinculadas a las ideas y las prácticas del decrecimiento.

Primero, el movimiento de la Economía Solidaria (o Economía Social y Solidaria), que es relativamente joven – tiene sólo unas décadas – y que se ha visto potenciado por el movimiento anti-globalización, incorpora diferentes enfoques a favor del cambio social, vinculando temas de justicia social y de ecología. La Red Internacional para la Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS) declaró después de la cumbre Río+20 de junio de 2012:

«(...) muchas iniciativas económicas y sociales (...) existen en todos los continentes (...). Abarcan numerosos sectores (...) y son una prueba fehaciente de la vibrante y concreta posibilidad de elaborar diferentes modelos de desarrollo y formas de organización y sociedad en los que la vida, el pluralismo, la autogestión y la justicia social y ambiental definen una economía solidaria, una economía diferente a la del capital.»

RIPESS, 2012

La estructura dominante entre las organizaciones representadas por la RIPESS es la de cooperativas.

Un ejemplo sería Som Energía, una cooperativa catalana de energías renovables cuyos miembros obtienen energía renovable a través de la cooperativa y pueden también invertir en nuevos proyectos de este tipo de energías (<http://www.somenergia.coop>; consultada el 12 de enero de 2014).

Segundo, hay muchas iniciativas bajo lo que podríamos llamar ‘Innovaciones Ciudadanas y/o Comunitarias en la Sostenibilidad’ (ICOS).

Este concepto define una gama de iniciativas de auto-organización comunitaria y hasta ahora se ha aplicado principalmente en países del Norte Global. Las Innovaciones Ciudadanas y/o Comunitarias desarrollan estructuras de producción y consumo fundamentadas en los valores de empoderamiento comunitario y sostenibilidad (Seyfang 2009). Incluyen redes de alimentos orgánicos locales y grupos de consumidores, mercados de trueque y bancos de tiempo, monedas locales, huertos comunitarios, vivienda comunitaria, etc. Las ICOS son frecuentemente estructuras cooperativas informales, que fusionan los valores del **ecologismo** y la justicia social (Suriñach-Padilla, 2012). En los países europeos, los movimientos relacionados con el decrecimiento han identificado a las ICOS como uno de los principales medios políticos a través de los cuales alcanzar sus metas (por ejemplo, Decrece Madrid, en España, o el Movimiento de Ciudades en Transición, a escala mundial). ■

Referencias

- BIRCHALL, J. (1997), *The International Co-operative Movement*. Manchester: Manchester University Press.
- JOHANISOVA, N. y WOLF, S. (2012), «Economic Democracy: A Path for the Future?», *Futures*, vol. 44 (6), pp. 562–570.
- Réseau Intercontinental de Promotion de l’Economie Social Solidaire (2012) *The economy we need: Declaration of the social and solidarity economy movement at Rio +20*. Disponible en línea en www.ripest.org/ripest-rio20-declaration/?lang=en, consultado el 10 de julio de 2013.
- SEYFANG, G. (2009), *The New Economics of Sustainable Consumption: Seeds of Change*, Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- SURIÑACH-PADILLA, R. (2012), «Innovaciones Comunitarias en Sostenibilidad, ¿Cómo lidera la sociedad civil?», En CRIC (ed.) *Cambio Global España 2020/50. Consumo y estilos de vida*, (pp. 124–38), Barcelona: CCEIM.

Eco-comunidades¹

Claudio Cattaneo*

Las eco-comunidades son planificadas y establecidas específicamente para que quienes participan puedan vivir y trabajar de acuerdo a principios ecológicos, promoviendo el compartir (léase también **reparto del trabajo**) y buscando el bienestar mediante estilos de vida más sostenibles, democracia directa y cierto grado de **autonomía**.

Las eco-comunidades incluyen a las ecoaldeas, que según Gilman (1991: 10) se caracterizan por ser «asentamientos a escala humana y con múltiples funciones, en los que las actividades humanas se integran en el mundo natural sin causar daños, de un modo que favorece el desarrollo humano saludable y puede prolongarse indefinidamente en el tiempo». Aunque las ecoaldeas representan la forma más habitual, las eco-comunidades pueden establecerse también en edificios aislados o dentro de las ciudades (algunas de ellas bajo la forma de viviendas cooperativas compartidas).

Las eco-comunidades, en general, se caracterizan por su tamaño relativamente pequeño: por debajo o en torno al centenar de integrantes. Las hay tanto de carácter urbano como 'rurbano', aunque la mayoría de ellas están situadas en zona rurales, donde el acceso a los medios de producción naturales es más sencillo y los alquileres y la propiedad son más baratos. Los participantes practican la agricultura ecológica en pequeña escala y la permacultura, la producción artesanal

y de talleres, la auto-construcción o las prácticas de háztelo-tú-mismo (DIY por sus siglas en inglés: *Do It Yourself*), además de dar prioridad a las energías renovables o a los medios de producción y de transporte que ahorran energía, como las bicicletas (ver **Nowtopistas**). Los materiales y los procesos de producción tienden a ser de bajo impacto ambiental y con frecuencia los objetos son reciclados de los desechos, reutilizados o reparados. El conjunto de estas modalidades de abastecimiento agrícola, de materiales y de servicios, ponen de manifiesto la idea de ámbitos convivenciales donde los medios de producción son gestionados en común (Illich, 1973; ver **convivencialidad**).

Las eco-comunidades pueden ser consideradas tanto **procomunes** materiales como inmateriales, puesto que gestionan la tierra y los recursos físicos de forma comunitaria mientras que, simultáneamente, establecen normas, convicciones, instituciones y procesos que fomentan una identidad común, que a su vez contribuye a la preservación y reproducción de la comunidad.

Deseosos de establecer lugares donde puedan vivir y cultivar sus propios ideales utópicos, sus participantes forman parte a menudo de una ola de **neorrurales** inspirada en revistas como *In Context* (EEUU) o *Integral* (España). El movimiento tuvo su origen en la década de 1960, y en 1994 se constituyó la Red Global de Ecoaldeas.

Algunos ejemplos destacables, que también demuestran las diversas tipologías de las eco-comunidades, serían: *The Farm*, en Tennessee, en una propiedad adquirida comunalmente por hippies veganos de California; *Twin Oaks*, una

* Recerca & Decreixement e ICTA, Universitat Autònoma de Barcelona (claudio.cattaneo@liuc.it)

1. La versión inglesa de este artículo se ha publicado en el libro *Degrowth: a vocabulary for a new era* (2014, eds. Giacomo D'Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis). La versión traducida al castellano puede encontrarse en *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era*, Icaria Editorial (2015).

comunidad rural igualitaria en Virginia basada en un sistema de crédito estructurado en función de la aportación de trabajo (Kinkaid, 1994); *Lakabe*, una aldea ocupada en Navarra con una panadería comercial gestionada comunalmente; y *Longomai*, un pragmático vástago del movimiento de Mayo de 1968, con una propiedad principal en el sur de Francia y varias comunidades satélite establecidas en lugares de Francia, Suiza y Alemania.

Los valores utópicos se manifiestan en la creación de una identidad de grupo, en compartir ciertos ideales culturales y políticos (y a veces también espirituales), y en el establecimiento de prácticas organizativas que pueden abarcar desde la simple necesidad de un lugar donde residir hasta el desarrollo de un proyecto de vida en común.

Una eco-comunidad constituye una entidad especial que existe entre el individuo y la sociedad como un todo. Se caracterizan por sus dimensiones ambientales (eco-) y sociales (comunidad), las cuales, en conjunto, son consideradas por los eco-comuneros como rasgos prácticamente ausentes en las relaciones vitales de las sociedades (post)industriales.

Existen grandes diferencias entre las comunidades en lo concerniente a la importancia de la esfera individual dentro de la comunidad, y sobre los niveles de autonomía respecto al resto de la sociedad. Sin duda, estos son importantes desafíos para el desarrollo de cualquier proyecto de eco-comunidad.

Al tender un puente entre la escala individual-familiar y la escala de la sociedad en su conjunto, las eco-comunidades se caracterizan por procesos de toma de decisiones auto-organizados que, entre otras cosas, determinan la naturaleza y la dimensión ecológica del proyecto y la integración entre las economías individual y comunal. Normalmente, las eco-comunidades adoptan procesos de toma de decisiones que son horizontales y deliberativos, en lugar de representativos, mientras que algunas adoptan el consenso en lugar de las decisiones por mayoría.

Las eco-comunidades son en cierto sentido *oikonomias* aristotélicas (remitiendo al arte de la buena vida y, literalmente, a la «administración de la casa»). El dinero no juega un papel prin-



Visita a Can Masdeu (Autora: Irmak Ertör)

cial; es simplemente un medio para satisfacer necesidades. Las eco-comunidades evitan la acumulación porque el colectivo garantiza un nivel mínimo de bienestar a todos sus miembros. El tipo de modelo económico varía enormemente entre una comunidad y otra. Algunas comparten todo el dinero entre sus miembros, otras conservan una sólida esfera económica individual. Un estudio de ocupaciones rurales, que podrían ser consideradas un caso particular de eco-comunidades, postula la existencia de una correlación entre el grado de aislamiento de la comunidad y su grado de comunalismo. Las eco-comunidades situadas cerca de grandes ciudades son más proclives a mantener un alto porcentaje de economías (monetarias) personales (Cattaneo, 2013).

Las fuentes de ingresos monetarios también varían bastante. En general, prevalecen los principios de autogestión cooperativa y la eco-comunidad produce colectivamente mercancías que pueden ser vendidas localmente o fuera, por ejemplo en ferias y mercados. Las comunidades más grandes, como *Longomai* en Francia, dependen de la captación de fondos y, cada vez más, del *crowdfunding* (financiación colectiva). Las eco-comunidades con un alto grado de integración financiera entre sus miembros, funcionan como '**cooperativas** integrales', donde los trabajadores, productores y consumidores son parte constitutiva de la misma organización.

Las eco-comunidades permiten visualizar cómo sería una sociedad de decrecimiento. Cualquier concreción de las intenciones utópicas depende de una fuerte voluntad y de un pragmatismo que puede chocar con los ideales originales.

En las fases iniciales (importantes en el comienzo de una transición social) la prioridad es lograr que las cosas salgan bien; en tales circunstancias difíciles, la austeridad auto-impuesta y la auto-explotación de los miembros suelen ser habituales. Mediante procesos de auto-organización, una eco-comunidad escoge vivir independientemente de la sociedad en general. Como apunta Marcuse en *El hombre unidimensional*, una sociedad liberada del control y la manipulación externos será capaz de establecer sus satisfactores de necesidades; los participantes escogen convertirse en protagonistas de sus vidas y fomentan un imaginario de decrecimiento, confiéndole a la comunidad la base de autoridad económica y socio-política que habitualmente caracterizan a los mercados capitalistas y al aparato estatal.

Si la comunidad sobrevive a esta fase inicial, es muy probable que luego surja una práctica decrecentista de sano funcionamiento ecológico y **convivencialidad** social. No existen datos empíricos sobre las tendencias en consumo energético y de materiales a lo largo del tiempo en las eco-comunidades. Una hipótesis factible es que la mayoría de las eco-comunidades comiencen con una caída drástica en el consumo personal de materiales y energía, pero según van entrando en una fase de madurez, nuevas condiciones de vida más confortables aunque no más sostenibles van reemplazando a las iniciales (aunque las primeras seguirán siendo menos intensivas en recursos que la sociedad en su totalidad).

Las eco-comunidades desarrollan prácticas de **simplicidad** voluntaria. Aunque esto forma parte del imaginario decrecentista, podría criticarse a algunos defensores de la simplicidad porque evitan comprometerse con los problemas sociales y con las acciones políticas. En general, no se puede caracterizar a las eco-comunidades como políticas o apolíticas. En un extremo del espectro, están aquellas que podrían considerarse como ‘botes salvavidas’, que son comunidades con límites claros y ‘fronteras cerradas’, mientras que en otras, especialmente las que se adhieren a los ideales políticos de la izquierda radical, sus miembros son más conscientes de la necesidad de cooperar más allá de los límites y fomentar un

cambio social universal. La mayoría de las eco-comunidades tiene claro que su poder es limitado y por lo tanto adhieren a una filosofía afín a la de Holloway, de ‘cambiar el mundo sin tomar el poder’. Esto puede llegar a suceder mediante la constitución y consolidación de redes de la base a la base – más que por procesos de abajo hacia arriba – que contribuyan a un abandono estratégico del sistema (Carlsson y Manning, 2010) en número cada vez mayor y con la consecuente reducción del papel, el tamaño y el poder que hoy detenta el establecimiento. La extensión de estas prácticas a ámbitos más amplios de la sociedad, más allá de los habitados por personas ecológicamente conscientes, todavía no ha acontecido. La persistente crisis económica y ecológica actual puede ser una buena ocasión para fomentar las eco-comunidades y crear así un fenómeno social que vaya más lejos que el movimiento contracultural que las precedió. ■

Referencias

- CARLSSON, C. y MANNING, F. (2010) «*Nowtopia: Strategic Exodus?*» *Antipode*, vol. 42:4, pp. 924–953.
- CATTANEO, C. (2013) «Urban squatting, rural squatting and the ecological-economic perspective» en SQUATTING EUROPE COLLECTIVE (ed.) (2013) *Squatting in Europe, Radical Spaces, Urban Struggles*. Londres, Nueva York: Minor Compositions – Autonomedia. Disponible en línea en: www.minorcompositions.info/wp-content/uploads/2013/03/squattingeurope-web.pdf, consultado el 11 de diciembre de 2013.
- GILMAN, R. (1991) *The eco-village challenge*. Context Institute. Disponible en línea en: www.context.org/iclib/ic29/gilman1/, consultado el 14 de mayo de 2014.
- ILLICH, I. (1973) *La convivencialidad*, Barcelona: Virus, 2012.
- KINKAID, K. (1994) *Is It Utopia Yet? An Insider's View of Twin Oaks Community in Its Twenty-Sixth Year*, 2nd edition. Louisa, Virginia: Twin Oaks Publishing.

Neorrurales¹

Rita Calvário* y Iago Otero**

Los y las neorrurales son personas sin experiencia agraria que migran de la ciudad al campo para adoptar un estilo de vida agrícola o artesanal radicalmente nuevo. Sus motivaciones están vinculadas a la búsqueda de una forma de vivir más simple, autosuficiente, autónoma (libre del trabajo asalariado y del mercado), próxima a la naturaleza y ecológica. Hacen esto a partir de una crítica de la cultura consumista vigente, de las modernas prácticas agrícolas, y de la globalización de los sistemas agroalimentarios. Las personas neorrurales consideran su elección como un proyecto por un nuevo estilo de vida y un medio para la transición social hacia la sostenibilidad ecológica. Esto explica por qué pueden formar parte de una estrategia diversificada de cambio socio-ecológico hacia un futuro de decrecimiento.

La agricultura orgánica a pequeña escala, la relocalización de la producción y del consumo, las economías y redes alternativas son algunas de las cualidades que los neorrurales asocian con 'lo rural'. Estas cualidades entran en conflicto con otras representaciones de la ruralidad (por ejemplo, la perspectiva del agronegocio). Aun cuando las 'ruralidades radicales' a menudo adoptan la oposición entre campo y ciudad como marco discursivo

* Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y ENTITLE (European Network of Political Ecology) (ritamcalvario@gmail.com)

** Recerca & Decreixement; IRI THESys, Humboldt-Universität zu Berlin, Alemania (iago.otero.armengol@hu-berlin.de).

1. La versión inglesa de este artículo se ha publicado en el libro *Degrowth: a vocabulary for a new era* (2014, eds. Giacomo D'Alisa, Federico Demaria, Giorgos Kallis). La versión traducida al castellano puede encontrarse en *Decrecimiento: vocabulario para una nueva era*, Icaria Editorial (2015)



Vilaplana (Autores: Jordi Cardona Miracle y Mar Grau Satorras)

de referencia, las conexiones con 'la ciudad', a través de las redes y economías alternativas, son frecuentes.

El regreso al campo no es algo nuevo en la historia de Occidente. Desde la aparición del **capitalismo**, el 'campo' ha jugado un papel en la crítica a la abstracción racionalista, la **mercantilización** de la tierra y de la mano de obra, el estado y la política modernos, la alienación individual, y la disolución de los lazos sociales. Estas críticas – con fuerte presencia en el discurso decrecentista – han sido expresadas de diferentes maneras por diferentes intereses a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el campo ha sido un lugar para el duelo de las élites por un pasado perdido, y también para las búsquedas de un nuevo orden social por parte de proyectos libertarios y socialistas utópicos. Alternativamente, el campo ha sido un lugar donde refugiarse de las degradantes condiciones del trabajo industrial y de la vida urbana. Los estados también han promovido la migración de la ciudad al campo, el capitalismo agrario a pequeña escala, o una indife-



Plantación de olivas (Autores: Jordi Cardona Miracle y Mar Grau Satorra)

renciada ‘condición campesina’ como vías para trasladar los costes de la reproducción social hacia el auto-abastecimiento, reduciendo así los pagos asistenciales y evitando las revueltas urbanas durante los períodos de crisis.

Las décadas de 1960 y 1970 son de considerable importancia para los ideales de regreso al campo, la reestructuración del **capitalismo** y el cambio rural. Los movimientos hippie y de mayo de 1968 provocaron un aumento de neorrurales, que corrió en paralelo al más amplio proceso de contra-urbanización, es decir, la emigración de urbanitas hacia áreas rurales atraídos principalmente por una mejor calidad de vida, pero sin ninguna motivación contracultural. El regreso al campo se hizo eco de la creciente conciencia ecologista, la reacción al consumismo y los discursos sobre los límites al crecimiento después de la crisis energética de la década de 1970. Se inspiró en un retorno tanto a la ‘naturaleza’ como a una sociedad rural idealizada, para así rechazar el fetichismo de las mercancías, la alienación del trabajo asalariado, y los modernos valores del progreso y el avance tecnológico. Varias de estas experiencias de regreso al campo y de comunas rurales fracasaron debido a conflictos internos,

desilusión, deudas y pobreza, mientras que otras progresaron y siguen hoy existiendo.

La persistencia de experiencias neorrurales puede en parte ser explicada por su participación en las dinámicas de conversión del campo en un creciente espacio de consumo para la población urbana. Las áreas rurales han cambiado como resultado de cambios culturales y de estilos de vida propiciados por una economía de servicios. Paradójicamente, los proyectos neorrurales podrían haber oficiado de pioneros de la gentrificación rural y de la **mercantilización**, facilitando

la (re)producción de la ‘naturaleza’ y de la ‘ruralidad’ valorizada por las nuevas demandas de consumo. La integración en los nuevos mercados de actividades emprendidas por neorrurales inicialmente radicales, así como el acceso a financiación estatal para recrear un medio rural nostálgico, fueron algunas de las formas utilizadas para absorberles. En líneas generales, esta absorción refleja el modo en que la crítica de la alienación de la vida cotidiana de la década de 1960 fue recuperada dentro del ‘nuevo espíritu del capitalismo’ que fue tomando forma a partir de la década de 1970. Ideas tales como autonomía, funcionamiento en redes, creatividad, flexibilidad, iniciativa individual y libertad, fueron incorporadas al discurso (neoliberal) dominante. La remoción de este *ethos* anticapitalista inicial de muchas de estas experiencias socavó el poder de crítica social del movimiento neorrural.

Los y las neorrurales se sostuvieron también por el desarrollo de economías y redes alternativas críticas con los sistemas agroindustriales cada vez más globalizados. Parte de la literatura sostiene que las economías y redes alternativas crean espacios fuera del **capitalismo**, construyendo redes de contrapoderes locales

que resisten y subvierten la hegemonía ideológica capitalista. Esta perspectiva nos permite apreciar las experiencias neorrurales como modos de construir imaginarios de una sociedad (post-capitalista) de decrecimiento. Otra parte, no obstante, sostiene que las alternativas que refuerzan las nociones de soberanía del consumo, de incapacidad del estado y de comunidades autosuficientes y ordenadas, están reproduciendo las subjetividades y prácticas neoliberales. O que vivir en un mercado capitalista altamente competitivo hace muy difícil que los proyectos alternativos conserven sus intencionadas diferencias. Otra crítica es que al permanecer pequeñas, locales y marginales, tales alternativas no son capaces de impugnar los canales convencionales de producción agrícola y de distribución, ni las causas fundamentales del desigual acceso social a alimentos de calidad superior. Además, el auto-abastecimiento a nivel micro puede facilitar la actual acumulación de capital a un nivel más macro.

Los proyectos neorrurales tienen el potencial para transformar el modelo agroalimentario dominante y un mundo rural cada vez más mercantilizado, factor que les convierte en actores de una transición al decrecimiento. El desafío consiste en ir más allá de ser una fracción residual del sistema agroalimentario y del espacio rural. Para esto, y ante el riesgo de ser absorbidos, resulta esencial una acción política que incluya alianzas estratégicas con otros movimientos a favor de la emancipación de las relaciones sociales capitalistas. Más que los modelos de las experiencias locales, lo que realmente cuenta es la dirección que toman. Abrir pequeñas ventanas de emancipación puede ser importante para favorecer imaginarios de decrecimiento y para empoderar a los individuos. Pero en un mercado global capitalista, formular la emancipación como una posibilidad concreta implica una lucha colectiva por el cambio social que sea más amplia y articulada, también contando con las redes de experiencias locales. La acción de estas redes alternativas ha sido importante en luchas contra la especulación del suelo, la privatización de

recursos, la gentrificación y **mercantilización** de los espacios rurales, y la expansión del agro-negocio. Este trabajo en red, en muchos casos, ha ampliado la capacidad de resistencia de las poblaciones locales. Reclamar los bienes comunes es un punto clave para estos movimientos sociales que están basados en la tierra y en el territorio. Más que una defensa de sus propios intereses, este trabajo en torno a **los comunes** debería ser entendido como un ejercicio para trascender las relaciones capitalistas asentadas en la propiedad privada y para reconectar las poblaciones con sus territorios. ■

Referencias

- BOYLE, P. y HALFACREE, K. (eds) (1998), *Migration into Rural Areas: Theories and Issues*, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
- BROWN, D. (2011), *Back-to-the-Land: The Enduring Dream of Self-Sufficiency in Modern America*, Madison: University of Wisconsin Press.
- HALFACREE, K. (ed.) (2007), «Back-to-the-Land in the Twenty-first Century – Making Connections with Rurality», *Tijdschrift voor economische en sociale geografie*, vol. 98 (1), pp. 3–67.
- JACOB, J. (1997), *New Pioneers: The Back-to-the-Land Movement and the Search for a Sustainable Future*, Filadelfia: The Pennsylvania State University Press.
- WILBUR, A. (2013), «Growing a Radical Ruralism: Back-to-the-Land as Practice and Ideal», *Geography Compass*, vol. 7, pp. 149–160.



Decrecimiento

Vocabulario para una nueva era

Prólogo de Amaia Pérez-Orozco

Giacomo D'Alisa, Federico Demaria
y Giorgos Kalis (eds.)

El decrecimiento se resiste a una definición simple. Como la libertad o la justicia, el decrecimiento expresa una aspiración que no puede ser encerrada en una frase. El decrecimiento es un marco en el que coinciden diferentes líneas de pensamiento, imaginarios o propuestas para actuar. Esta versatilidad es una de sus principales fortalezas.

El decrecimiento es un rechazo al espejismo del crecimiento y un llamamiento a favor de una repolitización del debate público, hoy colonizado por el lenguaje economicista. Decrecimiento es la hipótesis de que podamos «vivir bien con menos y en común».

Personas muy diferentes llegan a él desde diversos ángulos. Algunos, porque constatan que hay límites al crecimiento. Otros, porque consideran que estamos entrando en un período de estancamiento económico y que deberíamos hallar vías para mantener la prosperidad sin crecimiento. Otros más, porque creen que una sociedad verdaderamente igualitaria solo puede ser aquella que se libere del capitalismo y su búsqueda insaciable de expansión. Y otros, finalmente, porque el término «decrecimiento» les resulta muy coherente con el modo de vida que han elegido.

Las contribuciones a este libro provienen de diversas escuelas de pensamiento, de diferentes disciplinas y de variadas esferas de vida: economistas ecológicos, antiutilitaristas, (neo)marxistas, ecologistas políticos, cooperativistas, «nowtopistas» y diversos activistas y practicantes.

Estamos ante una red de ideas y conversaciones en forma de vocabulario, el desarrollo de un conjunto de conceptos que construyen el andamiaje imprescindible para responder a un cambio de paradigma civilizatorio. El resultado es el compendio más exhaustivo sobre el decrecimiento hasta ahora publicado en castellano, útil como referencia internacional. Decrecimiento ha sido publicado en inglés y catalán y próximamente en francés, alemán, portugués, holandés, croata e italiano.

Título: Decrecimiento

Autores: Giacomo D'Alisa, Federico Demaria
y Giorgos Kalis (eds.)

Págs. 352 | Pvp. 29 €

Colección: Antrazyt 427



Los usurpadores

Como las empresas transnacionales toman el poder

Susan George

Lobistas al servicio de una empresa o de un sector industrial, ejecutivos de empresas transnacionales, cuya cifra de negocios es superior a la suma del PIB de varios países en los que operan, instancias quasi estatales, cuya conexión tentacular se despliega más allá de las fronteras nacionales.

Son los usurpadores que se introducen en los negocios del mundo a golpe de inversiones y de puertas giratorias, se infiltran en Naciones Unidas y, bajo la batuta de Davos, trabajan para crear un mundo a su imagen. Ellos son los que deciden el contenido de los tratados comerciales estratégicos, como el actual TTIP, negociados en el mayor secreto, y siempre bajo la mirada atenta de los representantes del sector privado.

«Lectoras, lectores, espero que os sintáis adecuada y confiadamente informados sobre el poder ilegítimo que ha reptado hasta lo más hondo de nuestras instituciones y de nuestras vidas. El conocimiento es siempre el primer e indispensable antídoto cuando nos sentimos manipulados —¡que lo estamos!— e impotentes. Sin el conocimiento nada podemos hacer, pero en sí mismo no es suficiente, es solo un primer paso. Este conocimiento debe servir para contribuir a crear movimientos sociales y apoyar campañas para cambiar la situación actual.»

Susan George es presidenta de Honor de ATTAC Francia y presidenta del consejo del Transnational Institute de Ámsterdam. Comprometida desde hace mucho tiempo en los combates internacionales contra los efectos devastadores de la globalización capitalista, es autora de exitosos ensayos como *Informe Lugano I y II*, *El pensamiento secuestrado*, *Otro mundo es posible si...* y *Sus crisis, nuestras soluciones*.

Título: Los usurpadores

Autor: Susan George

Págs. 208 | **Pvp.** 17 €

Colección: Antrazyt 423

El nuevo paso hacia la relocalización energética

Pablo Cotarelo Álvarez*

Introducción

Algo se mueve en el mundo de la energía. Es un hecho que no se puede ocultar. 2015 es probablemente el año de la historia reciente del Estado español en el que más atención y esfuerzos se están dedicando no sólo a repensar la relación de las sociedades y comunidades con las energías, sino a crear las alternativas desde el ámbito local. Este nuevo impulso en realidad no es tan nuevo: podemos recordar a tantas personas y colectivos que han desarrollado propuestas pioneras, como la ordenanza solar de Barcelona impulsada por Pep Puig a caballo entre los dos siglos, o los y las valientes de todo el territorio que se atrevieron en las últimas dos décadas a colocar paneles solares en sus tejados o terrazas. Pero a pesar de no ser tan nuevo (en verdad casi nada lo es) este fenómeno sí que reúne algunos desencadenantes que no se habían encontrado en el pasado de manera tan numerosa, intensa y diversa.

La creciente preocupación por los abusos recibidos por la población infligidos por el sector energético, que transmite cierta sensación de impunidad para una de las partes y de indefensión en la otra: una reforma eléctrica incomprensible para el gran público, enormemente criticada por los especialistas y con grandes desequilibrios en el reparto de los costes y los beneficios (2013); una decidida política del gobierno del Estado para recentralizar las competencias de las administraciones públicas, con especial atención a las energéticas (ya altamente centralizadas); como consecuencia de las dos anteriores, un fe-

nómeno de emergencia social como la pobreza energética, que excluye del acceso a un suministro tan básico como la energía a amplias capas de la población (hasta un 17% en 2012) (ACA, 2014); a avalancha de peticiones para comenzar labores de extracción de hidrocarburos, tanto gas de esquisto mediante fractura hidráulica en tierra como petróleo en el mar (Mediterráneo y Canarias, principalmente); el auge del movimiento municipalista como respuesta o solución a la extendida preocupación por las carencias democráticas y el empeoramiento de las condiciones de vida de la población.

Todos ellos han contribuido a que el foco de las alternativas energéticas se haya acercado a la esfera local. Pero si se pudiera identificar un catalizador de la reacción social, éste sería el fenómeno de la pobreza energética. La confluencia de la percepción generalizada de que se estaba extendiendo un problema energético muy cercano a la emergencia social, por una parte, más la escalofriante novedad de una patente pérdida de derechos asociada al impedimento a acceder a los suministros básicos, y las limitaciones o condiciones impuestas por una legislación de marcado carácter centralista, interpeló directamente a la acción a organizaciones sociales de diferentes procedencias y campos de especialización. Este tipo de pobreza es muy especial ya que se produce como consecuencia de la confluencia de tres factores: la reducción del poder adquisitivo de la población común como resultado del desigual reparto de las cargas de la reestructuración económica llamada crisis, un deficiente estado de las condiciones de aislamiento del parque de edificios, y un aumento muy acusado de los pre-

* Observatori del Deute en la Globalització
(pablo.cotarelo@odg.cat)

cios de la energía (electricidad y gas en todo el territorio español) y el agua (en muchos municipios). Es decir, el efecto de decisiones activas por parte de las capas altas de la sociedad en el primer y último caso (crisis y aumento de precios), y pasivas en el segundo caso (mal estado de los edificios).

Iniciativas de relocalización energética

En este nuevo contexto, donde es patente que no se pueden desligar las cuestiones sociales y económicas de las energéticas en ámbitos muy cercanos a la vida de las personas, surge el interés por analizar lo que se está haciendo con la energía con enfoque local en diferentes lugares y con diversas aproximaciones. Y se descubren numerosas experiencias con distintas características, edades y grados de madurez.

Así, nos encontramos en primer lugar con iniciativas promovidas desde las instituciones locales. El caso de *Rubi brilla*¹, por ejemplo, lleva en marcha desde 2011 y se ha propuesto convertir este municipio de 74.000 habitantes en un referente internacional de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en entornos industriales, comerciales y domésticos, como factor de mejora de la competitividad y mejora ambiental del territorio. Los ámbitos de actuación del programa de *Rubi brilla* son el industrial, el de las instalaciones del propio ayuntamiento, el sector comercial, el doméstico y el internacional. En otro lugar de Cataluña también se encuentra Ordis, un pequeño municipio que tiene un ambicioso Plan de acción (2013)² elaborado en el contexto del Pacto de Alcaldes promovido por la Comisión Europea y que, mediante 51 actuaciones en diferentes ámbitos energéticos, se propone reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero más de un 40% respecto a las producidas en 2005. Para ello las líneas estratégicas que desarrolla están relacionadas con: el aumento de la eficiencia energética en los edificios pú-

1. <http://www.ajrubi.net/ajrubi/apartats/index.php?apartat=3339>

2. http://www.ordis.cat/media/sites/159/paes_ordis_26_08_13definitiu.pdf



La necesidad de cambio genera nuevos actores sociales, como la Xarxa per la Sobirania energètica en Cataluña (Fuente: <http://www.xse.cat>)

blicos, edificios residenciales y el sector terciario, disminuir las emisiones asociadas al transporte urbano, incrementar la producción local de energía en el municipio y el consumo de energía renovable, y disminuir las emisiones asociadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos. Por otra parte, Centelles³ es un pueblo cuyo ayuntamiento posee la rareza de gestionar una distribuidora de electricidad, en un sector tan monopolizado como el español. Dicha distribuidora, además de ofrecer un servicio de calidad a los habitantes del pueblo, supone una fuente de ingresos para las arcas públicas, con los que acometer inversiones de interés colectivo.

Con un perfil distinto descubrimos otras iniciativas, digamos más politizadas y de base. Son lo que sus promotores denominan Okupaciones rurbanas, y tienen sus máximos exponentes en el área de influencia barcelonesa: Can Masdeu⁴ y Can Paskual. En ellas, la autonomía energética y alimentaria se encuentran en el centro de todos los planteamientos de vida, de convivencia con los barrios de los alrededores y de la actividad política de transformación a través de la propia experimentación diaria, tanto de las mismas habitantes de las comunidades como de las personas que participan de manera estable o esporádica en la red de proyectos que gestionan en los espacios que comparten. Dicha experimentación requiere y deriva de un minucioso análisis del reparto

3. <http://www.centelles.cat/serveis-equipaments-servei-electric-ajuntament-centelles.asp>

4. <http://www.canmasdeu.net/>

del tiempo entre diferentes tipos de actividades de las personas que conviven en las comunidades, de las necesidades de energía endosomática y exosomática⁵, de cómo obtenerlas y cómo se utilizan, y de la evolución de ambas. De esta manera se puede decir que en estas iniciativas se produce de manera natural una relación íntima entre el universo energético desde un punto de vista tradicional y el de la agroecología. Una de las conclusiones más interesantes a las que llegan los estudios realizados desde estos lugares muestran que la energía exosomática se puede invertir y redirigir. Puede invertirse aumentando el uso de energía y órganos endosomáticos, como cambiando coche por bicicleta para la movilidad; y puede redirigirse usando los recursos exosomáticos de naturaleza biológica, como el efecto climatizador de la sombra de los árboles o la madera como combustible calorífico (Cattaneo, 2009).

En otra vertiente tenemos las ciudades en transición o *Transition towns*⁶, cuya iniciativa nace en el Reino Unido y se extiende con el tiempo por zonas de Madrid, Baleares, Cataluña, Andalucía, etc., y que poniendo el acento en la construcción de comunidades que vivan la realidad futura sin combustibles fósiles, aporta la atención prestada a la formación de redes descentralizadas y autosuficientes, la auto-formación continua, la creatividad y la necesidad de la sostenibilidad como principio rector. Esta propuesta es voluntaria y determinadamente ajena a la política, con lo que rehuye el conflicto y no contempla la relaciones de poder entre los diferentes actores del sector energético como potenciales palancas de transformación o transición energética.

Finalmente, las últimas iniciativas en aparecer son las que se podrían considerar integradoras, en la medida en que reúnen diversas propuestas bajo un mismo enfoque, e intentan articularlas. A este grupo corresponderían tanto la Xarxa

per la Sobirania Energètica⁷ como la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético⁸. Ambas han desarrollado sendas propuestas de programa o medidas dirigidas a influir en el debate previo a las elecciones municipales. De hecho, existe una estrategia de acercamiento energético, no sólo de las infraestructuras sino también de las personas a la toma de decisiones energéticas, denominada «relocalización» por parte de la Xarxa, que considera esencial reivindicar la soberanía de los pueblos para transformar los sectores energéticos en espacios sostenibles a través de la democracia real. Esta estrategia, central en las actividades de esta red de grupos y personas con sensibilidad social y ambiental radicada en Cataluña, parte de un análisis conceptual de las relaciones entre los diferentes apartados de lo que académicamente se considera energía y de las relaciones de poder (y sus dinámicas) existentes entre los actores que configuran este amplio sector.

Una transición energética diferente

Estas últimas propuestas nos muestran indicios de que vivimos un momento de transición dentro de los ambientes transformadores (académicos, movimientos sociales, economía social, etc.) que piensan y actúan en materia energética desde el ámbito local. No se trata únicamente de la necesaria transformación de la matriz energética basada en combustibles fósiles y nucleares, en una más razonable ambiental y socialmente. Se trata de una transición en el «interior» del propio movimiento energético alternativo. Probablemente se encuentre en una fase embrionaria o muy primitiva, pero ya se vislumbra un cambio conceptual e incluso estructural.

El elemento diferenciador de los nuevos movimientos respecto a los que atesoran un recorrido de años e incluso décadas es elemento «democracia». En este movimiento nunca se había experimentado con la decisión de dar prioridad a la democracia tan intensamente, por delante de cuestiones como el ahorro energético y la pro-

5. La energía endosomática es la transformada en el interior del cuerpo procedente de los alimentos ingeridos y la exosomática es la utilizada por las personas pero exterior al metabolismo humano.

6. <http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695346/Movimiento%20de%20Iniciativas%20de%20Transici%C3%B3n>

7. <http://xse.cat/>

8. <http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/>

moción de las energías renovables, que también están muy presentes, pero desde una posición no central sino más bien subalterna a la principal, que es la englobada en la triada democracia-soberanía-participación popular. De esta forma conviven en el espacio y en el tiempo propuestas muy interesantes, que comparten círculos de afinidad, pero que empiezan a tener diferentes fuerzas motrices para la transformación energética, y la social asociada a ella.

La evolución viaja desde planteamientos generalistas adaptados a los municipios, basados en indicadores de sostenibilidad ambiental fundamentalmente, y donde la promoción de las energías renovables (y la eficiencia energética) marcan la lógica de análisis estratégico y de acción subsiguiente, hacia planteamientos más relacionados con lo que podríamos denominar soberanía energética, en los que predominaría una visión más política, en un sentido amplio e integrador de la palabra, donde lo que marca la estrategia y las iniciativas son las necesidades humanas y la articulación social para participar determinadamente en la toma de decisiones para satisfacerlas. La soberanía energética bajo este marco se definiría entonces como el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que éstas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros (Cotarelo et al., 2014). La traducción de dicha definición a la acción se refleja en los ejes en los que desarrollar medidas concretas: la Alimentación, la Movilidad, los Hogares, el Ocio y la Socialización, y los Bienes. Y dentro de ellos se presta especial atención a las Tierras cultivables y los Tipos de cultivo, la Distribución de bienes, la Electricidad, la Movilidad laboral, el Trabajo, y las Materias primas. Estos puntos de partida conducen a objetivos similares a los tradicionales pero por caminos un tanto distintos, en los que los compañeros de viaje son más diversos y los tiempos con los que se trabaja más exigentes, lo cual obliga a intensificar y mejorar el debate.

Conclusión

Uno de los impulsos que ha acelerado dicha nueva transición energética lo podemos encontrar en el auge del municipalismo y la necesidad de encontrar respuestas políticas por parte de crecientes capas de la población movilizadas, desde un enfoque más institucional que en el pasado. Ya en la misma articulación de las propuestas se percibe el encuentro entre dos maneras diferentes de enfocar las alternativas energéticas locales que conviven, y en algunos casos colisionan. De la colisión ordenada de las propuestas debería surgir una nueva cultura energética en el ámbito local, que podría empujar hacia arriba una transformación de un modelo energético que tantos problemas genera a las sociedades humanas en forma de afecciones a la salud, agresiones a los derechos humanos y deterioro ambiental. ▀

Referencias

- ASOCIACIÓN DE CIENCIAS AMBIENTALES (ACA) (2014), *La Pobreza Energética en España. Análisis de tendencias*.
- CATTANEO, C. (2009), «Análisis energético del valle Can Masedu de Barcelona: la relevancia de la energía endosomática en la bioeconomía» en BARCENA, I., LAGO, R., VILLALBA, U., (eds.) *Energía y deuda ecológica. Transnacionales, cambio climático y alternativas*, pp. 405-434. Barcelona, Icaria.
- COTARELO, P., LLISTAR, D., PÉREZ, A., GUILLAMÓN, A., CAMPUZANO, M., BERDIÉ, L. (2014), «Definiendo la soberanía energética» en *Ecologista*, vol. 81, p. 51.

Municipios: desperdicio alimentario y necesidad, cara a cara

Maria Mestre Montserrat*

En los últimos años la problemática del desperdicio alimentario ha tomado una gran cobertura en los medios de comunicación. A su vez, numerosos documentos de planificación de la política institucional han introducido acciones dirigidas a su reducción, con ámbitos de intervención muy diversificados dados los impactos múltiples que la problemática genera (social, ambiental y económico). En España, por ejemplo, dentro del ámbito de los residuos, el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 (MAGRAMA, 2014) considera la reducción del desperdicio alimentario como un área prioritaria de actividad. También el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a tomar medidas prácticas para reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2025 y, al mismo tiempo, prevenir la generación de biorresiduos (Parlamento Europeo, 2012), un objetivo que se está tomando como objetivo común de referencia por gran parte de los actores implicados en la gestión de residuos. En el ámbito social y en el contexto de crisis socioeconómica que padecen los países del sur de Europa, las instituciones europeas, estatales y también locales, con el objetivo de dar respuesta a la emergencia social, han incrementado enormemente las subvenciones a las entidades encargadas de la distribución de la ayuda alimentaria, como son los bancos de alimentos.

Baile de cifras. Una problemática de difícil valoración

El creciente interés por este fenómeno ha ido acompañado de numerosos estudios que han querido ponerle cifras. Así, en 2011, la FAO estimaba

que un tercio de la producción mundial de alimentos destinados al consumo humano se pierde o desperdicia lo largo de toda la cadena alimentaria (FAO, 2012). En base a este estudio, Lipinski (2013) traduce en calorías el tercio de alimentos producidos, concluyendo que se pierden o desperdician cerca de una cuarta parte del total de calorías producidas para el consumo humano. Los datos evidencian las diferencias entre los países del norte y del sur. Un 56% de las pérdidas se produce en los países desarrollados (Norte América, Oceanía y Europa, más China, Japón y Corea del Sur) y el 44 % restante en los países en desarrollo, siendo muy superiores las pérdidas per cápita en los países desarrollados, con Norte América y Oceanía en cabeza (1.520 Kcal/cápita/día) y los países del sur y sudeste asiático en último lugar (414 Kcal/cápita/día). En Europa se desperdicia el 22% del total de calorías alimentarias producidas para el consumo humano. Si nos centramos en la distribución del despilfarro a lo largo de toda la cadena alimentaria, el 52% se produce en el estadio de consumo (en los hogares y los comercios de los consumidores, incluidos los restaurantes y catering), el 9% en la distribución y mercado (distribución mayorista y minorista), el 5% durante el procesamiento y envasado, el 12% durante el manejo y almacenamiento y el 23% durante la producción (Lipinski, 2013).

Según FAO (2012), las pérdidas por cápita en quilogramos, en Europa y Estados Unidos son entre 280 y 300 kg/año per cápita, suponiendo un 40% de los residuos alimentarios generados a lo largo de la cadena alimentaria, y de estos entre 95 y 115 kg son desperdiciados por los consumidores. Sin embargo, y a modo de ejemplo, Bio Intelligence Service (2012) estima las pérdidas de

* Fundació ENT (mmestre@ent.cat)

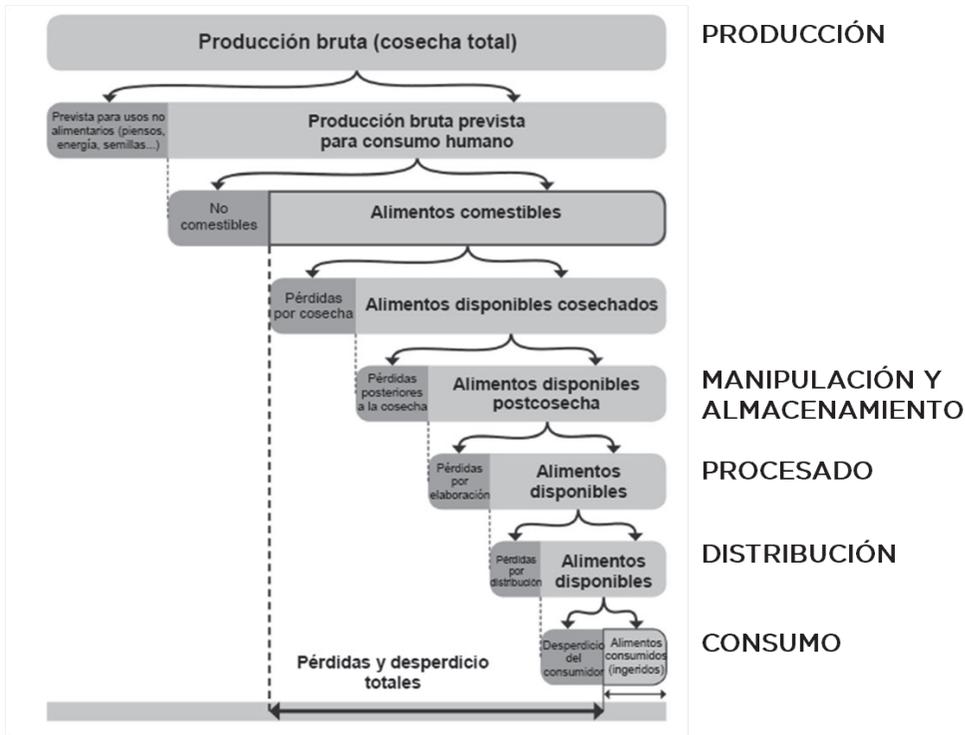


Figura 1. Representación esquemática de la definición de pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena alimentaria (Fuente: HLPE, 2014)

la Unión Europea en 179 kg/año per cápita. Las causas de estas diferencias, además de metodológicas, también se deben a diferentes definiciones de lo que se considera desperdicio, así como a una dificultad muy importante de abarcar toda la cadena alimentaria, cada vez más larga y controlada por muchos agentes (ver Figura 1).

Las causas del desperdicio alimentario en muchos casos no se encuentran en la misma fase en la que se producen sino que provienen de fases anteriores de la cadena¹ (HLPE, 2014). Sin embargo, desde

1. Es lo que HLPE (2014) considera las causas de nivel meso o nivel macro. Las primeras incluyen las causas secundarias o estructurales de las pérdidas y el desperdicio de alimentos (PDA). Una causa de nivel meso puede encontrarse en una fase de la cadena distinta a la fase en la que ocurren las PDA o derivarse del modo en que se organizan diversos actores, de las relaciones que existen a lo largo de la cadena alimentaria, del estado de las infraestructuras, etc. Las causas de nivel meso pueden contribuir a la existencia de causas de nivel micro. En tercer lugar se encuentran las causas de nivel macro. A este nivel superior pertenecen las causas más sistémicas de las PDA, como un sistema alimentario que no funciona bien y la falta de condiciones institucionales o políticas para facilitar la coordinación de actores (incluido el establecimiento de relaciones contractuales),

estamentos oficiales, las medidas de reducción del desperdicio alimentario que se proponen tienden a segmentarse con acciones dirigidas a cada una de los estadios de la cadena alimentaria, como por ejemplo mejora de las técnicas de cosechado y de inventariado (en la producción), introducción de nuevas tecnologías de refrigeración (en la manipulación y almacenamiento), mejora de los envases para mantener los alimentos más frescos durante más tiempo (en el envasado), cambios en el etiquetaje de alimentos (en la distribución) o reducción del tamaño de las porciones (en el consumo) (Lipinski, 2013).

Otros enfoques difieren totalmente de esta segmentación y toman un discurso más político, planteando que la irracionalidad está en el modelo agroalimentario. Según Montagut (2014: 133), «las decisiones de cada actor de la

las inversiones y la adopción de buenas prácticas. Las causas sistémicas son aquellas que favorecen la aparición del resto de las causas de las PDA, es decir, las mesocausas y las microcausas. En última instancia, son una de las principales razones del alcance mundial de las PDA.

cadena agroalimentaria no son irracionales y no se deben a una mala logística. La irracionalidad esta en el modelo agroalimentario. Es el modelo el que les lleva a establecer esas estrategias, totalmente racionales, a sus intereses particulares y para los que manejan un sistema logístico y tecnológico adecuado. La solución no está, por tanto, en aplicar exclusivamente algunos mecanismos logísticos y tecnológicos correctores, sino en enfrentar el modelo agroindustrial dominante y las relaciones desiguales de poder que le caracteriza. El problema y la solución son, sobre todo, políticos».

Gente sin alimentos, alimentos sin gente

En el ámbito local llega el desperdicio que se da al final de la cadena alimentaria, desde el estadio de distribución al detalle hasta el consumidor. En el contexto socioeconómico actual, han surgido múltiples iniciativas que buscan incidir en la reducción de este desperdicio. Algunas de ellas inciden en el desperdicio producido durante el estadio de distribución al detalle, facilitando la donación de los excedentes alimentarios generados antes que se conviertan en residuo. Estos proyectos tienen como objetivo hacer disponibles a las personas con dificultades económicas, los excedentes en buen estado generados por el sector de la distribución minorista de alimentos. En Mestre (2013) se recogen algunas experiencias con audiovisuales explicativos. Sin embargo, aún y compartir el mismo objetivo, encontramos grandes diferencias en su enfoque ideológico. Por una parte, hay un gran número de entidades de beneficencia, mayoritariamente vinculadas a la iglesia, que son quienes tradicionalmente han realizado la tarea de reparto de la ayuda alimentaria a nivel local. Los alimentos repartidos son los alimentos procedentes de los Bancos de Alimentos, mayoritariamente alimento seco y envasado, pagado con dinero público, así como excedentes de la distribución mayorista. La crisis actual ha desbordado la tarea de las entidades de beneficencia, hasta multiplicar por 10 el número de personas atendidas, en algunos casos. Esta situación ha llevado a sus suministradores, los

Bancos de Alimentos, a buscar nuevas fuentes de productos, mediante campañas publicitarias y de voluntariado como *El Gran Recapte d'Aliments*, en Cataluña, o el establecimiento de acuerdos con las grandes cadenas de distribución alimentaria para la recogida de los excedentes generados en sus tiendas, creando *microredes* de barrio que permiten distribuir los excedentes hacia las entidades más próximas. En este primer grupo, la estrategia de las grandes cadenas de distribución es utilizar esta colaboración como una acción de responsabilidad social corporativa. En muchos casos los alimentos canalizados son pocos y delimitados únicamente a aquellos más fáciles de preparar por parte del personal de la tienda (productos con algún defecto en el envase, bolsas de frutas con alguna pieza en mal estado, etc.). También aquellos con un menor riesgo a nivel de seguridad alimentaria (por ejemplo, en algunos casos se excluyen los productos cárnicos próximos a la fecha de caducidad para evitar complicaciones). En realidad, la proximidad es el factor que hace que estas iniciativas sean viables para el receptor, así como la posibilidad de poder ofrecer alimentos frescos como un complemento a los alimentos secos que tradicionalmente han distribuido los Bancos de Alimentos. En este caso, los usuarios son sujetos pasivos que reciben el alimento con poca implicación en el proceso de recogida de los excedentes y en el funcionamiento interno de la entidad.

La creciente repercusión de la acción social de estas entidades ha despertado también voces críticas, tanto desde su vertiente de acción contra el desperdicio alimentario como por su función social como agentes de distribución de la ayuda alimentaria, por ser muy asistencialista. Aunque el objetivo de los Bancos de Alimentos es recuperar excedentes alimentarios y redistribuirlos entre las personas necesitadas, también reciben dinero público para la compra de alimentos, que se realizan a grandes empresas y multinacionales mediante una subasta centralizada sin criterios nutricionales, perdiendo la oportunidad de utilizar la compra pública para cambiar el sistema alimentario (Guillamon et al., 2014). Con un enfoque más transformador, existen experiencias que canalizan los excedentes alimentarios también con fines sociales pero con

una voluntad clara de denuncia a la irracionalidad del modelo agroalimentario. Si bien utilizan igualmente los excedentes que el sistema genera, son los mismos receptores quiénes se organizan para llegar a acuerdos con las tiendas del barrio, se organizan para su recogida y se reparten los alimentos. Algunos ejemplos son la *Xarxa d'Aliments de Gràcia*² o la *Xarxa d'Aliments de Manresa*³.



Figura 2. Logotipo de la Xarxa d'Aliments de Manresa

En el contexto actual de desposesión de las clases populares, el desperdicio alimentario local es demasiado próximo y visible a aquellos que no tienen acceso a una alimentación digna. De esta proximidad nace una imagen simbólica muy cotidiana: personas que buscan alimentos en el contenedor. Haciendo un paralelismo con el derecho a la vivienda y la lucha popularizada y liderada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), también surgen movimientos sociales que toman consciencia que el derecho a una alimentación digna se debe recuperar, y que el sistema agroalimentario dominante, igual que el sector inmobiliario y en general el capitalismo, falla y los desposee. De ahí nace la motivación social de dar respuesta a la emergencia del momento dando respuesta, a su vez, a la contradicción de «gente sin alimento, alimentos sin gente» (un paralelismo al lema del movimiento okupa de «Gente sin casa, casas sin gente» y también utilizado por la PAH en su lucha actual por el derecho a la vivienda). En este senti-

do, desde el municipalismo alternativo y la soberanía alimentaria, se están haciendo propuestas de apoyo a iniciativas colectivas contra el desperdicio alimentario, las «Redes de Alimentos», desde una perspectiva de recuperación de la soberanía popular sobre la alimentación. ■

Referencias

- FAO (2012), *Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo – Alcance, causas y prevención*. Roma.
- GUILLAMON, A., LANDEROS, A., RECIO, C., ECORIHUELA, I., GUZMÁN, J., FARGAS, L., MONTAGUT, X., (2014) *Informe sobre el dret a l'alimentació a Catalunya. Impactes de la pobresa alimentària a Ciutat Vella i Nou Barris (Barcelona)*. Observatori DESC, Entrepobles, EdPAC.
- HLPE (2014), *Las pérdidas y el desperdicio de alimentos en el contexto de sistemas alimentarios sostenibles*. Un informe del Grupo de alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Roma, 2014
- LIPINSKI, B. et al. (2013), *Reducing Food Loss and Waste. Working Paper, Installment 2 of Creating a Sustainable Food Future*. Washington, DC: World Resources Institute.
- MAGRAMA (2014), *Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- MESTRE, M. (2013), *Gente sin alimento, alimentos sin gente*. Sostenible. Revista de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. <http://ves.cat/hygt>
- MONTAGUT, X., GASCÓN, J. (2014), *Alimentos desperdiciados. Un análisis del derroche alimentario desde la soberanía alimentaria*. Icaria editorial.
- PARLAMENTO EUROPEO (2012), *Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE (2011/2175(INI))*.

2. <https://bancexpropiatgracia.wordpress.com/assemblees-i-grups-2/xarxa-daliments/>

3. <https://www.facebook.com/xarxaalimentsmanresa>

Minería de oro en Venezuela: luchas simbólicas vs políticas redistributivas

Francisco F. Herrera* y
Iokiñe Rodríguez**

Introducción

A diferencia de otros minerales como la bauxita y el hierro, o fuentes energéticas como el petróleo y el carbón, el oro tiene valor desde su centro de origen. Una vez logrado el proceso de extracción (separación del oro de su entorno mineral), fenómeno que ocurre en el propio yacimiento e incluso de forma prácticamente artesanal, este adquiere valor. Este aspecto genera tensiones sociales desde los propios yacimientos, que involucran tanto a los actores formales de la actividad, como al entorno informal asociado. De igual manera, la extracción de oro es un proceso altamente degradante, por involucrar impactos severos a los ecosistemas, cuerpos de agua y suelos, y por tanto a la einterrelación entre las comunidades y el ambiente. Latinoamérica no escapa a esta realidad y son numerosos los conflictos socio-ambientales en la región relacionados con la actividad aurífera (Urkidi y Walter, 2011).

La búsqueda de soluciones a la creciente conflictividad minera de la región requiere avanzar hacia la construcción de escenarios de mayor justicia ambiental en la planificación de territorialidades y el uso de los recursos naturales.

* Investigador, Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (ffherrera@gmail.com)

** Investigadora, Escuela de Desarrollo Internacional, Universidad de East Anglia, Gran Bretaña

Sin embargo, para ello es indispensable superar la visión de justicia ambiental como un tema meramente re-distributivo y abordar las dimensiones participativas y de reconocimiento de las diferencias culturales, que es donde se encuentran las raíces más profundas de la conflictividad minera en la región.

Exploramos estas tensiones desde diferentes nociones de justicia ambiental en el escenario de conflictos mineros en el sur de Venezuela, donde en los últimos 10 años la minería de oro ha sido causa de una creciente conflictividad socio-ambiental en el país.

Justicia Ambiental: ¿un tema de distribución, participación o reconocimiento?

Inicialmente, la Justicia Ambiental se focalizó en aspectos relacionados con tensiones generadas por la distribución desigual en los costos (impactos) y beneficios de las actividades degradantes del ambiente. Sin embargo, en la actualidad se reconoce que la dimensión distributiva es insuficiente para superar las injusticias ambientales, dado que tiende a reducir los tensores a aspectos socio-económicos. Por ello, la dimensión (cultural) del reconocimiento del otro adquiere una relevancia especial en el cuerpo de ideas de la disciplina, no sólo como el esfuerzo por destacar el reconocimiento de la dignidad de todos los individuos,



Minería de oro de pequeña escala, Estado Bolívar, Venezuela (Autor: Danny Franco)

pero en una escala mayor, el reconocimiento de identidades colectivas, con sus particularidades en términos de necesidades, inquietudes, formas de vida, cosmovisiones, etc. Igualmente se ha incorporado cada vez más la dimensión política, donde se involucran las nociones de inclusión/exclusión y mecanismos de participación en su sentido más amplio. Es importante recordar que la dimensión política varía en la práctica dependiendo de cómo es conceptualizada y puesta en práctica la participación, desde escalas de mayor control por parte de los actores con poder (información, consulta, colaboración) hasta escalas de mayor autonomía local (movilización). Mientras más autónomas sean las formas de participación local, más posibilidades tienen los sectores marginados de superar las condiciones de marginación. Así mismo, más posibilidades tienen de desplegar estrategias de confrontación al orden establecido apeándose al mundo de los significados; es decir: sus propias formas de ver, valorar y definir el mundo.

Con estos conceptos como herramienta de análisis, se aborda la conflictividad de la actividad minera al sur del río Orinoco durante el último lustro y se exploran las principales limitaciones y retos para la transformación de este tipo de conflictos.

Panorama de la conflictividad de minería de oro

En Venezuela el imaginario nacional está determinado por mitos, narrativas e imágenes

profundamente signadas por nociones de abundancia de recursos y progreso (Terán 2014). En el ámbito particular de la minería de oro, ésta se circunscribe fundamentalmente a la región al sur del país, espacio que el venezolano concibe como pletórico de recursos hídricos, biodiversidad, recursos mineros y culturalmente diverso, por constituir el territorio ancestral de Pueblos indígenas.

En líneas generales, pueden establecerse tres modalidades de minería en Venezuela: la artesanal, la pequeña y mediana, y la gran minería. La conflictividad minera en el sur de Venezuela en el último lustro ha estado asociada fundamentalmente a la pequeña y mediana minería (en gran parte ilegal), practicada por mineros nacionales e internacionales, sectores del gobierno y en menor medida indígenas. Utiliza maquinaria que va desde balsas, motobombas, tuberías, hasta conformar lo que se conoce como monitores hidráulicos; explota tanto al aluvión (sedimento arrastrado por corrientes) como a la saprolita (material meteorizado contentivo de oro); tiene rendimientos anuales importantes; y se considera altamente degradante de los ecosistemas (no sólo por el uso de mercurio como extractante sino porque implica también la deforestación de grandes superficies y grandes aportes de sedimentos a los cuerpos de agua (Milano, 2014)).

Este tipo de minería acarrea grandes dificultades para la gobernabilidad ambiental en la región. A continuación se utilizan como ejemplos algunos focos de conflictividad que han tenido eco a nivel nacional durante los últimos diez años, para ilustrar esta situación de ingobernabilidad y las diferentes nociones de justicia ambiental que subyacen en los mismos.

Conflicto de La Paragua: la actividad minera en la cuenca del río Caroní, que incluye la subcuenca de La Paragua, está prohibida por las implicaciones negativas que tiene sobre la actividad hidroeléctrica que se genera aguas abajo en el sistema del Guri. Sin embargo, la extracción de oro ocurre en esta región desde hace varias décadas. En abril de 2010 se anunció el *Plan Caura* por parte del Ejecutivo Nacional, el cual implicó un amplio despliegue militar en la zona

con el objetivo de erradicar la actividad minera; sin embargo, a pesar de la aparente movilización de más de 15.000 mineros en la región¹, la actividad continuó y, según declaraciones de actores locales, con el agravante de contar con la participación de efectivos militares como agentes de cobro de *vacunas* y de abuso de poder. Las tensiones generadas por estas relaciones Estado-mineros-indígenas se tradujo en un acto violento (y por tanto, noticioso), cuando representantes de la comunidad Pemón del Alto Paragua, tomaron como rehenes a una veintena de oficiales de la Guardia Nacional en rechazo al abuso de poder en la mina Tonoro, que estaba bajo el control de indígenas Pemón. Alegaban que esas tierras les pertenecían y que allí gobernaban ellos. Luego de un período de negociación los militares fueron liberados y se acordó la no-toma de represalias, lo que no se cumplió y, al cabo de un tiempo los caciques de las comunidades involucradas fueron detenidos y sujetos a la justicia militar, lo que ocasionó un segundo conflicto. Eventualmente los capitanes detenidos fueron liberados.

Conflicto del Caura: la cuenca del río Caura era considerada uno de los parajes menos afectados por el desarrollo; es albergue de al menos siete Pueblos Indígenas y poseedora de una biodiversidad única. No es de sorprender que la actividad minera estuviese prohibida. Sin embargo, en el último lustro la penetración por mineros ilegales ha ido incrementando al igual que las denuncias². Se considera que existen más de 3.000 mineros en el Alto Caura, sector altamente custodiado por la Fuerza Armada, y donde el acceso es sencillo de controlar debido a la topografía y la dependencia del río como vía de aproximación. No obstante, al igual que en el conflicto de La Paragua, se denuncia la complicidad del sector militar, atribuyéndosele el cobro de comisiones – aparentemente en oro – y las mencionadas *vacunas* para permitir el paso de equipos y combustibles. En el con-

flicto del Caura las demandas de los indígenas son distintas que las apreciadas en la cuenca del Caroní. Según declaraciones del coordinador general de Kuyujani, el conflicto no lo determina la participación en la extracción sino que, por el contrario, se fundamenta en la diferencia entre las cargas valorativas de los mineros y las comunidades locales: «Reconocemos que el trabajo es un derecho humano y como tal lo respetamos, pero debe ejercerse con responsabilidad, porque las consecuencias de esta práctica amenazan los derechos que todos tenemos, de contar con un ambiente sano, agua limpia, seguridad, tranquilidad y a una vida en armonía que tenemos los Yekwana y Sanema que allí vivimos».³

Conflicto del P. N. Canaima: quizás con menos cobertura mediática, pero no menos importante, se conocieron las denuncias de presencia de mineros en el parque nacional. Una gran parte de comunidades Pemón considera la presencia de actividades ecoturísticas en la zona de gran importancia, ya que constituyen una creciente fuente de empleo, y que la minería no se justifica. En sus términos expresan: «Nosotros tenemos que aprovechar la naturaleza de manera responsable, y la minería no es el camino. Al final quienes se benefician de la minería son los dueños de máquinas y el daño queda»⁴. Sin embargo, con la caída de la actividad turística en la zona en los últimos años, muchas comunidades Pemón han comenzado a practicar la pequeña minería, lo que ha generando tensiones entre diferentes sectores del Pueblo Pemón y gran rechazo en la opinión pública.

Un balance final: la tensión re-distribución- reconocimiento

Para el análisis de los conflictos esbozados anteriormente, es menester separarlos en dos grupos: los casos en que las comunidades son

1. <http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/gracias-al-dialogo-y-abordaje-social-fanb-rangel-silva-plan-caura-ha-retirado-a-15-000-personas-mineria-ilegal/>

2. <http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-venezuela/mineria-ilegal-atenta-contra-la-cuenca-del-rio-caura>

3. AN conoció denuncias sobre minera ilegal en el Caura: <http://www.diarioelprogreso.com/edi-020308/html/pag07-a.htm>.

4. <http://www.finanzasytributos.com/main/index.php?mod=MMA&id=10526>.

partidarias de la actividad minera y aquéllos en que hacen un llamado al cese de la actividad minera por considerarla inapropiada o innecesaria.

En el caso de La Paragua, la comunidad Pemón del Alto Paragua asume que el oro es un recurso que «puede» ser explotado. El conflicto se relacionan al *cómo*, pero el *porqué* explotar oro no está en cuestionamiento; por lo tanto se circunscribe dentro de los escenarios políticos de beligerancia a la escala de regulación. Sin embargo, el llamado a la regulación cuestiona y confronta la capacidad Estatal en esta materia y propone más bien control local en la actividad minera. Vale resaltar que la exigencia de participación en la actividad minera, en este caso, surge como reclamo por la demora gubernamental en la demarcación y titulación de los territorios de los Pueblos Indígenas, sumado a las medidas que les impiden beneficiarse de los recursos del subsuelo (como el Decreto Presidencial 8413 aprobado sin consulta, mediante el cual se nacionaliza la exploración y explotación del oro). De modo que la participación en la actividad minera es una manera de enfrentar el posible desplazamiento de sus territorios y las subsecuentes relaciones de dominación por parte de actores externos. En el fondo se trata de reclamos de justicia no resueltos en las dimensiones de participación y reconocimiento, que se afrontan en el corto plazo a través de una exigencia distributiva.

Sin embargo, aun cuando la participación en la actividad minera es una manera de ejercer *de facto* el derecho territorial, tal y como lo sostiene la antropóloga Nalúa Silva, el no-cuestionamiento a la minería pone en peligro la propia supervivencia cultural de los pueblos indígenas. «En la mina se trastocan las relaciones sociales propias de los pueblos y comunidades indígenas. Lo público se privatiza y el afán de lucro individual sustituye la búsqueda del beneficio colectivo. La mina tiene un efecto devastador no sólo sobre la naturaleza, sino sobre las etnias. El resultado final es la pérdida de la identidad cultural y la desaparición del pueblo indígena como tal».⁵

5. Por: EDGAR LÓPEZ (2012) Continúa la explotación ilegal de oro en el sur de bolívar Alto Paragua: En las minas la fuerza sustituye la legalidad AMBIENTE | MINEROS, Política |



Minería de oro de pequeña escala, Estado Bolívar, Venezuela (Autor: Danny Franco)

Por su lado, los conflictos del Caura y el P.N. Canaima – en los cuales se rechaza la minería – hacen ver como los imaginarios locales de protección de la naturaleza, de diversidad cultural, respeto a los ancestros y los espíritus de la naturaleza, de noción de arriesgar el futuro por acciones en el presente, se contraponen con los valores de desarrollo que prevalecen en el modelo hegemónico de quienes detentan el poder. A pesar de operativos temporales, poco se hace para acabar de raíz con la minería en el Caura y en Canaima. Hay un consenso social sobre «el progreso» para el sur del país que impide que valoraciones alternativas de los Pueblos Indígenas tengan reconocimiento en las visiones dominantes de desarrollo. Así vemos, por ejemplo, como sectores técnico-científicos, que reconocen que la extracción del oro es ambientalmente conflictiva, que genera muchos remanentes y consume energía, igualmente asumen que existe abundancia del recurso, y que ello implica el sacrificio de algunas cuencas. Esta posición es acompañada además de poderosas imágenes de Venezuela como país potencia energética-minera mundial, construidas desde el propio poder hegemónico.

Estamos, pues, en presencia de conflictos que se circunscriben a la esfera de lo simbólico, dado que racionalidades distintas se confrontan sobre los diferentes significados de territorialidad, bienestar y desarrollo.

Opinión EL NACIONAL Disponible en: <http://tatuy.net/web/mina-oro-pemones-laparagua/>

Las políticas redistributivas del Estado, a través del establecimiento de cooperativas mineras locales o programas de alimentación, salud, vivienda y educación, denominados *misiones* (MINCI, 2014), pueden conducir a una disminución de la conflictividad; más aún si se abren espacios de participación en donde las partes en conflicto puedan deliberar aspectos tangibles inmediatos, como la necesidad de empleo; escenarios que se propician con frecuencia por parte de autoridades del gobierno. Pero el foco en las dimensiones distributivas abre pocas oportunidades para cuestionar la racionalidad económica y la lógica de desarrollo que hay detrás de la minería. Tal y como lo señala Gudynas (2009), «las medidas de compensación social que se financian desde el extractivismo generan una legitimidad social a los gobiernos progresistas, y hacen más difícil poder discutir esos emprendimientos productivos. Aquéllos que cuestionan el extractivismo estarían «en contra» del progreso nacional, y hasta podrían poner en cuestión el financiamiento de los planes de asistencia.»

Sin embargo, para avanzar hacia una situación de mayor justicia ambiental en la planificación territorial es indispensable propiciar iniciativas de reflexión colectiva y deliberación pública donde la racionalidad de la actividad minera pueda ser críticamente analizada, y las visiones de desarrollo y bienestar de sectores marginados logren escalar a niveles de significación más amplios, para tener eco y apoyo más allá de los actores inmediatos del conflicto. En este sentido, los planteamientos de Gudynas (2011), de buscar transiciones hacia el post-extractivismo en el continente son fundamentales. ■

Referencias

- GUDYNAS, E. (2009), *Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual*. «<http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf>» <http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasNuevoExtractivismo10Tesis09x2.pdf> Consultado el 10 de abril de 2015.
- GUDYNAS, E. (2011), «Más allá del nuevo extractivismo: transiciones sostenibles y alternativas al desarrollo» en WANDERLEY, F. (ccordinadora) *El desarrollo en cuestión, Reflexiones desde América Latina*, pp. 379-410. Bolivia.
- MILANO, S. (2014), «Venezuela» en *La realidad de la minería ilegal en países amazónicos*. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, pp. 218-247. Lima, Perú.
- MINCI. (2014), *Las Misiones Sociales*. Caracas, Ediciones del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
- TERÁN, E. (2014), *El fantasma de la Gran Venezuela. Un estudio del mito del desarrollo y los dilemas del petro-Estado en la Revolución Bolivariana*. Caracas, Fundación Celarg.
- URKIDI, L. y WALTER, M. (2011), *Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America*, Geoforum vol. 42, pp. 683-695.

Soberanías de los territorios étnicos

Una visión desde Colombia

Hildebrando Vélez Galeano*

El largo plazo

«Nos declararon que éramos perturbadores de mala fe en nuestros territorios... Cuatrocientos años aportándoles a la construcción de este país y ¿somos perturbadores de mala fe? Cuatrocientos años desangrando a nuestro pueblo... Cuatrocientos años enriqueciéndoles los bolsillos a otros y empobreciéndonos nosotros y ¿somos perturbadores de mala fe?»

*Francia Márquez Mina,
Consejo Comunitario de La Toma.*

La mirada de Francia se remonta cuatrocientos años durante los cuales las comunidades negras lugareñas fueron reestructurando y actualizando la compleja herencia africana en América. Su pueblo ha sobrevivido a la esclavización minera por colonizadores españoles y sus descendientes criollos y a las violencias territoriales de las elites nacionales y regionales que sembraron muerte y dieron pie a la guerra insurgente y a la barbarie paramilitar que por décadas se enraizó allí. Nuestra narrativa es más breve, parte de la segunda posguerra, cuando se afirma la estrategia neocolonial hegemónica norteamericana en América Latina.

A principios de este periodo se definió por las élites regionales del Valle del Río Cauca una estrategia de desarrollo regional, funcional a los EEUU, que se apuntalaría con la construcción de la Central Hidroeléctrica Salvajina -CHS-, una intervención ecotecnológica de 285 MW de capacidad instalada, que genera 1050 GW/h

de energía media anualmente y que almacena 865.67 Mm³ de agua de ese río, el segundo más importante de Colombia. La CHS se financió con empréstitos del BID y Agencias de cooperación para el desarrollo Japonesas (EXIMBANK y OECF) y entró en operación en 1986. Había sido impulsada sucesivamente por las distintas misiones de la academia, la banca y las autoridades norteamericanas que siguieron a la Misión Chardon (Universidad de Cornell, EEUU, 1929); Misión Parsons (1945, Ingenieros Consultores Norteamericanos), Misión Lauchlin Currie (Canadiense, Asesor del Gobierno de EEUU, Banco Mundial 1950); Misión Lilienthal (Director de la Tennesy Valley Authority, EEUU, junio 25 de 1954), Misión Larsen (Gerente el BIRF, 1955 y 1956). Actualmente la CHS es operada por EPSA, filial de CELSIA, brazo de negocios del Grupo Argos, uno de los más fuertes grupos económicos colombianos¹, con negocios de expansión energética, portuaria e inmobiliaria en toda América, donde EEUU ya no domina todos los escenarios.

En 2013 EPSA y la Asociación de Consejos Comunitarios del municipio de Suárez acordaron llevar a cabo un proceso de consulta del Plan de Manejo Ambiental -PMA- de la operación y mantenimiento de la CHS. No es una consulta sobre

1. El «Grupo Argos realiza inversiones de capital en empresas que convierten recursos en productos y servicios de alto valor agregado para el desarrollo de los sectores básicos de la economía... es el accionista controlante de Cementos Argos S.A., Celsia S.A. E.S.P., Sator S.A.S. y Situm S.A.S.; además, posee el 50% de Compas S.A.» <http://inversionistas.grupoargos.com/perfil-corporativo/quienes-somos> Consultado en 04-04-15.

* Universidad del Valle, Colombia (hildevelez@hotmail.com)



Asamblea del consejo Comunitario del Corregimiento La Toma, municipio Suárez
(Autor: Hildebrando Vélez)

impactos de un proyecto que se ejecutará sino de uno planeado hace 60 años que ha operado por 29 años. El Estado, mediante resolución 766 del Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior, ante la solicitud que el 21 de septiembre de 2012 hiciera la Empresa EPSA para certificar si había o no presencia de comunidades negras que debieran ser consultadas en el área de influencia de la CHS, respondió que no, aunque reconoció la existencia de resguardos de comunidades indígenas de los pueblos Nasa y Misak. Fue la presión comunitaria que condujo a que Estado y EPSA no pudieran eludir el derecho de las comunidades negras a la Consulta Previa Libre e Informada -CPLI- establecido en el acuerdo 169 de la OIT y en la constitución y jurisprudencia Colombianas. Hoy en marcha, esa CPLI es prueba de que los pueblos étnicos, para afianzar el reconocimiento de su existencia, su cultura y territorios ancestrales, sus autoridades y reglas de gobierno propio de sus territorios, deben enfrentar el racismo anidado en estructuras del estado y en las prácticas de los grandes agentes económicos. Esta lucha multifacética, de siglos, que emerge en los hechos concretos, librada por las comunidades negras, la denomino en general «Soberanía de los territorios étnicos».

Salvajina existe como expresión de la imposición de un modelo de desarrollo y de una visión de la naturaleza; es fruto de la concertación y lucha de intereses entre las élites económicas nacionales y locales; es hija de la ingeniería positivista-reduccionista que encasilló las aguas; es producto de subordinaciones y complicidades de los politiqueros locales y fuereños. Existe Salvajina por el engaño

que hicieron a los propietarios de los predios, por el engaño inherente a las promesas de desarrollo, de empleo y de bienestar; por los banqueros que incitaron créditos y tecnologías atadas a ellos; por las coimas que obtuvieron politiqueros y burócratas inescrupulosos; e indirectamente, Salvajina está ahí, porque los movimientos sociales y «la izquierda» fueron incapaces de detener su construcción, o creyeron en el sofismo del desarrollo.

Con la expresión «soberanías de los territorios étnicos» sintetizo la autonomía, las formas propias de gobierno y el proyecto de vida construido por comunidades negras, y que existe a pesar de la carga violenta incubada en cinco siglos de colonización de la naturaleza y colonialismo de las relaciones sociales sobre las que reposan capitalismo y modernidad. En esencia, la soberanía de los territorios étnicos, encarna una propuesta para asumir las relaciones y transformaciones complejas socio-ecológicas que permitirían enfrentar al aparato ecotecnológico del desarrollo y los retos que traerá el post-acuerdo con la guerrilla, profundamente arraigada en la región. Pero más allá, el concepto «Soberanía étnica» permite explicar y afrontar la reorganización de las relaciones entre cultura y naturaleza a las que obligará la crisis socioecológica que avanza, ello siempre que logren revitalizarse y armonizarse los rasgos sustentables de las formas de vida ancestrales -campesinas fundamentalmente- con las urbanas, resistiendo al imperio del extractivismo y del racismo. Ya los pueblos africanos en América contribuyeron con sus valores, sus conocimientos y su trabajo a la configuración contemporánea de las naciones, ¿serán supérstitas las comunidades étnicas y sus soberanías?

Discursos valorativos y racismo

Narrar las afrentas del racismo sustrae de la narración histórica de los triunfadores los hechos que construyen los territorios, las vivencias y las realidades de los esclavizados, de los colonizados, de los expulsados. Hay un mecanismo argumentativo recurrente en el discurso institucional favorable al desarrollo, al capital y al mercado neoliberal que subvalora las culturas y sobrevalora

las mercancías (Aguado y Palma, 2012). Desde ese lugar discursivo, cuando se pretende construir un hidroeléctrica o explotar yacimientos hidrocarburíficos o mineros, se hace referencia a los pobladores locales, frecuentemente comunidades étnicas, como a «un pequeño grupo de personas por el cual no puede detenerse el desarrollo ni afectarse al conjunto de la sociedad»; la felicidad que traen estos emprendimientos a hipotéticas mayorías no puede ser sacrificada por la infelicidad que alega una minoría, que finalmente puede ser compensada. Este argumento se abstrae de que para tales minorías su felicidad frugal es su cultura, su proyecto de vida, su pervivencia. Este discurso actúa como máquina destructora de territorios étnicos indígenas y de afrodescendientes, ocultando la disparidad en las condiciones de ejercicio del poder. Las élites económicas apoderadas del Estado tratan de demostrar que es más beneficioso sacrificar la vida y posibilidades de reproducción social y cultural de una comunidad étnica que abstenerse de tal o cual emprendimiento tecnológico o empresarial, favorable no a la sociedad sino a sectores del capital. El destino de los territorios étnicos es embestido por ese discurso valorativo esgrimido por el poder avasallante de élites económicas transnacionalizadas, no sin la resistencia que hacen los pueblos.

Este hecho lo evidencia: recientemente la senadora colombiana del partido Centro Democrático, el mismo del ex presidente Uribe Vélez, desató una polémica nacional, sumando adherentes y estimulando contradictores, al proponer dividir en dos el departamento del Cauca – donde está Salvajina –: «Uno indígena, para que ellos hagan sus paros, sus manifestaciones y sus invasiones, y uno con vocación de desarrollo donde podamos tener vías, se promueva la inversión y donde haya empleos dignos para los caucanos». Acá la subvaloración de lo indígena y lo negro no tiene connotaciones solamente económicas sino claramente racistas: «...el racismo consiste en caracterizar un conjunto humano mediante atributos naturales, asociados a su vez a características intelectuales y morales aplicables a cada individuo relacionado con este conjunto

y, a partir de ahí, adoptar algunas prácticas de inferiorización y exclusión» (Wieviorka, 2009).

Las expresiones racistas están presentes por doquier, pero en Colombia, en el departamento del Cauca, son aberrantes. Las golpizas brutales de la policía defendiendo a los ingenios azucareros sobre los indígenas Nasa que pugnan por retornar a sus tierras ancestrales, así como la negación práctica de los acuerdos que el Estado ha suscrito con la Movilización de las mujeres negras, son todas señales de esa inferiorización valorativa que impulsa a la violencia, a la homogeneización de los deseos, y a la imposición de formas de vida y economía que el colonizador agencia. El racismo es un discurso valorativo y una práctica de poder rentables para el capital y opresivas para los pueblos étnicos.

Afianzando soberanías étnicas

«(...) hay un fenómeno (...) que está generando la guerra en este país y es la corrupción de los funcionarios públicos (...). Vale más que le entreguen el territorio nacional a empresas multinacionales y que luego les vienen a dar dizque regalías (...). ¿Regalías? (...) ¿Pa' qué se creó este estado colombiano? (...) ¿no era para ponerlo al servicio del pueblo? (...) ¿Cuál fue el objeto de crear éste estado? Si no era ese, entonces que nos digan (...). ¿Si el objeto era saquear los territorios? ¿Si el objeto era entregárselo a otros países? ¿Si el objeto era producir la guerra? (...). Porque esa minería, esas locomotoras del «desarrollo» no están generando paz, lo único que están generando es miseria, pobreza, hambre y desplazamiento (...).»

Nuevamente Francia Márquez cuestiona la soberanía instituida, débil ante fuerzas económicas corporativas transnacionales, e indica la desinstitucionalización ambiental propia del fundamentalismo de la economía de mercado, donde el capital crece al amparo de la violencia, articulado a redes económicas globales y a expensas del patrimonio ambiental. Señala que hay una institucionalidad que fraudulentamente asegura la concentración de los bienes y democratiza los males. Sus afir-

maciones crudas y altivas dan pie para reconocer la existencia de la que denominamos **Soberanía de los Territorios Étnicos**. Esta está construida con cantos y danzas ancestrales resignificadas y resemantizadas, está construida con el fuego de la cocina y por los sabores auténticos, por el «viche» y la manera desparpajada de reír; no se asemeja a la soberanía de las cortes europeas, tampoco a los fríos edificios del Estado ni a los anaqueles de bibliotecas. Emula, eso sí, la soberanía plebeya que está viva en las fiestas, en las asambleas y en las luchas de los negros e indígenas del Cauca. Está afianzada en múltiples soberanías: alimentaria, energética, hídrica y en la gobernanza propia de los pueblos. La sostienen tres ideas pilares: 1. el poder popular, que se expresa en la consigna «el pueblo habla, el pueblo manda»; 2. la subordinación de los líderes y lideresas a la comunidad, que apuntaló el movimiento zapatista: «mandar obedeciendo» y 3. el reconocimiento de que la autonomía requiere de relaciones heterárquicas, que es lo que para el pueblo negro significa Ubuntu: «soy porque nosotros somos». Expresiones de soberanía étnica subsisten en la cordillera occidental de los Andes colombianos, a pesar que en los territorios étnicos ocurren grandes desastres ecológicos que estos pueblos no han provocado; Todos ellos ponen en peligro la soberanía territorial, alimentaria, hídrica, energética de los pueblos. Ellos resisten, su discurso es la defensa del territorio, sin proponérselo son activos agentes de las luchas por la justicia ambiental que otros sólo pregonamos. Los territorios étnicos enfrentan de manera trasversal el debate sobre todos los tipos de soberanías, y en el fondo su propósito es único dejarle un territorio habitable a las generaciones venideras, para que ellas puedan mantenerse allí, como lo habían logrado sus ancestros en las luchas contra la esclavitud. Batallas por el control de suelos, playas, ríos, bosques, de yacimientos de energías fósiles, vías de acceso y comercialización de hidrocarburos, poliductos y refinerías y de las condiciones que regirán el uso y el acceso a las fuentes de energía y a la atmósfera misma, está siendo librada en los territorios ancestrales de comunidades negras e indígenas. Batallas por la soberanía energética y la justicia climática se libran en los territorios de las comu-

nidades negras, antes que en escenarios como la COP 21, cuando la CMNUCC está convertida en una Organización de Comercio Global de Carbono², donde las grandes corporaciones transnacionales tienen el control casi total de las negociaciones.

La defensa de la soberanía de los pueblos étnicos se hace a pesar de que, como durante el proceso de esclavización en África, donde los esclavizadores contaron con el apoyo de reyezuelos locales en contra de sus hermanos, hoy «Muchos consejos comunitarios se han vuelto una vía legal para permitir que los recursos – madera, oro, petróleo – sean explotados a cambio de miserables dádivas» (Molano Bravo, 2011).

Construir la soberanía popular de facto significa enfrentar el campo de fuerzas de la sociedad hegemónica que se estructura desde la ideología impuesta por los opresores, desde los estados coloniales, los órganos multilaterales y el poder transnacional que les subyace (Dussel, 2008). Del triunfo o la derrota de éstas soberanías étnicas dependen, así no lo podamos medir, muchas de las posibilidades de adaptación y tránsito de la humanidad hacia sociedades más justas y sustentables. ▀

Referencias

- AGUADO, L. y PALMA, L. (2012), «Una interpretación metodológica sobre la incorporación de los bienes y servicios culturales al análisis económico». *Lecturas de Economía* vol. 77, pp.219-252. Medellín jul./dic. 2012. ISSN 0120-2596.
- DUSSEL, E. (2008), *20 tesis de política*. Caracas: El perro y la rana. 2010.
- MOLANO BRAVO, A. (2011), «¿A quién le importa Juan Ceballos?», 15 de mayo, <http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-importa-juan-ceballos>, consultado el 5 de marzo de 2015.
- WIEVIORKA, M. (2009), *El racismo, una introducción*. Barcelona: Gedisa.

2. www.educacioncontracorriente.org/.../14122-la-jornada.html. Consultado en 1 de enero de 2011.

Humedal de «Villa María» hacia una conservación efectiva, Chimbote, Perú

Alejandro Samuel Flores Lozano*

La costa peruana se constituye en una zona de contrastes, debido a la riqueza del mar peruano, el desierto seco y grandes ciudades. Estos contrastes se vuelven más notorios gracias a los ecosistemas de humedales.

El párrafo 1 del artículo 1 de la Convención de Ramsar define a los humedales como «extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros» (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2010).

Perú posee 24 regiones y la provincia Constitucional del Callao; Ancash es una de estas regiones, colindante con Lima en dirección norte. Una de sus provincias es la del Santa, ubicada en la costa norte, su capital es la ciudad de Chimbote, que a la fecha alberga alrededor de 350 000 habitantes.

Al sur de Chimbote se encuentra Nuevo Chimbote, y entre ambas ciudades emerge el humedal de «Villa María» como un oasis de vida en el desierto costero, oasis que ha contribuido a sostener a la población de ambas ciudades, constituyéndose en un elemento de identidad local y el cual aún no se encuentra debidamente priorizado en las agendas del desarrollo.

* Biólogo Acuicultor, Universidad Nacional del Santa (scirpusii@hotmail.com)

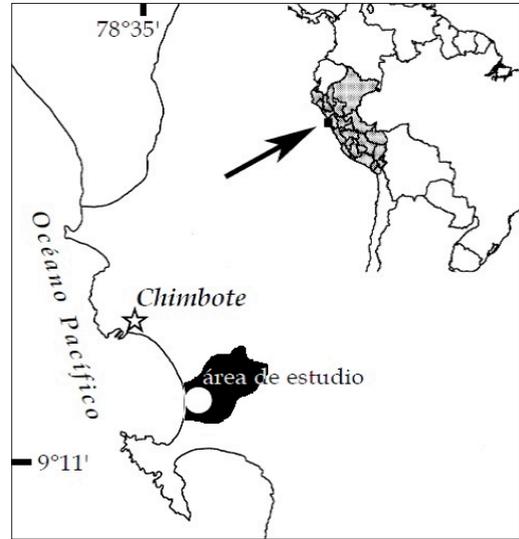


Figura 1. Ubicación política de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote en el Perú (Fuente: www.google.com)

El humedal de «Villa María» fue definido por Loayza (2002) como un ecosistema marino-costero templado que se desarrolla sobre una terraza hidromórfica a 3 msnm con una pendiente promedio de 3%, cuyo régimen hídrico depende de la infiltración permanente del río Lacramarca y aguas de regadío, y cuenta con la presencia de cinco sistemas: ribereño, palustrino, estuarino, marino y artificial, en donde se puede identificar una vegetación hidrófila emergente típica, soporte de una importante diversidad faunística acuática, particularmente avícola.

Se consideran aves emblemáticas del humedal la *Casmerodius albus* «garza blanca grande», *Florida caerulea* «garza azul», *Anas cyanoptera* «pato colorado», *Himantopus himantopus* «cigüeñela» y *Gallinula chloropus* «polla de agua». Asimismo, los componentes o bienes ecosistémicos son: recursos forestales (totora, carricillo junco), peces (monengue, lisa, molí negro), camarones, plantas alimenticias, medicinales, forraje (grama sala-



da, junco) y agua (lagunas, acuífero, río).

Vista de un cuerpo de agua del humedal de «Villa María» (Autor: Alejandro Flores Lozano)

Los pantanos de Villa en Lima

En la ciudad de Lima existe una iniciativa a favor de la gestión y conservación de un ecosistema de humedal costero, el Área Natural Protegida (ANP) de los Pantanos de Villa, con una extensión de 263 has. Esta ANP fue creada en 1997 y representa un avance surgido de muchos años de esfuerzos de la población limeña por establecer un espacio verde que permita la recreación, el ecoturismo, la investigación y la promoción de sus atributos.

Lograr que los pantanos de Villa sean reconocidos y formen parte de la oferta ecoturística de la ciudad de Lima no fue tarea fácil, necesitó el aporte técnico, económico y político de los actores locales. El liderazgo corrió a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el estado (SERNANP).

En la actualidad este ecosistema es visitado por escolares, profesores, turistas y pobladores(as), quienes intercambian experiencias y valoran la importancia de un humedal costero en el mantenimiento de la biodiversidad especialmente avícola y recorren sus circuitos.

Esta iniciativa de conservación ha tenido buenos resultados por la articulación de esfuerzos, un liderazgo compartido de los actores, la apropiada respuesta de organizaciones locales y principalmente por una visión ambiental compartida

en una ciudad como Lima en donde aún hace falta mucho para obtener un equilibrio entre población y áreas verdes per cápita.

Así mismo una lección rescatable de este proceso, es que si los actores vinculados a la conservación de un ecosistema procuran trabajar juntos, utilizando las herramientas disponibles y priorizando la visión compartida a futuro como ciudad (eje ambiental en este caso), se pueden obtener algunos cambios favorables dentro del marco del desarrollo sostenible.

Esfuerzos a favor de la conservación

El humedal de «Villa María» posee importantes bienes y servicios ecosistémicos que contribuyen al sostenimiento de la vida humana y no humana desde épocas ancestrales, siendo utilizados en distinta forma.

Bienes ecosistémicos: recursos forestales no maderables, extracción de flora silvestre, pesca de camarones y peces, recursos forrajeros y abastecimiento de agua.

Servicios ecosistémicos: mantenimiento de la biodiversidad, recarga de acuíferos, regulación del ciclo hídrico, regulación del micro clima, recreación y turismo, patrimonio cultural e identidad cultural, formación de suelo, ciclado de los nutrientes, protección ante desastres naturales y producción primaria.

Bienes	Usos actuales	Estudios de prospección
Recursos forestales no maderables	Elaboración de artesanías diversas a base de junco (<i>Scirpus conglomeratus</i>), totora (<i>Scirpus californicus</i>), carricillo (<i>Phragmites australis</i>) y enea (<i>Typha latifolia</i>), que se comercializan dentro y fuera de la provincia del Santa. La elaboración y venta de artesanías constituye parte de la identidad provincial resaltando como el origen de los muebles de junco.	Se han implementado algunos esfuerzos por contribuir con un manejo racional de la biomasa vegetal para mantener el trabajo de las familias que intervienen en la cadena de valor del junco, totora, y carricillo: extractores, trezadores(as) y artesanos(as).
Flora silvete	Medicinales y alimenticias: a) Antiséptico: <i>Rumex crispus</i> , b) Diurético: <i>Chenopodium album</i> , <i>Tessaria integrifolia</i> , c) Curan el mal de espanto: <i>Chenopodium murale</i> , d) Contra la inflamación y dolores reumáticos: <i>Amaranthus spinosus</i> , <i>Ambrosia peruviana</i> , e) Directamente como alimento: <i>Typha angustifolia</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , f) Contra el asma: <i>Datura stramonium</i> . Tomado de Loayza (2002). En la actualidad se continúan dando tales usos, sobretodo en personas que mantienen una tradición cultural directa con el humedal.	No existen en la actualidad estudios relativos a las propiedades activas que poseen estas especies, mucho menos una valoración de su importancia en las vidas de pobladores(as) quienes las utilizan en las últimas décadas.

Tabla 1. Algunos bienes ecosistémicos del humedal de «Villa María» y sus principales características (Elaboración: Alejandro Flores Lozano)

En los últimos años Instituciones y Organizaciones locales han realizado distintas investigaciones y propuestas para promover el uso racional de los atributos del humedal, a la fecha se dan avances y también retrocesos por ejemplo el autor del presente artículo ha desarrollado la investigación «Valoración ecológica y económica del humedal de Villa María» como un intento por fortalecer la toma de decisiones en torno a la conservación de este ecosistema. Los resultados se volverán positivos cuando los compromisos y articulación de esfuerzos de los actores locales sean lo más concertado posible.

Adicionalmente existe una interesante normativa legal, en particular la Ordenanza Mu-

nicipal N° 002 – 2000 – MPS (Municipalidad Provincial del Santa) del 28 de marzo del 2000, que declara que el Parque Metropolitano o Gran Pantano de Villa María tiene carácter intangible, inalienable e imprescriptible, formando parte del sistema de áreas recreacionales y reserva ambiental de los distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote y la Ordenanza Municipal N° 010 – 2003 – MPS del 14 de abril del 2003 la cual crea el Proyecto Especial Parque Metropolitano de Villa María – PROPAR.

Los actores y tomadores de decisión locales conocen en distinta medida la problemática y las características ambientales del humedal y como estas últimas benefician a las poblaciones aleda-

ñas. Asimismo, la normativa ambiental a nivel provincial, regional y nacional existe y es muy apropiada, sin embargo históricamente no siempre ha sido aplicable en su total dimensión por la falta de una visión de desarrollo como provincia ambientalmente sostenible, competitiva desde el punto de vista económico e incluyendo apropiadamente el componente sociocultural. Se está procurando promover la articulación de esfuerzos entre empresas, gobierno local, ONGDs, sociedad civil, Universidad, etc. Los liderazgos aun no son los apropiados a la visión de desarrollo sin embargo el proceso cada vez se enriquece más.



Elaboración de esteras con carricillo en el humedal de «Villa María» (Autor: Alejandro Flores Lozano)

Requisitos para el cambio

El humedal de «Villa María» es un ecosistema valioso por el número de especies de flora, fauna y sistemas así como por su reducida extensión dentro de la costa de la provincia del Santa y las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote. Es reconocido su valor por muchos pero también por muchos es desconocido: ello es una debilidad que no ha permitido avanzar en las propuestas técnicas por conservarlo de manera eficiente. ¿Qué hace falta entonces para lograr una participación activa de autoridades y otros tomadores de decisión?

Muchos pueden ser los ensayos de respuestas, estas tienen que pasar por un análisis individual

y colectivo de las Instituciones públicas y privadas que tienen algún tipo de injerencia en este ecosistema, así mismo por la población que viene empoderándose del proceso de acción a favor de la conservación.

Los actores locales claves en la gestión y conservación del humedal de «Villa María» son: La Municipalidad Provincial del Santa, la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, el Gobierno Regional de Ancash, la Universidad Nacional del Santa, las asociaciones de extractores, trenzadores(as) y artesanos(as), las directivas de los Asentamientos Humanos AAHH de «Villa María», 1^{er} de Mayo y 3 de Octubre, empresas comerciales, pesqueras y últimamente avícolas, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, quienes participaron y participan en distinta medida en los últimos 15 años en que el proceso para la conservación del humedal se desarrolló con mayor intensidad.

Hace falta fortalecer la toma de decisiones a favor del medio ambiente, biodiversidad y de la ecología como una ciencia indispensable desde las autoridades locales y otras instancias como la sociedad civil, la Universidad Nacional del Santa, el gremio empresarial y otros para así aspirar a un modelo de desarrollo sostenible. A pesar de constituirse en un elemento de identidad cultural y ambiental para la población del distrito de Chimbote y de Nuevo Chimbote, aún persisten las debilidades para aplicar la normativa, para difundir sus atributos y principalmente para investigar como el ecosistema está respondiendo a su disminución en extensión y a la alteración en sus características debido a inadecuadas decisiones como no regular apropiadamente actividades comerciales e industriales y no priorizar una actual zonificación que compatibilice el crecimiento urbano con los sistemas que sostienen la biodiversidad y a problemas ambientales como el cambio climático.

Si bien es cierto que a la fecha existen esfuerzos aislados y en pocos casos concertados para abordar la problemática que afecta a tan valioso ecosistema, estos por lo general no se concretan por el carente compromiso de los tomadores de decisión y autoridades por llegar a acuerdos a

favor de la implementación de las herramientas que garanticen que sea posible conservar el humedal a través de la vigilancia de sus espacios naturales, minimización de la contaminación de origen doméstico, comercial e industrial, promoción de la investigación y del ecoturismo desde la escala local, difusión de sus atributos en distintos espacios locales, nacionales e internacionales, entre otras.

Son tres los actores claves que deberían fortalecer su protagonismo: ambas Municipalidades, la Universidad Nacional del Santa y las organizaciones sociales aledañas al humedal. La articulación de este tridente se constituye en un reto que dinamizaría el proceso de gestión y conservación participativa del ecosistema de humedal.

Conclusiones

El humedal de «Villa María» alberga una importante biodiversidad a nivel de la costa peruana, esta biodiversidad y características ambientales no siempre han sido vistos como una oportunidad para profundizar los cambios que se requieren para salvaguardarlo hacia futuras generaciones, para esto los actores locales con injerencia sobre el humedal deben procurar articular esfuerzos e implementar las herramientas legales o técnicas existentes a favor de la conservación de tan valioso ecosistema, es así que los cambios a favor de la gestión y conservación del ecosistema requieren de un cambio gradual en la orientación del desarrollo asociado íntimamente al componente ambiental y social, el liderazgo político es determinante y específicamente la ecología política es un insumo que volverá más eficiente el proceso de toma de decisiones y estrategias de conservación y quizás de esta forma la población de Chimbote y Nuevo Chimbote lograrán que el caso del humedal de «Villa María» se transforme en un ejemplo de correctas medidas de concertación y trabajo articulado a favor de un ecosistema. ■

Referencias

- LOAYZA Aguilar, R. (2002), *Diagnóstico del humedal de Villa María*. Fondo Editorial Instituto Natura. Chimbote – Perú.
- MINISTERIO DEL AMBIENTE. (2009), *Política Nacional del Ambiente*. Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM de 23 de mayo de 2009. Aleph Soluciones Gráficas. Lima, Perú.
- SECRETARIA DE LA CONVENCION DE RAMSAR. (2010), *Uso racional de los humedales: Conceptos y enfoques para el uso racional de los humedales. Manuales Ramsar para el uso racional de los humedales, 4ª edición, vol. 1. Gland, Suiza.*

Gobernanza de la pesca en el sistema socio-ecológico de Barú: aproximaciones a la autoorganización comunitaria

Esteban García Romero* y
Felipe Hernández Crespo**

El corregimiento de Barú y el archipiélago de Islas del Rosario se sitúan dentro del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, que cuenta con un área de 1573 km² al suroeste de la ciudad de Cartagena. [Mapa 1]

Una de las principales actividades económicas de la comunidad es la pesca artesanal. Ésta cuenta con aproximadamente 200 años de uso tradicional y actualmente es una actividad de economía campesina. Es desarrollada en una zona localizada al este de las 120.000ha marinas del parque, de las cuales aproximadamente el 30% son sectores aprovechados por los pescadores (UAESPNN, 2006).

La geografía de la región Caribe colombiana está caracterizada por la diversidad de sus ecosistemas y los grupos humanos que la habitan. Por tal motivo, en este artículo tomamos el término de SSE (sistemas socio-ecológicos) (Berkes y Folke, 1998), para representar la interacción entre naturaleza, agentes e instituciones dentro de un mismo territorio. Esto nos permite aproximarnos conceptualmente al sistema de gobernanza (Bodin, 2008) que se presenta en el corregimiento de Barú.

Gobernanza sistema socio-ecológico de Barú

* Antropología, Ciencia Política, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (estebangarcia0409@gmail.com)

** Ciencia Política, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (felipehcrespo@gmail.com)

La gestión de recursos naturales plantea un dilema social cuando las preferencias individuales entran en conflicto con el beneficio colectivo. Tradicionalmente se han aplicado dos estrategias para gestionar estas situaciones, la implementación de derechos de propiedad individual o la administración directa del Estado. Sin embargo, diferentes estudios han identificado cómo, bajo determinadas condiciones, la autogestión por parte de las comunidades de los recursos naturales puede ser también exitosa (Ostrom, 1990), estableciéndose por tanto como una tercera opción alternativa a los problemas asociados con la administración sostenible de la pesca.

En Colombia la imposición de medidas externas es la estrategia predominante para regularizar los problemas de comunidades rurales en los parques nacionales, siguiendo los parámetros de entidades estatales centralizadas. Esa visión ha impedido dar espacios a la autoorganización, generando así tensiones entre las prácticas de los pescadores y las reglas que introducen las autoridades de parques, y claro está, con las personas encargadas de hacer cumplir dichas medidas.

En Barú la autoridad estatal en términos ambientales es el Parque Natural. Esta agencia cumple funciones de administración y conservación del área protegida y una de sus tareas principales es diseñar reglas para la pesca en el interior del parque.

El área que delimita el recurso pesquero está definida por el uso y no por la planeación for-



Mapa 1. Mapa regional del corregimiento de Barú y el distrito de Cartagena de Indias (Fuente: Google Maps 2015)

mal del territorio. Los pescadores actúan de dos maneras, instalan dispositivos fijos de recolección (denominados Payaos) para delimitar sus zonas de pesca, y establecen acuerdos operacionales entre ellos. En el caso de la pesca, la temporalidad es importante puesto que la rápida caducidad del recurso implica relaciones a corto plazo con el mercado y por lo tanto ingresos inmediatos. La situación actual del recurso en Barú, está vinculada a dos procesos: el trabajo informal en el sector primario de la economía como principal categoría de empleo; y la cercana ciudad de Cartagena como el origen de la demanda donde se comercializa más de un 50% de la pesca (UAESPNN, 2006).

Los acuerdos operacionales son elaborados a través de la asociación de pescadores PEZBARÚ. Esta organización se ha estructurado como un proceso de base de los pescadores, quienes han buscado maneras colectivas de aproximarse a sus conflictos comunitarios. Éste es un espacio de deliberación, concertación y acción colectiva, en el que se presentan acuerdos consuetudinarios, netamente informales. La

asociación agrupa a la mayoría de pescadores, sin embargo, también hay pescadores independientes que por diferentes motivos son reacios a organizarse con los demás. PEZBARÚ ha tenido grandes transformaciones en poco tiempo, debido principalmente a los cambios de liderazgo, las confrontaciones entre grupos de interés, y problemas financieros.

Para Duran (2010), en el caso de Barú las tensiones entre los diversos sistema de gestión de los recursos seguirán, mientras no se reconozcan las prácticas locales. A continuación un fragmento de entrevista a un pescador que refleja dicha perspectiva:

«La gente de parques nos molestan por pescar en ciertos lugares, ellos nos cortan las redes o nos decomisan el pescado, si es la primera vez sólo le apuntan el nombre de uno en un cuaderno y ya. Pero si uno vuelve a cometer la falta ya el castigo es mayor, pero yo siempre les contesto los mismo, esto es pa' el hijo mío porque él está estudiando y eso con hambre nadie estudia. Tras de que eso está bien duro y lo poco que se pesca esta gente lo decomisa, no joda, pero no hacen nada para solucionarle a los pescadores.»

Al mismo tiempo, estudios previos (Hernández, 2014) muestran como el desarrollo exitoso o fallido de la gobernanza del recurso depende en buena parte de la correlación de fuerzas entre pescadores cooperadores e individualistas. El cumplimiento de reglas por parte de los pescadores cooperadores, pone a prueba un diseño institucional basado en comportamientos como la confianza y la reciprocidad. Así es posible expresar que la gobernanza se encuentra estrechamente vinculada a los escenarios que registran un alto cumplimiento de reglas. Los usuarios cooperadores tienen la ventaja de crear sus propias reglas operacionales, pues requieren de autonomía en el diseño de reglas para aceptar pagos inferiores a corto plazo, y de ese modo recibir mayores ganancias a futuro, pensando en la sostenibilidad del recurso.

Tensiones

La sobre-extracción del recurso en ciertas áreas de pesca ha generado tensiones entre la comunidad y las autoridades ambientales. Artes de pesca irresponsables como el trasmallo y la dinamita son perjudiciales para la sostenibilidad del recurso, pues no permiten la adecuada regeneración de las especies; igualmente la ausencia de capital le impide a algunos pescadores hacer uso de lanchas con motor, por lo cual solo pueden acceder a las zonas más cercanas, sobrecargando esa parte del ecosistema (Castillo, et al. 2011). En la sobre-explotación del recurso también confluyen variables como el crecimiento acelerado del turismo y lo que los pobladores perciben como ausencia estatal. Dando así forma a un conflicto que también involucra agentes externos, como los pescadores de otras poblaciones aledañas y los representantes de la pesca industrial. Seguido presentamos otro fragmento de entrevista a un pescador, que nos lo explica con sus propias palabras:

«Con el paso del tiempo el pescado ha ido agotándose y agotándose, hasta que ha llegado a un nivel muy crítico, el pescado casi no se ve. Eso se debe a que hay tantos restaurantes y hoteles en las islas, esa gente tiene sus pescadores, sus lanchas. Los otros pescadores salen afuera y cuando pescan algo se lo venden a los restaurantes, por eso cuando vienen ya no traen pescado. Ahora nos pusieron un decreto para clasificar el pescado, el pescado que no tenga medio kilo no se puede coger, parques nos dice que si uno coge un pescado pequeño se daña la fauna.»

Todo apunta pues a que el cambio ambiental está íntimamente correlacionado con procesos sociales y políticos a diversas escalas. Complementario a este factor para entender la problemática es necesario incorporar en el análisis las relaciones sociales de producción y la distribución del poder. Lo anterior se puede ver claramente en el caso de los pescadores

artesanales de Barú. Ya que si bien hay unas reglas formales emitidas por las autoridades de parques naturales, estas reglas no están escritas en piedra, debido a que hay una negociación de éstas por parte de los pescadores. Dentro de los parámetros que guían dicha negociación, hay prácticas culturales como «la liga», que es la pesca para el alimento del día; para los pescadores esta práctica tiene tal significación que está por encima de las reglas de pesca. Es por esto que en algunas ocasiones las autoridades de parques permiten que los pescadores pesquen en lugares prohibidos, ya que saben que es «la liga» para sus hogares.

«Parques nos dice que si uno coge un pescado pequeño se daña la fauna, pero la cosa es cuando uno sale a coger una "liga" para la casa, ya parques no nos molesta porque es algo mínimo. Nosotros podemos pescar donde queramos no hay como tal una zona delimitada, esto por aquí es un parque natural, por aquí uno pesca barracuda, la sierra, la saltona; éstos son los más comunes. A los de parques sí dejan pescar dentro del parque, pero en esas zonas no se puede tirar trasmallo ni atarraya. Aquí no se puede pescar con dinamita, antes eso sí se hacía, pero ahora no dejan.»

Recomendaciones

En un intento de aclarar que las condiciones relacionadas a la gobernanza de un recurso no son inalterables, haciendo referencia a las posiciones extremas de centralización y privatización, es fundamental entender que, en lugar de una única solución para un solo problema, existen muchas soluciones para múltiples problemas. En los últimos tiempos, los diferentes enfoques en la administración de recursos naturales han cambiado de un modelo jerárquico estrictamente gubernamental a uno de gobernanza local más horizontal, demostrando así que los individuos no están indefensos ante el dilema social y que pueden manejar sus recursos construyendo instituciones endógenas (Poteete et al., 2010).

La interacción de múltiples agentes sociales

en diferentes niveles es necesaria para una gobernanza exitosa del recurso. En Barú se puede evidenciar con la combinación de estrategias de gobernanza, por un lado con las regulaciones de la autoridad ambiental, y por el otro las reglas diseñadas desde la misma comunidad. Incluso más allá de la coexistencia, las combinaciones de diferentes sistemas de gobernanza funcionan para hacer frente a distintas perturbaciones en los SSE.

Por último, a modo de recomendaciones, planteamos que la asociación de pescadores PEZBARÚ no sea una organización netamente de pescadores (pues existen diferentes problemas comunitarios, además del conflicto por la pesca) sino que se amplie su participación a manera de una junta de acción local y veredal, donde se congreguen diversos tipos de grupos sociales, pues la gobernanza implica a todo el territorio. Para el caso de los funcionarios de parques naturales, y en general las instituciones gubernamentales, es clave que se vinculen el tipo de prácticas culturales, los procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza, y los ecosistemas existentes, a los modos de producción y la distribución del poder que se dan al interior de una configuración social, con el fin de comprender los problemas socio-ambientales. Esta forma de abordar tal tipo de conflictos permite tener una visión mucho más compleja y holística que la que brinda una lectura netamente conservacionista o económica. He ahí el valor de la ecología política. ■

Referencias

- BERKES, F., & C. FOLKE (1998) «Linking social and ecological systems for resilience and sustainability». En F. BERKES AND C. FOLKE (Eds.), *Linking Social and Ecological Systems: management practices and social mechanisms for building resilience* (pp.1-25). Cambridge: Cambridge University Press.
- BODIN, Ö., Y CRONA, B. I. (2008) «Management of Natural Resources at the Community Level: Exploring the Role of Social Capital and Leadership in a Rural Fishing Community», *World Development*, 36 (12), pp. 2763-79.
- CASTILLO, D., BOUSQUET, F., JANSSEN, M. A., WORRAPIMPHONG, K., & CARDENAS, J. C. (2011) «Context matters to explain field experiments: Results from Colombian and Thai fishing villages», *Ecological Economics*, 70(9), pp. 1609–1620.
- DURÁN, C. A. (2010) *¿Es nuestra isla para dos? Conflicto por el desarrollo y la conservación en Islas del Rosario, Cartagena*. Colección Prometeo. Bogotá: Universidad de los Andes.
- ESCOBAR, A. (2005) *Más allá del tercer mundo. Globalización y diferencia*. Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Universidad del Cauca.
- HERNÁNDEZ CRESPO, F. (2014) «Modelos mentales y sistemas multiagentes. Gobernanza de la pesca en el corregimiento de Barú», *Revista Economía & Región*, vol. 8, (2), pp. 139-156.
- OSTROM, E. (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- POTEETE, A. R., JANSSEN, M. A., & OSTROM, E. (2010) *Working Together: Collective Action, The Commons, and Multiple Methods in Practice*. Princeton University Press.
- UAESPNN. (2006) *Plan de manejo del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo*. Cartagena: Territorial Caribe.

Basura cero como alternativa a la incineración de residuos en cementeras

Movimiento Pro Salud, Apaxco, México

Brisa Violeta Carrasco Gallegos* y
Jorge Tadeo Vargas Juvera**

Introducción

La actuación de las grandes transnacionales en la actualidad conlleva una serie de conflictos por la confrontación de intereses comunitarios con los que el capital desarrolla en las comunidades bajo el auspicio de los gobiernos locales, lo que acentúa las desigualdades y supone, para las capas populares, una degradación continua de sus condiciones de vida (Garnier, 2006). En México la industria cementera y su práctica de incineración de residuos (Vargas y Vilella, 2013) ha generado diversos problemas ambientales y afectaciones a la salud humana, que ha llevado a algunas de las comunidades afectadas a organizarse en oposición a la forma que estas empresas operan, exigiendo la reparación de los daños y una actuación responsable de las mismas (Carrasco y Vargas, 2015). Existen en el país seis comunidades en las que se han gestado movimientos sociales que reivindican el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Un ejemplo de estos movimientos es el surgido en el municipio de Apaxco, Estado de México¹, desde el 2009, donde la comunidad comenzó a organizarse en torno al problema de salud ambiental

que representa la incineración de residuos peligrosos, biológico-infecciosos e industriales en las plantas cementeras, para producir el llamado combustible alterno y/o combustible derivado de residuos (Roa, 2011).

Las demandas del movimiento y la propia reflexión hacia la acción organizada han generado una interesante propuesta para la gestión de los residuos urbanos locales, encaminada a generar un plan de Basura Cero, con aplicabilidad a todo el municipio. Este tipo de iniciativas son una muestra del grado de avance y madurez que los movimientos sociales pueden alcanzar a partir de luchas organizadas y consensuadas a nivel local y mediante la búsqueda de información técnica y científica que les permite pasar de la crítica y la movilización a la propuesta de alternativas. El incipiente plan de Basura Cero requiere de la concientización comunitaria, la generación de corresponsabilidad sobre el medio y la actuación (Wallerstein, 2011). Ejemplos como este representan formas autogestivas, comunitarias que, al margen (y en oposición) al sistema neoliberal, hacen propuestas de análisis y solución.

Falsas soluciones en el manejo de los RSU: las cementeras como cómplices

En los últimos años la crisis económica ha afectado la producción del cemento, por lo que esta industria ha buscado alternativas para solventar dicha crisis. Una de las alternativas que ha puesto en marcha es la negociación

* Profesora Investigadora de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México.

(brisavioletac@hotmail.com)

** Coordinador de campañas del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad AC (jtadeo@lunasexta.org)

1. Municipio que cuenta con 27,521 habitantes (INEGI, 2010).

con distintos municipios para la incineración de los residuos sólidos urbanos (RSU) en sus hornos cementeros. Aprovechando la incapacidad (o desinterés) de los municipios para hacer un manejo adecuado de los residuos y los impactos socio-ambientales y económicos de esta mala gestión, estos se convierten en combustible alternativo o combustible derivado de residuos (CDR); se trata de una mezcla tóxica, que en algunos casos compone más de la mitad del combustible utilizado por la industria del cemento en la producción del mismo. En estas negociaciones, la industria cementera recibe un pago por incinerar en sus hornos los RSU, al igual que el resto de los residuos que componen los CDRs, como son los desechos industriales, peligrosos, y biológico-infecciosos, entre otros.

En México, la incineración de residuos en hornos cementeros es una problemática para los pequeños municipios donde se localizan las plantas cementeras. En la región centro del país, la problemática se redujo con el cierre del Bordo Poniente, el mayor relleno sanitario de Latinoamérica, ubicado en la ciudad de México, donde diariamente se recibían 13.000 toneladas de RSU. Tras su clausura en el año 2012, el Gobierno de la Ciudad de México (GDF) y la empresa Cementos Mexicanos (CEMEX) firmaron un contrato para enviar 3.000 toneladas de RSU a los hornos cementeros de CEMEX en Huichapan y Atotonilco de Tula en el Estado de Hidalgo y Tepeaca en el Estado de Puebla, para su incineración, cobrando al GDF 20 USD por tonelada, lo que equivale a 60.000 USD diariamente (Vargas y Vilella, 2013).

La industria del cemento en México, por su misma naturaleza, es la piedra angular para poner en marcha mega proyectos como la minería, las hidroeléctricas, las eólicas, y el turismo a gran escala, entre otras. Sin embargo, dicha industria busca ahora en los RSU una nueva alternativa para salir de la crisis económica e inmobiliaria, y para esto se basa en el fracaso del gobierno para un manejo adecuado y sustentable de los RSU.

La actual propuesta de modificación de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de México (Cámara de Dipu-

tados, 2014), impulsada por el sector público y el privado, busca tipificar los residuos como materia prima. Esto permite que las falsas soluciones, como lo es la incineración, tengan un marco legal contra las resistencias locales en la defensa del territorio y la salud. Por lo tanto, la búsqueda de alternativas autogestivas que se presenten desde las comunidades, con la participación de la ciudadanía, no sólo se convierte en una necesidad básica en la defensa de los derechos humanos, sino que es parte fundamental del empoderamiento de las comunidades en la resistencia contra el modelo de producción-consumo.

Planes de Basura Cero: resistencia comunitaria contra la incineración

Según cifras de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SEMARNAT), en México se generan aproximadamente 32.000 toneladas de RSU, de las cuales más de la mitad son inorgánicos, es decir, pueden recuperarse para reciclarse y/o reutilizarse. Lamentablemente, sólo el 10% de estos se recuperan. El resto termina en un basurero a cielo abierto, un relleno sanitario o un horno cementero, sin un manejo adecuado, generando una serie de impactos en las comunidades cercanas, además de un alto costo económico a los ayuntamientos, es decir, a los contribuyentes. De igual forma, la SEMARNAT, en su informe sobre RSU en México, ha declarado que del material descartado, aproximadamente el 93% se puede recuperar para su reciclaje, reutilización y compostaje. Es decir, el mismo gobierno federal manifiesta que un plan de Basura Cero es una opción mucho más viable que los rellenos sanitarios o la incineración.

Dentro de este panorama, algunas comunidades afectadas por la industria, como parte de su resistencia, han ido adoptando planes de Basura Cero para evitar la incineración de residuos en sus municipios. El caso de estudio al que nos referimos en este texto es el del Movimiento Pro Salud, en el municipio de Apaxco, en el Estado de México, donde desde el año 2009 miembros de la comunidad se organizaron para hacer frente a la contaminación generada por las

cementeras Holcim, Cemex, Lafarge y Fortaleza, y la filial Ecoltec.²

El evento que desencadenó la conformación de un movimiento social en este municipio fue la muerte de once campesinos originarios de la localidad de El Refugio, el 21 de marzo de 2009. Los hechos sucedieron cuando los trabajadores se disponían a realizar las faenas de limpieza del canal de riego, y sufrieron intoxicación por vapores químicos, lo que les provocó la muerte. Los pobladores del lugar reportaron la concentración de fuertes olores a químicos igual al que habitualmente provenía de las empresas cementeras, por lo que se atribuye el incidente al desagüe de los residuos químicos de la planta Ecoltec (localizada en Apaxco) a las aguas del río. Sumado a esto, días después ocurrió una explosión en el depósito donde se almacenaban los compuestos químicos que pasarían a convertirse en el combustible alterno para los hornos cementeros.

Como consecuencia, alrededor de 5.000 miembros de la comunidad establecieron un campamento afuera de la planta de Ecoltec, con el objetivo de impedir que se continuara con las labores de la empresa. El campamento que bloqueó las actividades de Ecoltec tuvo una duración de dos años, finalizando en febrero de 2012, al ser desalojados por las autoridades. Los miembros de este movimiento social mantienen una resistencia ante las cuatro empresas cementeras que operan en los municipios conurbados de Apaxco y Atotonilco de Tula, por sus distintas afectaciones. En el caso de Cemex se han generado conflictos por distintos aspectos como la emisión de humo y polvo, que afecta a la comunidad, ya que la planta se ubica en la zona urbana. De igual forma, desde el 2013, la empresa ha empezado a recibir residuos para incinerar en sus hornos. Los miembros del movimiento han acudido a reuniones internacionales, con el objetivo de dar a conocer su problemática y de buscar apoyos de organizaciones.³ Tras años de lucha,

2. Ecoltec es una empresa filial de Cementos Holcim Apaxco que se dedica a recibir los RSU, desechos industriales y otro tipo de materiales, para realizar mezclas de estos y adicionar químicos que faciliten su combustión. Estas mezclas son utilizadas por la planta cementera como combustibles alternos.

3. En 2010 miembros del movimiento acudieron a la reunión

los miembros del movimiento social han logrado avanzar en el plano legal y de la protesta social, contra las empresas que en diversos momentos han ocasionado graves daños a los ecosistemas y a la salud humana.

Participación ciudadana y Basura Cero: caso de estudio

En 2014, la comunidad —reconociendo el peligro latente de los planes del municipio de construir un relleno sanitario intermunicipal y continuar con la incineración de residuos en las plantas cementeras— ha iniciado un proyecto ciudadano de Basura Cero. El cual no sólo es una herramienta para gestionar los residuos de manera sustentable, sino que es una forma de resistencia, de defensa del territorio, a partir de la organización autogestiva y autónoma. Este proyecto pretende ser una alternativa a la incineración de residuos en hornos cementeros, que se maneje de manera comunitaria, partiendo de una idea de organización comunitaria desde lo local hacia lo global, al margen de los gobiernos locales, de quienes no han recibido apoyo, para obligar a las empresas contaminantes a actuar de una manera responsable hacia la comunidad y el territorio donde se localizan.

El proyecto consiste en la recolección de residuos clasificados y su posterior comercialización. Para esto ha sido necesaria la colaboración de la comunidad y la capacitación sobre la separación de desechos, y su potencialidad, mediante talleres y difusión. La aceptación que el proyecto ha tenido en la comunidad puede garantizar su implementación en todo el municipio, lo que representa una forma de generar alternativas para el manejo de los residuos. El plan de Basura Cero forma parte de la resistencia comunitaria contra la incineración y/o los rellenos sanitarios, comprendiendo que los residuos no lo son cuando

organizada por la Red LACRE (Red de Recicladores de Latinoamérica) y GAIA, efectuada en Bogotá, donde se expuso el caso. Así mismo, en noviembre del 2013 se asistió a una reunión en la ciudad de Washington, donde se expuso el caso como una violación a los derechos humanos de las comunidades ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, logrando la vinculación con otros grupos de resistencia.

se les da un verdadero manejo, desde una lógica antisistémica directa contra el modelo de producción-consumo.

La propuesta que se ha puesto en marcha consiste en una serie de talleres y pláticas principalmente en las escuelas para desde ahí conformar cooperativas de separación y recolección de RSU, desde donde las madres de familia en acuerdo con la dirección escolar arman un centro de acopio para la recuperación de los residuos ya separados en una primera fase: inorgánicos que son todos aquellos materiales que se pueden recuperar y comercializar y orgánicos que es todo el residuo que pasará por un proceso de compostaje para la recuperación de áreas verdes en las escuelas y/o casas de las integrantes de las cooperativas. Al paso de una semana, las cooperativas se reúnen en conjunto con las direcciones escolares para coleccionar el material recuperado y llevarlo a los centros de reciclaje para su venta. Con las ganancias se ponen en marcha proyectos sociales dentro de las escuelas y los barrios a los que pertenecen las cooperativas de mujeres.

En los seis meses que este proyecto se ha puesto en marcha, la recolección comunitaria de los RSU ha logrado avances significativos en términos de participación ciudadana, pues a la fecha Santa María – el barrio de mayor población en el municipio de Apaxco – recupera más del 70% de los RSU que genera, bajando considerablemente la problemática de la basura que termina en el relleno sanitario municipal. Un bono extra es el ingreso que se tiene por la venta del material recuperable que sirve para proyectos sociales y el abono orgánico o compost que sirve para la recuperación de áreas verdes, tanto en las escuelas como en parques dentro del barrio.

Este proyecto colectivo y comunitario recoge las experiencias ciudadanas de los planes de Basura Cero en el que el manejo sustentable y sostenible de los RSU es el inicio de una serie de alternativas que permiten el empoderamiento de las comunidades; controlando el manejo de los residuos y terminando con un modelo de producción-consumo lineal, encaminado hacia un modelo cíclico con enfoque ecosistémico, donde la extracción y privatización de los bie-

nes naturales estratégicos no es una opción *per se*. Además de permitirles generar recursos no sólo económicos, sino de participación ciudadana, con lo que la misma comunidad va creando nuevas formas de autonomía y organización más verticales, democráticas e incluso financieras. La iniciativa resta poder a la clase política, regresando este poder a las propias comunidades, donde el manejo comunitario de los residuos es un primer paso para lograr avances significativos en la autogestión y la autonomía de los pueblos. ■

Referencias

- CÁMARA DE DIPUTADOS (2014), *Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos*, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_051214.pdf, consultado el 10 de marzo de 2015.
- CARRASCO GALLEGOS, B. y VARGAS JUVERA, J. T. (2015), «Incineración de residuos en cementeras como una falsa solución inserta en los mercados de carbono», *Entretextos*, vol. 6 (18), pp. 1-13, <http://entretextos.leon.uia.mx/num/18/PDF/ENT18-3.pdf>, consultada el 10 de abril de 2015.
- GARNIER, J. P. (2006), *Contra los territorios del poder. Por un espacio público de debates... y de combates*. Barcelona: Virus.
- INEGI. (2010), *Censo de Población y Vivienda 2010*, México: INEGI. <http://www.inegi.org.mx/default.aspx>, consultada el 19 de abril de 2015.
- ROA, T. (2011), «Los grises humos de Holcim». En ROA, T., RODRÍGUEZ, T. y LECHÓN, D. (coords.), *Holcim en América Latina* pp. 5-9. Bogotá: Amigos de la Tierra Internacional.
- VARGAS, J. T. Y VILELLA, M. (2013), *Del bordo poniente a CEMEX: el apoyo del MDL a la incineración de residuos en cementeras*. Barcelona: GAIA. <http://www.no-burn.org/downloads/Del%20Bordo%20Poniente%20a%20CEMEX.pdf>, consultada el 10 de abril de 2015.
- WALLERSTEIN, I. (2011), *Después del liberalismo*. México: Siglo XXI.

La remunicipalización de la gestión de servicios municipales

Jordi Colomer i Missé*

La mayoría de los servicios públicos municipales se prestan bajo condiciones de monopolio natural (abastecimiento de aguas, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos domésticos, limpieza viaria, etc.), o en condiciones de reserva de monopolio (transporte público, servicios sociales). Desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este «mercado» es el sueño de cualquier empresario.

La legislación española permite, desde la aprobación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la prestación indirecta de los servicios públicos, privatizando su prestación a través de un tercero. Cada municipio aprueba la forma de gestión, directa-municipalizada o indirecta-privatizada¹, para cada uno de los servicios que presta.

El volumen económico del sector no es nada despreciable, según la publicación² del coste efectivo de los servicios prestados por las Enti-

dades Locales en los términos establecidos en la disposición transitoria única de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, el gasto anual en 2013 de los entes locales en servicios públicos municipales ha sido de 18.673 millones de euros en servicios públicos básicos,³ 6.809 millones en actuaciones de protección y promoción social,⁴ 7.347 millones en producción de bienes públicos de carácter preferente,⁵ 4.555 millones en actuaciones de carácter económico,⁶ además de los 6.221 millones en deuda pública y los 21.258 millones en actuaciones de carácter general que no pueden ser privatizados. Es decir, cerca del 60% de los 65.000 millones de euros gestionados a través de los presupuestos de las entidades locales, **37.000 millones, son susceptibles de ser gestionados de forma privada**. Entre estos y con los datos facilitados por el Ministerio, no es posible dilucidar si está incluida la totalidad de los servicios de abastecimiento y depuración de agua que no se gestionan a través de los presupuestos municipales, sino a través de las tarifas que las familias usuarias pagan directamente a la prestadora del servicio, ya sea empresa privada a través de gestión indirecta o

* Colaborador técnico en AEOPAS en el área de asesoramiento y formación de la CUP (jordi@terranegra.cat)

1. Los únicos servicios que no son privatizables (de momento) son los que reportan ejercicio de autoridad, por ejemplo las policías municipales.

2. Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (2014), 2 de diciembre, «Coste efectivo de los servicios prestados por las Entidades Locales», <http://www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/CosteServicios.aspx> [13 de mayo de 2015].

3. Seguridad, tráfico y vías públicas, vivienda y urbanismo, agua y alcantarillado, residuos, cementerio y alumbrado.

4. Pensiones no de la seguridad social, servicios sociales, fomento del empleo.

5. Sanidad, educación, cultura, deportes.

6. Gastos de actividades, servicios y transferencias que tienden a desarrollar el potencial de los distintos sectores de la actividad económica. Se incluyen también los gastos en infraestructuras básicas y de transportes; infraestructuras agrarias; comunicaciones; investigación, desarrollo e innovación.

ente público con gestión directa⁷. En cualquier caso, el volumen del servicio de abastecimiento para 2011 sería de 1.606 millones de euros (ver Tabla 1), y el del saneamiento se estima en 1.150 para el 2010 según Unidad Editorial Conferencias y Formación citando Expansión del 21 de julio de 2011⁸.

Tabla 1. Estimación del volumen negocio en abastecimiento de aguas (Fuente: Tribunal de Cuentas de España 2011)

Tramo población (habitantes)	€/habitante	Número poblaciones	Número habitantes totales	Coste total	Coste total millones de euros
1 y 1.000	113,76 €	4.855	1.494.230	169.983.604,80 €	170
1.001 y 5.000	47,95 €	1.941	4.493.962	215.485.477,90 €	215
5.001 y 20.000	38,39 €	922	9.034.186	346.822.400,54 €	347
20.001 y 50.000	34,72 €	253	7.499.173	260.371.286,56 €	260
>50.000	24,86 €	145	24.668.942	613.269.898,12 €	613
Total	34,03 €		47.190.493	1.605.932.667,92 €	1.606

Anualmente, la Diputación de Barcelona a través de los Círculos de Comparación Intermunicipales estima la distribución entre gestión directa e indirecta de determinados servicios⁹, y aunque ni recogen los datos de todos los municipios de la provincia ni de todos los servicios¹⁰, muestran la tendencia. Con datos de 2012, el 69% de los servicios están municipalizados (Figura 1), pero evaluado el presupuesto (Figura 2), la municipalización desciende hasta el 53%.

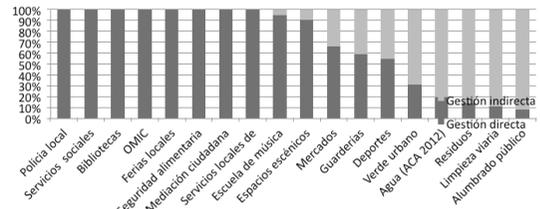


Figura 1. Distribución de la forma de prestación según tipo de servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales, Diputación de Barcelona, 2012)

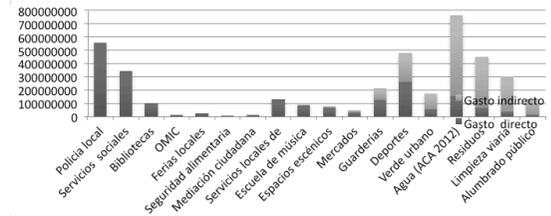


Figura 2. Gasto presupuestario según forma de prestación del servicio (Fuente: Círculos Comparación Intermunicipales, Diputación de Barcelona, 2012)

7. Según comunicación verbal del gerente de AEOPAS, el porcentaje de gestión privada del agua en el Estado Español está en el 53%, llegando en Catalunya hasta un 84% de la población, según dato de la plataforma «Aigua és vida», «Gestió de l'aigua per municipis», http://www.aiguavesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#poblacio_gestio [13 de mayo de 2015].

8. Unidad Editorial Conferencias y Formación (2011), «IV Encuentro Agua en Cataluña. Conozca la nueva política del agua y las infraestructuras previstas», <https://plataformaagua.es/files.wordpress.com/2011/11/programa-negocio-del-agua.pdf> [13 de mayo de 2015].

9. <http://www.diba.cat/menugovernlocal/cci> [13 de mayo de 2015].

10. No se evalúa el servicio de distribución de agua y en los servicios de atención domiciliaria no se recogen los datos de gestión directa/indirecta.

Con estos datos estimamos que el volumen de negocio de los servicios públicos privatizados estaría entorno a los 17.400 millones de euros, con unas oportunidades de crecimiento de 19.600

millones de euros. Mercado cautivo y de gran volumen. De ahí el gran esfuerzo de generación del relato de la eficiencia y las bondades de la colaboración público-privada de los medios de propaganda.

Quienes estamos en la gestión de los servicios municipales sabemos que los servicios privatizados presentan sobrecostes que van del 22%¹¹ a más del 90%¹², respecto el servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza (Tribunal de Cuentas, 2013). Sobrecoste que además lleva añadido una prestación del servicio de menor calidad y una infra-inversión (Lobina, 2015).

En una situación de emergencia social resulta especialmente pornográfico destinar recursos públicos a cuentas de resultados de grandes transnacionales, sancionadas por competencia por actuar como cárteles, para proporcionar de forma deficiente servicios esenciales, en lugar de destinar los recursos públicos, exclusivamente y de forma eficaz, a satisfacer las necesidades sociales básicas.

Este drama ha sido posible por dos motivos: infra-financiación municipal y existencia de un relato único. Con dificultades endémicas de financiación, empeoradas por el fin de la burbuja inmobiliaria que financió tantos ayuntamientos, los municipios están privatizando los servicios de aguas para obtener ingresos extraordinarios con el canon concesional, aunque sea a costa de incrementar substancialmente el recibo del agua a sus ciudadanos. Así como financiando obras públicas o inversiones en equipamientos y materiales para servicios, incluyéndolas en las obligaciones de los contratistas privados, incrementando el gasto corriente y pagando mucho más por la misma inversión, por no poder endeudarse.

La construcción del relato ha sido aún más

demoledora: la FEMP está dando formación, financiada por el BBVA y la fundación AGBAR, a los ediles sobre las virtudes de la colaboración público-privada con contenidos exclusivamente de marketing y comunicación sin ninguna referencia a técnicas de gestión¹³; privatización de los posgrados de gestión de redes de aguas¹⁴; convenios de colaboración entre la dominante del oligopolio de las aguas, la fundación AGBAR, con el Consejo General del Poder Judicial¹⁵ para formar a los jueces en materia de aguas; etc.

Por suerte, esta crisis nos ha obligado a repensar nuestras realidades, a confeccionar otro relato, y a practicar otras alternativas. Otro relato en el cual una empresa privada no es eficiente prestando un servicio público en condiciones de monopolio, sino que sólo es eficaz maximizando sus beneficios con un amplio menú de técnicas de esquilmo de recursos públicos (Colomer, 2015). Alternativas prácticas donde experimentamos que un servicio remunicipalizado es más económico porque:

- **No está sujeto a IVA**, a excepción del servicio de abastecimiento de agua: Ahorrando el 10% en residuos, limpieza de la vía pública, parques y jardines, alcantarillado y tratamiento aguas residuales, y transporte; y el 21% en el resto de servicios (alumbrado, cementerio, limpieza edificios públicos, servicio social de atención domiciliaria, etc.).
- **No extrae plusvalías para repartir dividendos**: Ahorrando beneficios industriales que pueden ir de un mínimo del 6% al 16%¹⁶. Si existen ingresos superiores a los costes finales se podrán destinar para reinvertir en el servicio o para ahorro.

13. http://www.femp.es/Portal/Front/ContenidoDetalle/_fxS-SGDnKJvMhONf6iLM8g7yk0Y9ZIfjJDRl_c0KYT44 [13 de mayo de 2015].

14. <http://www.actualidaduniversitaria.com/2011/09/agbar-la-universidad-politecnica-de-madrid-y-la-universitat-politecnica-de-catalunya-impulsan-proyectos-de-formacion/> [13 de mayo de 2015].

15. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Canal_Judicial/CGPJ/CGPJ_y_Fundacion_AGBAR_suscriben_convenio_para_formar_y_debatir_sobre_el_derecho_de_aguas [13 de mayo de 2015].

16. En la práctica son mayores al recortar en gastos formalmente comprometidos, o incrementar ingresos previstos.

11. Sobrecoste de la gestión privada del agua (Tribunal de Cuentas, 2013), donde además, las privadas, tienen un 30% más de pérdidas de red y un 15,5% menos de inversión.

12. Sobrecoste de la gestión privada del agua en la región metropolitana de Barcelona respecto el coste de las empresas públicas que operan en la zona, http://www.aiguavesvida.org/mapa-aigua-a-catalunya/#territori_preu [13 de mayo de 2015].

- **No aplica comisiones comerciales en los suministros:** La privada o mixta utiliza todas las herramientas posibles para incrementar sus ingresos, lo más habitual es cargar el porcentaje de beneficio industrial y de gastos generales en los materiales o equipos que aporta al servicio, además de aplicar sólo una parte del descuento que obtienen respecto el precio de catálogo por parte de su proveedor. Estos márgenes están entorno al 25%.
- **No necesitamos múltiples equipos técnicos:** En los servicios privatizados pueden operar hasta tres equipos técnicos relacionados con el servicio: el municipal, el de la empresa y el de la consultora que realiza el control, cada uno con su coste respectivo. Cuando el servicio está municipalizado es suficiente un solo equipo para asegurar la calidad de este.

Además del ahorro económico, pasamos de la dinámica de conflicto de intereses en las privatizaciones (empresa busca beneficios, municipio busca servicio económico), a una dinámica en la que todos ganan por la coincidencia de intereses. Quien encarga el servicio tiene todos los mecanismos de control sobre el servicio y, por lo tanto, todas las decisiones sobre la calidad del mismo. Permite aplicar la máxima transparencia en la gestión del servicio e incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas.

En el marco legal español, para remunicipalizar los servicios públicos no hace falta nada más que rescindir los contratos de gestión indirecta con que se privatizaron y abrir nuevos expedientes de cambio de forma de gestión de los servicios. Para la rescisión disponemos de 5 alternativas:

1. **Vencimiento** del contrato: En el momento de la finalización del contrato, abrir un expediente de cambio de forma de gestión en lugar de preparar una nueva licitación.
2. **Rescate** del servicio: Cancelación del contrato en cualquier momento por interés público, indemnizando a la parte privada con el beneficio industrial pactado por contrato pendiente de percibir y con el pago

de las inversiones realizadas pendientes de amortizar.

3. Resolución por **mutuo acuerdo**: Se pacta con la empresa los términos de la finalización y se asegura que esta no utilice la vía contenciosa para defender sus intereses. Esta vía no es aplicable si la empresa ha incumplido sus obligaciones contractuales¹⁷.
4. **Incoación de expediente sancionador**: En el caso de tener documentados los incumplimientos de las obligaciones contractuales, estamos obligados a abrir un expediente sancionador. En caso de faltas muy graves podremos rescindir el contrato sin derecho a indemnización.
5. **Renuncia** del contrato: En el caso que la empresa no obtenga los beneficios esperados y que el municipio no acepte una aplicación fraudulenta del mantenimiento del equilibrio económico financiero del servicio, la empresa puede renunciar al contrato y a sus derechos.

En los casos donde se deba indemnizar a la parte privada cabrá valorar cual es el tiempo de amortización de esta «inversión» con los ahorros que esperamos obtener con la municipalización.

En los expedientes de cambio de forma de gestión se debe realizar un proyecto con una memoria indicando cuál será la forma mediante la que se prestará la gestión directa. En este sentido, hay cuatro posibilidades de municipalización:

1. **La propia entidad local** es la que presta el servicio con personal propio.
2. **Un organismo autónomo local** es el que recibe el encargo y lo presta a partir de una transferencia del presupuesto del ente local al organismo que se auto-organiza con presupuesto y personal propio dentro del marco de la jurisdicción administrativa.
3. **Una entidad pública empresarial** es quien recibe la encomienda de gestión. Se trata de un organismo público con personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propio, con autonomía de gestión. Está adscrita a

17. Que es lo más habitual. Lo que no es tan habitual es que se haya realizado seguimiento, y menos aún, que se hayan documentado los incumplimientos.

un ente local, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el mercantil en la actividad «empresarial». Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, y tienen la capacidad de sancionar.

4. **Una sociedad mercantil con capital 100% público** recibe la encomienda. Se trata de una sociedad mercantil (SL o SA) con capital 100% público, bajo el derecho administrativo en la toma de decisiones y el derecho mercantil en la actividad «empresarial». Aplica el estatuto del trabajador público y la ley de contratos del sector público, pero no tiene la capacidad de sancionar.

Existen limitaciones para crear nuevos entes en municipios con plan de ajuste, quedando siempre abierta la posibilidad de prestar el servicio con personal propio. Respecto a la prohibición de contratar nuevo personal en el sector público, la ley de presupuestos de 2015 permite la contratación temporal de nuevo personal para la prestación de servicios básicos y para las necesidades urgentes e inaplazables, el caso de los servicios públicos municipales.

Remunicipalizar los servicios públicos locales es posible y además nos permite preguntar a qué vamos a dedicar el ahorro del sobrecoste de las privatizaciones, en lugar de preguntarnos qué vamos a recortar. 

Referencias

- COLOMER, J. (2015), «Remunicipalització. Situació i oportunitats de remunicipalització dels serveis públics», Conferencia municipalista CUP 2015, http://prezi.com/ertowa5sqo64/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share consultado el 13 de mayo de 2015.
- Diputació de Barcelona (2014), «Anàlisi de serveis municipals mitjançant indicadors de gestió. Recull de conclusions dels serveis analitzats en els cercles de comparació intermunicipal. Resultats any 2012», <http://www.diba.cat/documents/446869/545c406a-bbfd-4a98-a6a3-632fdc718272> consultado el 13 de mayo de 2015.
- LOBINA, E., KISHIMOTO, S. y PETITJEAN (2015), «Llegó para quedarse: La remunicipalización del agua como tendencia mundial». Solidaridad Internacional-Andalucía y Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento.
- Tribunal de Cuentas (2013), «Informe nº 1.010 de fiscalización del sector público local, ejercicio 2011», <http://www.tcu.es/repositorio/fd3654bc-3504-4181-ade5-63e8a0dea5c2/I1010.pdf>, consultado el 13 de mayo de 2015.

Redes de resistencia

Ambiente mortal

Marien González Hidalgo

Resistencias agroecológicas en Yucatán, México

Mauricio López Barreto



Ambiente mortal¹

Marien González Hidalgo*

Visibilizando crímenes ocultos

En 2014 la organización *Global Witness* publicó su informe *Deadly environment. The dramatic rise in killings of environmental and land defenders* («Ambiente Mortal. El dramático aumento de asesinatos a defensores ambientales»). El informe analiza y denuncia el drástico aumento, en los últimos años, de los asesinatos a personas participantes de luchas en defensa del medio ambiente o derechos de tierra.

Ya en 2012 *Global Witness* denunció en su Informe *A hidden crisis* («Una crisis escondida»)², que las muertes en relación a la presión extractiva de las tierras (y especialmente los bosques) estaban aumentando de manera dramática. Dicho informe demostraba que el conocido caso del asesinato en 1988 de Chico Mendes, activista y cosechador de caucho en Brasil, no es en absoluto un hecho aislado. En *A hidden crisis* se reportaban 711 muertes en relación a la defensa de la tierra. En el informe «Ambiente mortal», *Global Witness* amplía el marco temporal del estudio, hasta finales de 2013.

El informe reporta 908 muertes desde 2002 a 2013 en 35 países de África, Asia y América central y del Sur. *Global Witness* toma la información de más de 1.000 reportes de colectivos locales, grupos de investigación, instituciones de

derechos humanos, y comisiones de investigación; dicha información es contrastada por instituciones nacionales o regionales para contrastar la información. Las regiones más afectadas fueron Asia y América central y del Sur.

El informe se enfrenta a la limitación que supone la probablemente deliberada falta de información al respecto. Muchas de las muertes suceden en lugares remotos y/o rurales, o donde no hay grupos de la sociedad civil que monitoreen los derechos humanos. Por ejemplo, en países como Nigeria, República Democrática del Congo, República Centroafricana y Zimbabue, se conoce el carácter violento de los disturbios, pero la información es casi imposible de contrastar a menos que con visitas al terreno. Además, la ausencia de información revela también la falta de voluntad política para ejercer la justicia ante estos asesinatos, que se traduce en una impunidad al respecto. Sólo el 1% de los perpetradores de dichas muertes se sabe que hayan sido procesados y condenados por los asesinatos que han cometido.

El informe, por tanto, intenta contrarrestar la tendencia a que estas muertes queden silenciadas, o mantenidas como casos aislados, locales o circunstanciales. Se pretende así visibilizar este problema como una tendencia mundial: muertes relacionadas a acaparamientos de tierras, operaciones mineras, industria de la madera... demuestran que es la presión sobre los recursos finitos la que aumenta estas amenazas. Pocas cosas pueden dar más evidencia de la profunda crisis ambiental en la que vivimos.

Morir por defender la tierra

Las 908 muertes reportadas son en su mayoría asesinatos de personas concretas, o ejecuciones

1. Texto disponible aquí: <http://www.globalwitness.org/deadlyenvironment/>.

* Universidad de Chile (marien.gonzalezhidalgo@gmail.com) La redacción de este artículo ha sido posible gracias al Programa People (Acciones Marie Curie) del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, bajo el acuerdo número 289374 – «EN-TITLE» - www.political ecology.eu.

2. http://www.globalwitness.org/sites/default/files/library/A_hidden_crisis-FINAL%20190612%20v2.pdf. Consultado el 10 de marzo de 2015.



Comunidades protestando en contra del acaparamiento de tierras en Camboya se enfrentan con la policía, en 2012. (Autor: Jeff Vice, Fuente: Global Witness)

extrajudiciales en manifestaciones o acciones de protesta. Las personas asesinadas se oponían o denunciaban impactos por acaparamientos de tierras, operaciones mineras, deforestación y tala ilegal, principalmente. También han sido asesinados activistas relacionados con movilizaciones en contra de contaminación, protección de recursos fluviales y conservación de fauna.

Las personas asesinadas eran pertenecientes a pueblos indígenas, grupos sin tierra, campesinos/as, trabajadores de ONGs, periodistas. En muchos casos son las comunidades indígenas las que salen peor paradas: se han documentado 92 eventos con 115 víctimas en relación con los pueblos indígenas, aunque esta cifra puede ser difícil de confirmar, dado que estas personas suelen vivir en áreas remotas.

Las razones que explican estas muertes son tres. Primero, el aumento de la presión sobre los recursos finitos. Segundo, el hecho de que las apropiaciones de tierra, recursos ambientales y bienes comunes siguen haciéndose a puerta cerrada, sin el consenso de las comunidades locales. Esto suele suceder con legitimación de los

gobiernos, ya que normalmente los Estados y sus fuerzas de seguridad se ponen al servicio de la protección de los intereses privados. Finalmente, la colaboración entre extractivismo, capital privado y Estados se pone de manifiesto después, cuando se demuestra que éstos últimos tienden a no investigar los crímenes.

De las 908 muertes registradas entre 2002 y 2013, Brasil (448 asesinatos), Honduras (109), Filipinas (67) y Perú (58) son los que presentan la situación más dramática. El informe presenta en detalle los casos de Brasil y Filipinas. El caso de Brasil, por un lado, es paradigmático por la gran cantidad de asesinatos, vinculados a conflictos de tierra por la alta concentración de la misma y la tala ilegal en la Amazonía. Como ocurre en varios territorios, los asesinatos suceden en un contexto de títulos de propiedad en pugna, ausencias de aplicación de las leyes, y grandes intereses de terratenientes de la agroindustria o madereros. El alto número de casos de asesinato en Brasil, por otro lado, muestra sin embargo un buen monitoreo de las violaciones de los derechos humanos, algo ausente en muchos de los

otros territorios. Filipinas, por otro lado, muestra una realidad también compartida en otros lugares: las muertes desde 2002 son 67, 42 de ellas relacionadas con la oposición a proyectos mineros de empresas nacionales o internacionales, cuyos principales perpetradores son fuerzas de seguridad.

Los casos reportados en este informe muestran como las personas que se articulan como defensoras de la tierra y el ambiente, se enfrentan a poderosos intereses políticos y económicos, que les exponen a condiciones de abuso. La vulnerabilidad de estas personas se ve agravada, además, por el frecuente aislamiento rural, limitación de recursos económicos y a veces escaso conocimiento que tienen de sus propios derechos. Por otra parte, es importante tener en cuenta que estas muertes son sólo la punta del iceberg de otras amenazas que sufren las comunidades, como son procesos de intimidación, violencia, detenciones arbitrarias, estigmatización, criminalización, etcétera.

Recomendaciones: parar la muerte

El informe *Deadly Environment* no se queda sólo en la denuncia de estas muertes, sino que propone y exige que los gobiernos nacionales, compañías de capital privado e instituciones internacionales asuman sus responsabilidades sobre esto.

Se exige a los gobiernos nacionales que tomen medidas en lo que refiere al respeto de los derechos de los y las activistas ambientales, tal como estipuló la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en 2011³. Es fundamental que se respeten y se apliquen las disposiciones expuestas en la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos⁴, prestando especial

atención al deber y la responsabilidad de los Estados de proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente seguro y saludable. Así mismo, se debe garantizar que se investiguen rápida e imparcialmente las acusaciones de ataques y violaciones contra activistas, y proporcionar a las víctimas reparaciones e indemnizaciones adecuadas. Los Estados y sus gobiernos deben hacer cumplir el derecho que tienen las comunidades potencialmente afectadas por inversiones y proyectos extractivos a un consentimiento genuinamente libre, previo e informado antes de que se llegue a ningún acuerdo. Cuando corresponda, se debe cumplir la Convención de Aarhus⁵, que otorga a la ciudadanía el derecho a participar en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, tener acceso a la información relacionada con el medio ambiente y reclamar justicia en cuestiones ambientales. Además, se debe abordar el aumento del riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el proceso de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tanto en sus propios informes como en las recomendaciones que hagan para los informes de otros Estados.

A los organismos internacionales, se recomienda que en los procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos⁶ (específicamente los que tienen el mandato de ocuparse de los defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, derechos humanos y empresas, derechos humanos y el medio ambiente y ejecuciones extrajudiciales) se aborde el aumento del riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, en sus siglas en inglés)⁷ y la Comisión Africana de Derechos Humanos⁸ y de los pueblos deberían

3. Consejo de Naciones Unidas (2011). Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Disponible en inglés acá :http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-55_en.pdf

4. Declaración de Naciones Unidas sobre los defensores de los Derechos Humanos (2008). Resolución de la Asamblea general de Naciones Unidas Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf

5. Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (1998). Convención sobre acceso de información, participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Disponible en:<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf>

6. <http://www.ohchr.org>

7. <http://www.asean.org>

8. <http://www.achpr.org>

crear un mecanismo basado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos⁹ para ofrecer protección a los defensores de los derechos humanos en casos de emergencia.

En lo que refiere a las empresas, se exige que tomen de inmediato las siguientes medidas: rehusar a invertir o planificar proyectos en zonas donde no cuentan con un consentimiento genuinamente libre, previo e informado de las comunidades que pudieran verse afectadas; renunciar a operaciones en zonas militarizadas; y al uso de seguridad privada si existen acusaciones de participación en violaciones de los derechos humanos en el pasado. Asimismo, se urge a que las empresas revisen sus cadenas de suministro para garantizar que su política de adquisiciones no esté relacionada con empresas cuyas operaciones causan daños sociales o ambientales. Se han de adoptar y aplicar los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos¹⁰, los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos¹¹ y las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional¹².

De manera más general, es evidente que los Estados, los organismos internacionales y las empresas tienen también la responsabilidad de estas muertes por impulsar modelos económicos erróneos que causan la destrucción masiva del medio ambiente. Es decir, además de proteger los derechos de las personas activistas, se requiere con urgencia la acción para proteger el medio ambiente a nivel nacional y mundial. La tierra, los bosques y la propia biosfera son finitos, pero se están destruyendo por las demandas en alza

en consumo y contaminación del Norte Global. Si no se toman estas medidas no sólo aumentará la destrucción ambiental, sino que también seguirán los asesinatos y la violencia, sabiendo que pueden quedar invisibilizado, como lo han estado por mucho tiempo. ■

9. <http://www.oas.org>

10. Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (2000). Disponible en: http://www.voluntaryprinciples.org/wp-content/uploads/2013/03/principios_voluntarios_espanol.pdf

11. Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2011). Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Disponible en: <http://business-humanrights.org/es/node/86208/principios-rectores-sobre-empresas-y-derechos-humanos>

12. Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2012). Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf>

Resistencias agroecológicas en Yucatán, México

Mauricio López Barreto*

En el Estado de Yucatán, México, aún se puede encontrar un patrimonio biocultural Maya, donde las prácticas productivas reflejan los saberes y un sistema de creencias tradicionales que giran alrededor de la agroecología. No obstante, las fuerzas globalizadoras y de libre mercado están erosionando ese patrimonio y generando conflictos sociales. En este contexto han surgido movimientos locales de resistencia, como el Comité de Defensa de Semillas (el Comité), el Equipo Indignación A.C. (EI) y el Colectivo Milpa (CM), entre otros; estableciendo redes de resistencia para la reivindicación de prácticas agroecológicas sustentables.

El Comité está conformado por diez comunidades del sur de Yucatán y lleva más de diez años asegurando el rescate de la semilla para depender sólo de sus productos y prácticas agrícolas (TPP, 2014). A pesar de que el Comité tiene algo más de diez años de existencia, movimientos de resistencia que le precedieron, conformados por grupos de base, como el Proyecto Peninsular de Desarrollo Participativo (PPDP) y la Red de Organizaciones del Sureste para el Desarrollo Sustentable (ROSDESAC) aparecieron con mayor fuerza ante la presión de los cambios estructurales neoliberales derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El Colectivo Milpa, por otro lado, es una organización localizada en Mérida, Yucatán, que fomenta la agricultura y permacultura orgánica urbana. El movimiento del colectivo comenzó en el 2010 por la preocupación de la alimentación 'chatarra'. Su principal objetivo es cultivar

y rescatar la mayor diversidad de semillas criollas de variedades nativas. Hasta la fecha han capacitado a más de 500 personas en el tema de permacultura orgánica, entre ellas a familias de la comunidad donde se encuentran.

Actualmente los socios de CM, David Robertson Cubello y Tomás Gómez Herrera cuentan con participaciones voluntarias de personas que desean aprender y trabajar la tierra como intercambio de cosecha y saberes. A través de su participación en ferias de semillas regionales y el intercambio entre campesinos y amistades, han logrado sembrar y cultivar numerosas especies orgánicas, endémicas de la región, utilizando prácticas agroecológicas.



Muestreo de productos de la milpa yucateca
(Autor: Mauricio López)

* El autor es Antropólogo Social, graduado en la Universidad de Maryland, E.U.A. Posteriormente obtuvo el grado de MSc. en Ecología Internacional en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, Canadá. Actualmente es candidato al Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). (mauri.lopez@gmail.com)

Robertson señala que el acto más efectivo para luchar en contra de la agroindustria «es la siembra de semillas criollas en casa y, a través de esto, generar una conexión con nuestra tierra y nuestra alimentación que nos permita prohibir la

entrada de transgénicos a nuestras mesas y nuestras familias. Participamos en ferias de semillas, días de la Tierra y movimientos que promuevan la agricultura orgánica y el consumo local.»

Asimismo, el Equipo Indignación (EI) se fundó como un movimiento de promoción y defensa de los derechos humanos en Yucatán durante la década de los 90. Sin embargo, según relata el Pbro. Raúl Lugo, miembro fundador, EI se unió al movimiento de resistencia del pueblo Maya, luego de hacer consciencia de que vivimos en el territorio ocupado de este pueblo, es decir, la región de Yucatán. Actualmente el vértice de la misión de EI se ha convertido en la lucha para la autonomía y la no discriminación del pueblo Maya y sus prácticas.

Asimismo, EI acaba de publicar un libro titulado *Rebelión y resistencia del pueblo maya: tsikbal*. Éste recopila conocimientos de las comunidades Maya, a través de transmisión oral, a lo largo de una trayectoria de más de 20 años, construyendo una historia alterna; la que se guardó en la memoria de los pueblos maya yucatecos.

El papel de las redes de resistencia

Redes de resistencia como la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina, y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) – que juntos reúnen a miles de comunidades, organizaciones e individuos a nivel nacional e internacional – ofrecen una plataforma para que movimientos locales como EI, el Comité, y CM puedan unirse a una causa común. El impulso generado por esta unión puede significar serios desafíos para los poderes del Estado ya establecidos.

En este sentido, la autorización para sembrar 235.500 hectáreas de cultivos transgénicos en la Península de Yucatán dio paso a un caso emblemático. En la región los transgénicos han contaminado el entorno natural, afectando, entre otros factores, a la calidad de miel y, por ende, al rubro económico de la apicultura, una de las principales fuentes económicas del estado que beneficia a unas 25.000 familias campesinas e indígenas (La Jornada, 2014). Los estragos en la

milpa, el eje principal del modo de vida Maya, también ha llevado a graves repercusiones en el tejido social de las comunidades.

En febrero de 2012, las organizaciones UNORCA, Miel Integradora S.A. de C.V., la Sociedad de Solidaridad Social «Apícola Maya de Yucatán» y Greenpeace, entre otras, demandaron a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) por la inconstitucionalidad que representaba el otorgamiento del permiso para siembra comercial de soya transgénica (MA OGM, 2014).

Un precedente interesante

Respondiendo a la demanda por parte de 29 organizaciones, el pasado 22 de julio de 2014 un juez de distrito en Yucatán anuló un permiso otorgado a la empresa transnacional Monsanto por la SAGARPA para sembrar soya transgénica en Yucatán (La Jornada, 2014). La denuncia obedeció a la violación del derecho al medio ambiente sano desatendiendo el principio precautorio establecido en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM); a la violación al derecho de los pueblos indígenas a la consulta pública, establecido por el convenio 169 de la OIT; a la violación al derecho al trabajo; así como a la omisión de las opiniones negativas a la siembra de soya transgénica emitidas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) (MA OGM, 2014).

Por otro lado, Patricia Arendar, la directora ejecutiva de la organización ambientalista Greenpeace, manifestó que el reclamo de los campesinos se trata de una lucha común, destacando que los transgénicos favorecen el monopolio y control de las semillas, ocasionando una pérdida en la biodiversidad (Greenpeace, 2013).

Conclusión

Los recientes conflictos socioambientales en Yucatán que responden a la presión de políticas y prácticas neoliberales, han impulsado movimientos de resistencia de las comunidades de base. En este caso, las redes integradas por las comunidades y organizaciones locales en resistencia forman redes de apoyo para la reivindicación de modelos agroecológicos sustentables. El fallo judicial a favor de las comunidades maya constituye un importante precedente trascendental para otras acciones similares. El desafío a los poderes establecidos a través de la convergencia de los diferentes grupos que integran las redes de resistencia, constituye probablemente la alternativa más eficaz de resistencia contra la depredación de los recursos naturales, fomentando nuevos modelos agroecológicos y al mismo tiempo reivindicando prácticas tradicionales de producción sustentable. ■

Referencias

- GREENPEACE (2013). «Greenpeace se suma a protesta campesina en contra de transgénicos», 1 de febrero, <http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2013/Febrero/Greenpeace-se-suma-a-protesta-campesina-en-contra-de-transgenicos-/#-comments-holder>, consultado el 24 de mayo de 2015.
- TPP (2014). «Dictamen Preaudiencia Políticas de exterminio contra el Pueblo Maya. Eje: Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos», 9 y 10 de noviembre, <http://redendefensadelmaiz.net/wp-content/uploads/2013/11/maya.pdf>, consultado el 18 de marzo, 2015.
- MA OGM (2014). «Apicultores ganan un amparo en Yucatán contra Sagarpa y Monsanto, anuncian Greenpeace, Unorca y el Colectivo MA OGM» 22 de julio, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=802268863137666&id=562681677096387&substory_index=0, consultado el 24 de mayo de 2015.
- LA JORNADA (2014). «Otro freno a los transgénicos», 26 de julio, <http://www.jornada.unam.mx/2014/07/26/opinion/025a1eco>, consultado el 16 de febrero de 2015.

Referentes ambientales

Entrevista a Enrique Leff

Sofía Ávila Calero



Entrevista a Enrique Leff*

*Entrevistadora: Sofía Ávila Calero***

Tus contribuciones en el campo del pensamiento ambiental han estado guiadas por una clara perspectiva interdisciplinaria. Nos gustaría saber sobre tu proceso formativo en la Ingeniería Química y la Música, así como las inquietudes que te llevaron a estudiar un Doctorado en Economía del Desarrollo. ¿Cómo han contribuido estas experiencias a la conformación de tus ideas sobre el medioambiente?

Lo primero que diría es que si en mi pensamiento ambiental se percibe una «clara perspectiva interdisciplinaria», esta no se debe en nada al hecho de que hubiera yo adoptado y seguido un método interdisciplinario, o que pudiera identificar en mi un espíritu «interdisciplinario» que me hubiera llevado a transitar en mi formación por diversas disciplinas. Si mi camino adquirió una «perspectiva interdisciplinaria», esta fue resultado de una inquietud constitutiva, de una disposición que brota más de una falta existencial que de una concepción sobre las múltiples facetas de la cuestión ambiental como un objeto complejo de conocimiento, de ese extraño objeto que atrapó mi deseo de saber y me condujo a abrir las puertas de diferentes disciplinas en busca de su sentido. Yo diría que se trata más bien de un impulso in-disciplinario, el mismo que en estos momentos me lleva a escribir un libro de



filosofía ambiental, con el cual pretendo obtener mi doctorado en filosofía, y darme con ello la identidad académica que quizá mejor corresponda con mi búsqueda. En cuanto a la música, más que una armoniosa melodía que haya acompañado mi viaje o un canto de sirenas que me haya distraído de mi verdadero destino, fue y ha sido la pasión de la experiencia más exuberante y sublime a la que pueda aspirar el ser humano: la de ser un cuerpo cantante; aspiración ante la cual palidece el más modesto propósito de ser apenas un átomo de materia viva tratando de pensar el enigmático mundo que habitamos enfrentado a la crisis ambiental. En términos de mi formación formal, efectivamente la ingeniería química fue mi primera disciplina académica profesional, producto de una «decisión de compromiso», más que del reconocimiento de una vocación vital. Mi salto a la economía fue ya una decisión motivada por la inquietud por comprender el mundo; el marxismo me abrió el pensamiento a la condición social, y no tardé mucho en dar marcha atrás a la economía convencional, hasta convertirme en un anti-economista, como corresponde al ambientalismo radical. La crisis ambiental se cruzó en mi vida en esa etapa de mis búsquedas fundamentales y fue determinante en la orientación de mis indagatorias teóricas a lo largo de mi vida, que habrían de llevarme a explorar disciplinas como la ecología y la sociología, la epistemología y la filosofía.

* Sociólogo ambientalista mexicano. Doctor en Economía del Desarrollo en París, Francia. Trabaja en los campos de la Filosofía y la Epistemología Ambiental; la Ecología Política y la Economía Ecológica; la Educación y la Formación Ambiental. Actualmente es Investigador Titular C de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociales y Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

** Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona (acalerosofia@gmail.com).

En 1968, año en que finalizas tus estudios en Ingeniería Química en la UNAM, emergen una serie de movilizaciones sociales en diversas partes del mundo (incluyendo México). La década siguiente también representa un momento crucial que tú mismo has denominado como «revoluciones del pensamiento» ¿Cómo influyó todo este contexto en tu propia formación?

En efecto, la década de los 60 fue una década de revoluciones políticas, sociales y teóricas, de cambios paradigmáticos en el pensamiento y el orden social. Es la época en la que se despliegan revueltas juveniles, sexuales y libertarias inéditas, luchas anticoloniales (la guerra de Argelia), grandes cambios sociales, como la Revolución Cubana y la Revolución Cultural en China, y movimientos emancipatorios como el antirracista en EUA. Aparecen los primeros brotes de la crisis ambiental y de un pensamiento eco-anarquista; emergen las ciencias de la complejidad (Prigogine), el pensamiento estructuralista (Althusser, Lacan, Foucault) y la filosofía de la posmodernidad (Derrida, Deleuze, Lyotard). 1968 fue el año de la Primavera de Praga y de los movimientos estudiantiles que conmovieron al mundo: entre ellos, el Mayo Francés y del Movimiento Estudiantil Mexicano. Mi experiencia como líder del movimiento estudiantil en México y como representante de la Facultad de Química ante el Consejo Nacional de Huelga y del Consejo Universitario, fueron determinantes en mi vida: significaron mi primera conexión con la realidad social que orientó mis inquietudes por comprender el mundo social. Fue el gran impulso que abrió mi vida al mundo.

Durante tus estudios de Doctorado en Economía del Desarrollo en Francia participaste en el seminario de Ignacy Sachs sobre Ecodesarrollo. ¿Cómo describes el proyecto del Ecodesarrollo que entonces se

discutía y cuál fue su influencia para impulsar el diseño de políticas ambientales en América Latina?

Efectivamente, el haber participado en el seminario de Ignacy Sachs en mis años de formación en Francia resultó ser un acontecimiento determinante en mi vida intelectual. Sachs fue sin duda el artífice de lo que él mismo denominó las «estrategias del ecodesarrollo». Sachs concibió el medio ambiente como una variable a integrar dentro de un «enfoque sistémico» en las políticas de planificación del desarrollo como la vía para resolver la «problemática ambiental». Sin duda, este fue el enfoque que más influyó durante los años 70 en los estudios y en los primeros intentos por implementar unas políticas ambientales de América Latina. Pero su impronta no habría de resistir los reveses de la crisis económica de principios de los años 80 y la imposición de políticas neoliberales en varios países de la región. En realidad, las «estrategias del ecodesarrollo» mostraron ser un proyecto demasiado voluntarista, al no considerar las raíces ontológicas, epistemológicas y políticas profundas de la crisis ambiental, las cuales no tardarían en manifestarse en el campo de la ecología política y en el pensamiento ambiental de América Latina.

De París habría de volver a México con las ideas sobre el ecodesarrollo (intitulé mi primer artículo, publicado en 1975, «Hacia un Proyecto de Ecodesarrollo»). Pero mi «mochila ecológica» venía cargada sobre todo con las pasiones que anidaron en mi en esos años juveniles: pensar, cantar y amar. Allí se forjaron esas anclas aladas que arraigaron y alzaron el vuelo de mi existencia.

Durante más de dos décadas fuiste Coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el PNUMA. También has publicado diversos textos sobre conocimiento y formación ambiental en la región. Desde tu perspectiva ¿cuál es el papel de la educación ambiental en la construcción social

de la sustentabilidad? ¿Cuáles consideras que son los avances que se han dado en este campo dentro de América Latina?

Cuando irrumpe la crisis ambiental, comenzó a darse una reflexión sobre el carácter de esta crisis, y sobre sus posibles soluciones. Hacia 1975, organismos internacionales como UNESCO y el PNUMA, decidieron establecer el Programa Internacional de Educación Ambiental. Se pensaba que la educación y la capacitación ambiental eran los procesos más idóneos para transformar los modos de comprensión del mundo, para inducir nuevos valores y comportamientos orientados hacia la conservación de la naturaleza y para adquirir los conocimientos teóricos y habilidades prácticas, guiadas por principios de complejidad e interdisciplinariedad, que habrían de reorientar los procesos económicos y sociales hacia lo que más adelante se denominaría la sustentabilidad planetaria. Si bien este proceso ha sido lento y ha estado atravesado por una disputa de sentidos de la sustentabilidad – sobre todo una vez que la educación ambiental crítica ha sido cooptada por las estrategias hegemónicas del «desarrollo sostenible», de la «economía verde» y de las «tecnologías limpias» –, lo más relevante del campo de la educación ambiental en América Latina es el haberse constituido en un movimiento social. Más allá de haber construido un nuevo campo disciplinario – una pedagogía ambiental – o de haber llegado a establecer políticas públicas efectivas capaces de cubrir las diversas etapas educativas, de la básica a la universitaria, la educación ambiental ha abierto un espacio de reflexión-formación-acción dentro del cual se debaten teorías, principios seéticos, métodos investigativos y nuevos abordajes pedagógicos en torno a la cuestión ambiental y a la sustentabilidad. Sin embargo, la cuestión fundamental del proceso educativo sigue siendo la pregunta sobre cómo instituir una nueva comprensión del mundo, así como las disposiciones sociales necesarias para operar la transformación hacia la sustentabilidad de la vida en un mundo cooptado por la racionalidad de la modernidad y marcado por el conflicto

socio-ambiental. Si Althusser calificó al sistema educativo como un aparato ideológico del Estado, debemos concebir la educación, siguiendo a Freire, como un proceso de emancipación. En este sentido, la educación ambiental acompaña los procesos sociales hacia la construcción de una racionalidad ambiental.

Háblanos sobre la crítica que has desarrollado a la teoría del valor en Marx, especialmente en tu libro *Ecología y capital: hacia una perspectiva ambiental del desarrollo* (1986). ¿Cómo es que este análisis abre un camino para pensar el Ecomarxismo?

Mi crítica a la teoría del valor debe leerse como una crítica teórico-hermenéutica que apunta hacia la historicidad de todo concepto teórico, en este caso el propio concepto de valor como un principio objetivo sobre el mecanismo de explotación inscrito en las relaciones sociales de producción y sobre la verdad de su trascendencia histórica. Si bien esta crítica nace del espíritu deconstruccionista de esos tiempos sobre los fundamentos metafísicos del materialismo histórico, la crisis ambiental impulsa el surgimiento del ecomarxismo al señalar el olvido de la naturaleza en la dialéctica del desarrollo de las fuerzas productivas del marxismo. Empero, esta crítica no conducía simplemente a incorporar a la naturaleza como un factor más de la producción – a la internalización de sus externalidades ambientales –, sino que llevó a pensar el ambiente como la potencia productiva de la naturaleza dentro de una nueva teoría de la producción, fundada en una ontología de la vida, en la productividad negentrópica del planeta derivada de la capacidad transformadora de la energía solar a través de la compleja trama ecológica de la biosfera. La renovación del marxismo hacia un ecomarxismo entraña así una crítica epistemológica, un desplazamiento conceptual hacia nuevos terrenos teóricos y políticos, y una apertura hacia una nueva ontología de la historia. La dialéctica y trascendencia de la historia llevada por el desarrollo de las fuerzas productivas y la reapro-

piación de los medios de producción por el proletariado – de un sujeto histórico que encarna las condiciones objetivas del devenir histórico –, habría de desplazarse hacia un proceso más complejo de reconstrucción del mundo, desde una ontología de la vida y de la reapropiación social de la naturaleza. La economía política y la lucha de clases se desplazan hacia el campo de una ecología política y una ontología política, a la confrontación de modos diversos de construcción de mundos de vida. El materialismo histórico y dialéctico se abre hacia un diálogo de saberes, entendido como el encuentro de diversos seres culturales, de sus imaginarios y sus prácticas sociales, y de sus estrategias de reinención de sus identidades y de sus ontologías existenciales; de la renovación de sus prácticas productivas y los procesos de reterritorialización de sus modos de vida conformes con las condiciones termodinámicas, ecológicas y simbólicas de la vida. Se trata de un proceso de reconstrucción histórica que pone en acto una ontología de la diversidad, una política de la diferencia y una ética de la otredad.

Tu trabajo tiene un importante fundamento filosófico. En este sentido ¿por qué consideras que la crisis ambiental es una crisis epistemológica? ¿Qué implicaciones tiene esta interpretación frente al discurso de la economía verde y del desarrollo sustentable?

Efectivamente, mi indagatoria teórica sobre el carácter de la crisis ambiental me ha llevado, más allá de una mirada crítica o de sus manifestaciones en diferentes campos científicos, a comprender que la causa fundamental, la razón esencial de la crisis ambiental son los modos de entendimiento del mundo, de la disarmonía entre los modos de pensar y de intervenir a la naturaleza y las propias condiciones de sustentabilidad de la vida. Pero de manera determinante, la causa de la crisis ambiental es el modo hegemónico de comprensión de la realidad que ha instaurado la racionalidad de la modernidad, el modo de producción de conocimientos científicos y la instauración de la racionalidad económica que

gobierna al mundo globalizado: el capital. Este mecanismo de producción no reconoce las condiciones ecológicas de sustentabilidad de la biosfera; desconoce la entropía como ley límite de la naturaleza, que opera a cada momento que la economía se alimenta de los «recursos naturales», dispuestos a través del conocimiento científico para su apropiación económica. Es esta dinámica económica la que produce – más allá de un sinfín de mercancías – la degradación ambiental del mundo, la destrucción de las complejas tramas ecológicas de la biosfera, desencadenando la muerte entrópica del planeta. Esta comprensión de la conexión del proceso económico tal como ha sido instaurado e institucionalizado en el mundo moderno, con las leyes termodinámicas y ecológicas de la naturaleza, debería tener fuertes implicaciones en la deslegitimación del discurso de la economía verde y de toda la geopolítica del desarrollo sostenible, al desvelar la inviabilidad e insustentabilidad de sus propuestas.

En el marco de tus ideas sobre la transición hacia una Racionalidad Ambiental, hablas de la «negentropía» como elemento central para construir economías sustentables. ¿Qué significa este concepto y cómo permite establecer un puente entre la Economía Ecológica y la Ecología Política?

Más allá de la creencia ilusoria de un crecimiento económico ilimitado y del poder de la tecnología para renovar la naturaleza que es devorada por el proceso económico; más allá del deseo de una cierta economía ecológica por sujetar y constreñir a la economía dentro de las condiciones ecológicas de la naturaleza, la ley de la entropía se ha venido estableciendo como la ley madre y la ley límite de la naturaleza. La conexión entre la lógica y la dinámica del proceso económico y la manera como esta lógica y este proceso desencadenan la ley de la entropía, es la contribución teórica con la que Nicholas Georgescu Roegen abrió la inteligibilidad de la radicalidad, la irreversibilidad y cuasi ineluctabilidad de la degradación entrópica que induce

la racionalidad económica y que caracteriza a la crisis ambiental. No hay manera de contener esta destinación histórica instaurada en el mundo a través de la racionalidad de la modernidad accionando los mecanismos del mercado y el poder prometeico de la tecnología. La imposibilidad de contener el cambio climático y los avances en la destrucción ecológica del planeta luego de más de 40 años de aplicación de instrumentos tecno-económicos a la geopolítica del desarrollo sostenible, el fracaso de los intentos de desmaterializar la producción, son signos elocuentes de los límites para resolver la crisis ambiental y exorcizar la muerte entrópica del planeta con los dispositivos de poder de la tecno-economía. Eso nos lleva a rescatar el principio fundamental de la vida. Siguiendo el sentido originario de la *physis* del pensamiento filosófico griego – de una ontología de una emergencia incesante y un devenir diversificador –, se vuelve imperativo rescatar el proceso originario de la vida misma en el planeta vivo que habitamos. Ese acontecimiento, que prevalece a través de toda la historia geológica y ecológica del planeta fue definida por Erwin Schrödinger en su libro *Qué es la Vida* de 1944 como *negentropía*. Si la ley de la entropía – desde su acepción primera de Carnot y Clausius de la termodinámica de los procesos tecnológicos cercanos al equilibrio, en la termodinámica estadística de Boltzmann y en la termodinámica de los procesos disipativos de Prigogine – no ha dejado de resaltar la pérdida ineluctable de energía útil, la dispersión hacia el desorden y la irreversibilidad del tiempo en todos los procesos de orden físico, termodinámico, ecológico y biológico, la negentropía pone de manifiesto ese proceso fundamental de transformación de energía radiante en energía química, y en la organización misma de la vida, que ha evolucionando con la complejidad ecológica de la biosfera. Si la negentropía no fuera un principio activo de la biosfera, simplemente no habría más vida en el planeta Tierra.

Las implicaciones de la negentropía para la economía ecológica y la ecología política son radicales: la negentropía es el fundamento de una verdadera bioeconomía. Por su parte, si hasta

ahora la ecología política se ha enfocado hacia los conflictos socioambientales y la distribución desigual de los costos ecológicos generados por la apropiación destructiva de la naturaleza, la negentropía como fundamento de una ontología de la vida abre el campo hacia los procesos de emancipación en la reapropiación del patrimonio biocultural de los pueblos de la tierra y en la construcción de nuevos territorios de vida.

El «diálogo de saberes» y los «imaginarios de la sustentabilidad» son dos ideas clave en tu obra. ¿Qué importancia tienen estos conceptos para las luchas de los pueblos indígenas y los modos de vida que han sido negados por la modernidad occidental?

Considero que estos dos conceptos son imprescindibles para poder pensar la vida, la historia y la reconstrucción del mundo en los caminos hacia la diversidad cultural y la sustentabilidad de la vida. Los imaginarios sociales de la sustentabilidad abren una indagatoria enigmática e inédita: la de saber si en esas instancias «imaginarias», que se expresan en cosmovisiones, en prácticas, en fin, en modos de «ser en el mundo», se han internalizado e instituido las condiciones propias de la vida. De ser así, los pueblos de la Tierra serían los auténticos «depositarios» y custodios de la vida en el planeta; de manera que las luchas emancipatorias de los pueblos, al reclamar los derechos a sus saberes y prácticas «tradicionales», se convierten en voceros de los derechos «de la naturaleza», en defensores de la vida del planeta.

El diálogo de saberes hay que entenderlo más allá de cualquier método o llamado a interconectar paradigmas o disciplinas científicas; es más que un reclamo a favor de la interculturalidad en un mundo cosmopolita. El diálogo de saberes va más allá de una hibridación epistémico-cultural: es una comprensión ontológico-política del curso de la historia humana, que rompe tanto con la idea del fin de la historia y de su encierro en una modernización reflexiva, como con la idea

del progreso sin límites o de un materialismo histórico-dialéctico decurrente del idealismo trascendental. El diálogo de saberes es una nueva comprensión de la historia entendida como el encuentro de diversos seres culturales constituidos por sus saberes en sus diferentes modos de comprensión y de construcción del mundo, desde sus propios mundos de vida. El diálogo de saberes se inscribe en las perspectivas de una ontología política, entendida como el campo conflictivo de confrontación de procesos de des-territorialización de estos seres culturales en sus propios contextos ecológicos y en sus condiciones existenciales. Es el encuentro de procesos de resistencia y de reconstrucción de territorios de vida; de reinención de identidades colectivas, en las que se confrontan diversas racionalidades en sus modos de apropiación y transformación de la naturaleza, procesos en los cuales activan, en diversos sentidos e intensidades, los potenciales ecológicos, entrópicos y negentrópicos del planeta, con sus efectos globales y locales diferenciados, movilizándolo el metabolismo de la biosfera y con ello las condiciones de sustentabilidad de la vida.

Tu visión sobre la Ecología Política en los territorios del Sur está fundada en la idea de una «política de la diferencia». ¿Qué significa este concepto y cómo lo retomas en tu último libro *La apuesta por la vida* (2014)?

La política de la diferencia no es sólo un principio de inclusión democrática agregado al orden social establecido. Es sobre todo la consecuencia lógica de la comprensión del mundo humano y de la constitución de la biosfera en el planeta Tierra dentro de una ontología de la vida. La política de la diferencia es decurrente de la deconstrucción de la comprensión metafísica del ser fundada en la idea de lo Uno – de la dualidad por virtud de su simple unidad –; de esta idea que ha destinado la vida del planeta en un afán de unificación, que partiendo de la identidad y diferencia ontológica del ser, ha conducido hacia

el reduccionismo ontológico fundado en la globalización del mercado, como medida y sentido de todas las cosas del mundo. La ontología de la vida es una ontología de la diferencia y de la otredad, que enfrenta la idea de lo Uno que atraviesa toda la historia de la metafísica: desde la identidad del ser y pensar en Parménides, el *Logos* como lo uno unificador en Heráclito y la *Idea* de Platón, el dualismo ontológico cartesiano y el saber absoluto hegeliano, hasta la co-pertenencia del Ser y el ente en la diferencia ontológica de Heidegger. La ontología de la diferencia parte de la disyunción originaria entre el orden de lo Real y el orden Simbólico, que hoy se manifiesta en el mundo político como el derecho a la diferencia en los modos de ser-en-el-mundo y de construir mundos de vida. La ontología de la diferencia se desprende de un principio más fundamental, la ontología de la otredad, que implica la coexistencia de mundos de vida no homologables, no traducibles, no reducibles a un principio unificador de la vida. Es desde esa comprensión ontológica de la vida que se legitima una ética de la otredad y una política de la diferencia. En esa ontología se inscribe la apuesta por la vida.

El ambientalismo en América Latina ha tenido un importante desarrollo durante las últimas décadas. Desde los movimientos sociales, el pensamiento académico y las políticas públicas se han generado esfuerzos en este sentido. A partir de tu experiencia ¿qué consideras que da una identidad al ambientalismo latinoamericano?

Pienso que lo que da su identidad al ambientalismo latinoamericano es su radicalidad ontológica y epistemológica, cultural y política. Sobre lo primero y lo último me referí en la pregunta anterior. La radicalidad epistemológica se funda en el concepto de ambiente, entendido justamente como un concepto epistemológico: como la exterioridad al *logocentrismo* de la ciencia. El saber ambiental emerge de la ontología de la vida; al mismo tiempo es un saber estratégico que

sirve para deconstruir las teorías sobre el medio ambiente que lo que buscan es codificar, simular, asimilar y disolver la criticidad del ambiente en las teorías científicas y económicas dominantes. El ambiente se convierte así en un significante que abre nuevos sentidos, que descubre otros potenciales ecológicos y culturales para la reconstrucción del mundo en el horizonte de la sustentabilidad de la vida. En este sentido, el ambiente deja de ser una «externalidad» del sistema económico o una dimensión de los sistemas planificadores, incluso un objeto científico, para convertirse en un potencial que permite pensar otros modos de producción – por ejemplo, una productividad eco-tecnológico-cultural fundada en el principio de la negentropía –, que abre el mundo hacia nuevas formas de habitabilidad del planeta, conformes con las condiciones termodinámicas, ecológicas y simbólicas de la vida. ▣

Crítica de libros, informes y webs

En la espiral de la energía

Luis González Reyes

Anarquistas contra el terror y el dolor. Debates sobre una ecología de la modernidad

Jaume Valentines Álvarez



En la espiral de la energía

Autores: Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes

Editorial: Libros en Acción y Baladre

Año: 2014

Idioma: Castellano

944 pp.

Crítica del libro: Luis González Reyes*



«Formas de habitar, economías, sistemas políticos, tipos de trabajos, demografía, luchas sociales, tecnologías, sistemas de valores, maneras de relacionarse con el entorno... ¿cómo han interaccionado a lo largo de la historia?, ¿tiene su discurrir forma de espiral?, ¿qué papel ha tenido la cantidad y cualidad de la energía disponible en su evolución?, ¿cuál va a ser su evolución futura?»

En la espiral de la energía recorre la historia de la humanidad desde su origen y termina haciendo una proyección de cual puede ser la evolución futura. En cada uno de los capítulos, abordamos los siguientes temas: i) el sistema económico, incluyendo en él los trabajos que lo sostienen y el metabolismo sobre el que se estructura; ii) las formas de organización social a nivel político, entre las que destaca el Estado; iii) las agrupaciones sociales, repasando la historia de la ciudad; iv) el sistema cultural y cómo se construye; v) las luchas entre grupos sociales que defienden articulaciones basadas en la dominación y los que apuestan por los modelos igualitarios y sostenibles (con toda la complejidad de visiones intermedias); vi) la relación del ser humano con el entorno; y vii) la cantidad, calidad y tipo de energía disponible, haciendo especial incidencia en el papel de la tecnología. Ninguno de estos factores es independiente y su evolución se realiza a la par, aunque esta dinámica no ha sido necesariamente armoniosa a lo largo del tiempo.

En esta evolución ponemos el foco en el papel que ha tenido la energía y, en general, los condicionantes ambientales, como los recursos y el clima. Sostenemos que no es posible explicar la historia de la humanidad sin tener en cuenta el

entorno en el que se ha desarrollado. Este factor ha sido determinante, y lo será más aún en el futuro. Es un elemento que ha sido habitualmente subestimado y que nos esforzamos por rescatar. Sin embargo, que el entorno, y más en concreto la energía, hayan condicionado la historia de la humanidad no quiere decir que la hayan determinado, pues las decisiones últimas sobre el orden social y económico son humanas. Además, para entender la historia de la humanidad y su proyección futura no basta, ni mucho menos, con entender los condicionantes ambientales, sino que es necesario tener una visión compleja y holística.

Uno de los problemas para afrontar la Crisis Global contemporánea y para entender la historia es nuestra incapacidad para comprenderla en su globalidad y en sus raíces. No necesitamos conocimientos fraccionados, sino totalizadores. Por ello hemos abordado, bajo el prisma de la historia, distintas disciplinas como la economía, la ecología, la sociología, la física, la química, la filosofía, la politología, el urbanismo, la psicología, la demografía, la geología o la ingeniería. Creemos que los aprendizajes importantes en este tiempo histórico están en las fronteras entre los distintos saberes. Además, hemos recurrido extensivamente a explicaciones multicausales, en las que cau-

* Ecologistas en Acción (luis.glez.reyes@nodo50.org)



sas y consecuencias se han entrelazado.

El libro tiene dos tomos. El primero analiza el pasado de la humanidad. Durante el grueso de su existencia, el ser humano ha vivido con un metabolismo forrajero. El primer gran salto se produjo con la Revolución Agraria. Pero, a pesar

de los cambios cualitativos que conllevó, la mayoría de la humanidad siguió organizándose de forma más o menos igualitaria. El siguiente gran paso energético acompañó a un fuerte cambio civilizatorio: junto a la aparición de la guerra, los Estados y del patriarcado, el ser humano aprendió a explotar el trabajo de otras personas y de otros animales. Esta nueva civilización dominadora terminó desarrollando el capitalismo en una de sus regiones periféricas. El último salto energético fue la Revolución Industrial, en la cual se conjugaron los combustibles fósiles con potentes máquinas. Esto permitió al capitalismo conquistar el mundo, modificar profundamente las sociedades y desequilibrar la biosfera. El proceso alcanzó su cénit con la era del petróleo.

En esta mirada retrospectiva no exponemos sólo cómo fue la evolución de la humanidad, sino que intentamos responder a los motivos que produjeron los grandes cambios. Así nos preguntamos: ¿qué impulsó a determinadas sociedades a pasarse a la agricultura?, ¿por qué surgieron el Estado, la guerra y el patriarcado?, ¿cuáles fueron las razones para que el capitalismo surgiese en Europa y no en China?, ¿hubo grandes ciclos dentro de los Estados agrarios?, ¿y dentro del capitalismo?, o ¿por qué unas civilizaciones colapsaron y otras no?

El segundo tomo analiza la Crisis Global. Aborda la Gran Recesión económica y la crisis de hegemonía estadounidense. Pero se detiene especialmente en los factores que, a nuestro juicio, están marcando de forma profunda la situación actual: el fin de la energía abundante, versátil y barata; la dificultad creciente de acceso a muchos materiales; el cambio climático; y la quiebra de las bases de la reproducción social.

Estamos viviendo un gran salto energético pero, a diferencia de los pretéritos, en este caso es hacia una menor disponibilidad energética. Esto está conllevando, inevitablemente, que el capitalismo global, así como la civilización que le acompaña, estén colapsando.

Así nos hacemos más preguntas como: ¿hay alternativa energética a los combustibles fósiles?, ¿pueden la tecnología o los movimientos sociales evitar el colapso?, ¿son suficientes los elementos de resistencia que tiene el capitalismo para perpetuarse?

A partir de ese punto, realizamos un ejercicio de política-ficción, asentado sobre bases lo más reales posibles, en el que proyectamos cómo pueden evolucionar los sistemas económicos; las formas de organización social; la demografía y las ciudades; la cultura y el conocimiento; las movilizaciones sociales; la relación del ser humano con el entorno; y la cantidad, calidad y tipo de energía disponible. Creemos que es preciso imaginar el futuro, por duro que sea, para poder encararlo con más posibilidades de éxito emancipador. Consideramos que necesitamos tener una visión de medio y largo plazo para poder elaborar estrategias exitosas.

Además, en este segundo tomo se condensa el análisis de todo el libro en dos teorías sobre qué mueve a las personas y cómo es la evolución social. El análisis arroja una visión cíclica de la historia en la que, fruto del aumento de la complejidad social, se han ido repitiendo colapsos, crisis y saltos adelante. Estos ciclos tienen forma de espiral: la humanidad vuelve a pasar por etapas similares, pero en contextos y formatos distintos.

Finalmente, el objetivo de este libro es comprender mejor elementos sustanciales de la historia de la humanidad y del futuro que creemos más probable. La idea es que estos aprendizajes nos ayuden a que la proyección del futuro que hacemos no llegue a materializarse y seamos capaces de construir sociedades justas, democráticas y sostenibles en este tiempo de cambio civilizatorio que estamos viviendo. En definitiva, es una invitación al diálogo colectivo para buscar y construir nuevas estrategias e iniciativas. ■

Anarquistas contra el terror y el dolor. Debates sobre una ecología de la modernidad

Autor: NETZ, R. (2013),

Alambre de púas: una ecología de la modernidad

Editorial: Eudeba

Año: 2013

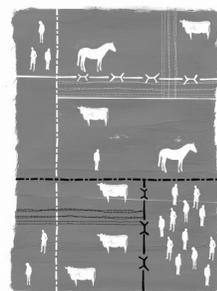
ISBN-13:978-1-78168-129-9

Idioma: Castellano (traducido del inglés por Jaume Sastre i Juan)

258 pp.

Crítica del libro: Jaume Valentines Álvarez*

ALAMBRE DE PÚAS
UNA ECOLOGÍA DE LA MODERNIDAD
REVIEL NETZ



Eudeba

El 16 de diciembre de 2014 el despliegue de un vasto dispositivo policial en el marco de la Operación Pandora se saldó con la detención de 11 personas y con el registro de diversos espacios anarquistas en Barcelona. Sin excepción, los grandes medios de comunicación catalanes dieron voz acriticamente a los comunicados judicial y policial, y anunciaron una operación contra el llamado «terrorismo anarquista». Uno de los espacios afectados y dañados en el registro fue el Ateneu Anarquista del Poblesec, que desde su creación en 2013 ha venido siendo un espacio para el debate y la reflexión crítica sobre temas dispares y, en particular, sobre cuestiones ambientales. Dos ejemplos en 2014 habían sido la celebración de las Jornadas en Defensa de la Tierra (MOAI), centradas en las resistencias al TAV y al *fracking*, y la presentación del libro *Alambre de púas: una ecología de la modernidad* de Reviel Netz. En este último acto, se reunieron

anarquistas, activistas animalistas no anarquistas y académicos en historia ambiental, económica y de la ciencia, con el fin de hablar del terror infundido en animales y humanos por una tecnología invisible de la modernidad.

«Por lo menos en este caso particular, acabó siendo así: una especie que esclaviza a otra forja sus propias cadenas»

Reviel Netz

El 7 de febrero de 2014, el alambre de púas aparecía en las portadas de los periódicos: otra vez muertos en las fronteras entre Europa y África en la lucha por intentar traspasar, circundar, saltar ese material.¹ Ese mismo día, el Ateneu Anarquista del Poblesec (Barcelona) había organizado la presentación del libro *Alambre de púas* (2013, Buenos Aires: Eudeba), contando con la presencia del traductor, Jaume Sastre. La sesión formaba parte del ciclo intermitente «Ciencia, tecnología y medicina en las plazas: gobernabilidad, resistencias y empoderamiento», cuya

* Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT-UNL), Lisboa; Ateneu Anarquista del Poblesec, Barcelona (allaqqat.coop@gmail.com). Valentines Álvarez participa también en el Observatorio Crítico de la Tecnología "Allaqqat". Allaqqat, una voz del árabe andalusí, es el origen etimológico de "alicates"; esto es, remite a una tecnología común, popular, migrante, sencilla, de baja intensidad, que no depende de grandes sistemas técnicos ni economías globales, pero que corta alambre de púas.

1. Barrio, Ana del, «Uno de los inmigrantes de Ceuta: 'La Guardia Civil me disparó pelotas de goma en la cabeza'», *El Mundo*, 07/02/2014 <<http://www.elmundo.es>>.

primera sesión en marzo de 2012 estuvo dedicada a la normativización de género y a la transexualidad. En esta nueva sesión, se continuó reflexionando sobre la mediación tecnológica en el control de los cuerpos *otros*, si bien incorporando los cuerpos de especies animales *otras*, más allá de los humanos. Y otra vez se volvió a establecer un diálogo abierto entre los saberes subalternos y los activismos académicos. De hecho, el libro de Reviel Netz – celebrado por personalidades como Bruno Latour, Ian Hacking y Noam Chomsky – no hubiera sido nunca escrito sin la agencia política de amas de casa como Ruth Harrison (Harrison, 2013) o el papel de colectivos ecologistas y anarquistas, que han ido cuestionando esa tradición cultural baconiana que pretende subyugar la naturaleza y maquinizar el animal (Merchant, 2006).

Primeramente, Sastre nos introdujo a la investigación central de Netz, especialista en las geografías del conocimiento en la Antigua Grecia. De hecho, este autor parte del análisis espacial para entender el despliegue global del alambre de púas como acicate de una modernidad que responde a la «ecuación ecológica más fundamental» de la carne y el hierro: el alambre de espino corta la carne, pincha, hiere y duele, y así traza fronteras, delimita espacios, cierra, contiene, detiene y excluye. En este sentido, Netz plantea una historia ambiental del impedimento del movimiento, esto es, una historia del control del espacio y de los cuerpos que lo habitan, a través del dolor que infringe una espina de acero atravesando la piel. Símbolo tantas veces de la represión, la opresión y el rapto de la libertad, el alambre de púas es un artefacto que tiene una historia propia pero injertada en la historia de millones de humanos y otros animales desde 1874. El autor narra la vida de este invento: desde su ideación para encerrar vacas en los Estados Unidos hasta los estertores del Gulag en 1954, pasando por Manchuria y Sudáfrica en las guerras coloniales, por la Europa Central en la primera Guerra Mundial, por Auschwitz y por los asentamientos judíos de la Palestina bajo mandato británico.

Sin duda, no es una historia anecdótica y aún no ha terminado. La cuestión de la «margina-

lización» de la violencia a partir de 1954, tal y como Netz apunta, es uno de los puntos más criticables de la obra. Pero hay otros puntos potencialmente discutibles. El libro quizás adolece de cierta «segregación» por especies: el primer capítulo («Expansión») narra el papel del alambre de espino en la ganadería de finales del siglo XIX, mientras que el segundo capítulo («Confrontación») y el tercero («Contención») se centran principalmente en sus efectos en humanos en la primera mitad del siglo XX, en la guerra de trincheras y en el campo de concentración. Por otro lado, el análisis espacial, ambiental, a vista de pájaro, tiende a veces a hacer perder de vista la diferencia: de especie, pero también de género y de etnia (en este caso, en relación a los pueblos nativos norteamericanos). Igualmente, el materialismo que se vindica como eje director concentra excesivamente su foco en la relación de un objeto técnico y de una carne estigmatizada, víctima, determinada, incapaz, tal y como lo ha puesto de manifiesto el historiador del Max Planck Institute Lino Camprubí, asistente a la presentación (Camprubí, 2014).

El debate posterior a la presentación del libro recogió algunas de estas cuestiones, y ahondó en las interrelaciones históricas entre humanos y animales domesticados. *Alambre de púas* es un trabajo inquietante que incita a reflexionar sobre cómo la historia animal y la historia humana son, en buena medida, una historia del dolor compartida. De hecho, muchos otros ejemplos nos evidencian la intersección o la co-evolución de estas historias. La experimentación médica forzada (vivisección incluida) en animales (humanos incluidos) tiene una larguísima tradición hasta hoy (Guerrini, 2003; Weingart, 1989). Durante siglos los imperios explotaron los recursos faunísticos de las colonias y intercambiaron esclavos por tejidos baratos y armas obsoletas (Adas, 1990: 50). A principios del siglo XX la producción en cadena en los talleres Ford y en los enormes mataderos de Chicago compartieron una misma forma de mirar, de pensar, de hacer (Edgerton, 2007: 211-238). A su vez, el productivismo fabril decimonónico permeó en el diseño de los espacios y mercancías de la industria cárnica a partir de la década de 1930 (Boyd, 2001).

En los años 1960, como había acontecido con términos como «seguridad industrial» o «higiene laboral» para el obrero/a, la regulación estatal del «bienestar animal» arrinconó progresivamente las palabras «crueldad» y «sufrimiento» animal, que habían sido usadas antes de la expansión de la ganadería intensiva (Woods, 2011).

La actual crisis también la viven (o la mueren) más animales domésticos abandonados, menos recogidos y más sacrificados. A principios de marzo de 2014, por ejemplo, la Federació de Municipis de Catalunya reclamó a la Generalitat de Catalunya una «moratoria en la prohibición del sacrificio [de animales]» para reducir gastos de las administraciones locales.² Paralelamente, año a año, especies salvajes se van extinguiendo a la par con lenguas y culturas minoritarias en una ligazón geográfica patente. «La historia está encarnada, y no sólo en cuerpos humanos sino en los cuerpos de todas las especies», nos dice Reviel Netz. A pesar de que la aventura de tejer un siglo de historia es siempre arriesgada – más si se hace a partir de un objeto técnico como hilo narrativo –, *Alambre de púas: una ecología de la modernidad* nos ofrece una mirada muy sugerente, casi necesaria, como lo es la existencia de espacios críticos para el debate sobre lo que será nuestro pasado y fue nuestro futuro. ■

Referencias

- ADAS, M. (1990) *Machines as the Measure of Men: Science, Technology and Ideologies of Western Dominance*, Ithaca, Cornell University Press.
- BOYD, W. (2001) «Making Meat: Science, Technology, and American Poultry Production», *Technology and Culture*, vol. 42 (4), pp. 631-664.
- CAMPRUBÍ, L. (2014) «Dolor animal, ética e historia humana», *El Catoblepas*, vol. 147, p. 11 (versión on-line: <<http://www.nodulo.org/ec/2014/n147p11.htm>>).
- EDGERTON, D. (2007 [2006]) *Innovación y tradición: historia de la tecnología moderna*, Barcelona: Crítica.
- GUERRINI, A. (2003) *Experimenting with humans and animals: from Galen to animal rights*, Baltimore.:The Johns Hopkins University Press.
- HARRISON, R. (2013 [1964]) *Animal machines*, Boston: CABI.
- MERCHANT, C. (2006) «The Scientific Revolution and The Death of Nature», *Isis*, vol. 97, pp. 513-533.
- WEINGART, P. (1989) «German Eugenics between Science and Politics», *Osiris*, vol. 5, pp. 260-282.
- WOODS, A. (2011) «From cruelty to welfare: the emergence of farm animal welfare in Britain, 1964-71», *Endeavour*, vol. 36 (1), pp. 14-21.

2. «Los ayuntamientos piden poder sacrificar animales», *La Vanguardia*, 4 de marzo de 2014 <<http://www.lavanguardia.com>>.



ecología política

en América Latina

Números actuales y atrasados disponibles en
las Entidades Colaboradoras
(véase listado en www.ecologiapolitica.info)
y en los siguientes puntos comerciales:

ARGENTINA

PROEME - Rodríguez Peña 744 (C1020ADP) - Tel. 48 15-11 90 - Fax 48 15-11 92
Buenos Aires - aguazul@007ciudad.com.ar

CHILE

LIBERALIA Ediciones - Av. Italia 2015-Nuñoa - Tel. 562 432 80 03 - 562 326 86 13
Fax 562 326 88 05 - Santa Fé de Bogotá - info@siglodelhombre.com

COLOMBIA

Siglo del Hombre - Carrera 31A, N° 25B-50 - Tel. 337 94 60 - 344 00 42 - Fax 337 76 65
Santa Fé de Bogotá - info@siglodelhombre.com

ECUADOR

Libri Mundi - Juan León Mera, 23-83 y Wilson - P.O. Box 17-01 - Tel. 252 16 06 -3029
Quito - librimundi@librimundi.com

GUATEMALA

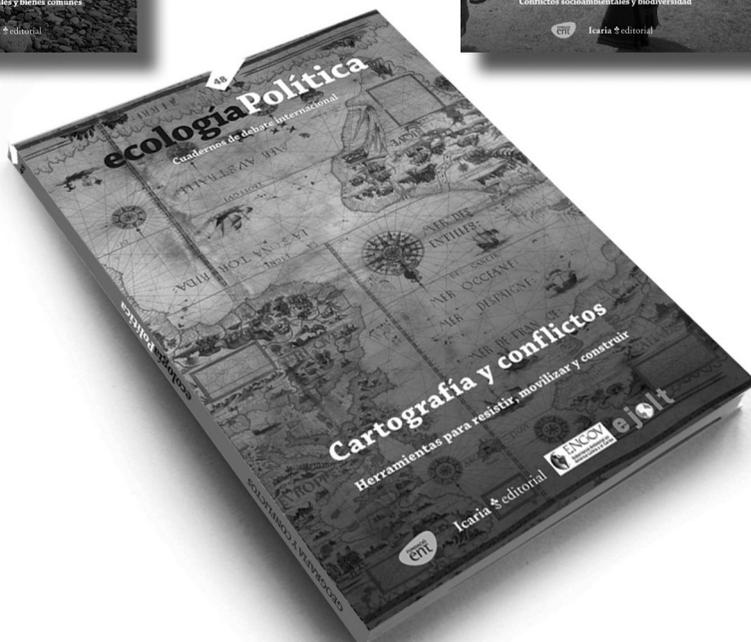
Sophos - Avenida La Reforma 13-89, Zona 10 - Local 1 Centro Comercial El Portal
Tel. 23 34 67 97 - Fax 23 63 24 69 - Guatemala - sophos@sophosenlinea.com

MÉXICO

Editorial Juventud SA de CV - Herodoto, N° 42 - Tel. 5203 97 49 Colonia Anzures
11590 México, D. F. - juventud.mex@prodigy.net.mx

VENEZUELA

Euroamericana de ediciones - Avda. Francisco Solano -Edif. Lourdes, piso 4, ofic. 11
Sabana Grande - Tel. 761 22 80 - Fax 763 02 63 - Aprdo. de Correos 76296
1070 Caracas - Venezuela - angelsuc@cantr.net



ecología Política

¡Suscríbete!

Si todavía no estás suscrita o suscrito puedes hacerlo por las siguientes vías:

Entra en **www.ecologiapolitica.info**

Llama al **93 893 51 04**

Envía un correo a **suscriptores@ecologiapolitica.info**

La suscripción anual es de 2 números y cuesta 25 euros

Entidades colaboradoras

La revista Ecología Política quiere ampliar su difusión entre organizaciones y movimientos sociales, para así conseguir llegar a un público más amplio. Al mismo tiempo la revista espera ser un canal de difusión que permita apoyar a los colectivos y movimientos sociales interesados en «ecología política». Por ello hemos creado la figura de ENTIDAD COLABORADORA DE LA REVISTA ECOLOGÍA POLÍTICA. Mediante esta figura las entidades colaboradoras se comprometen a distribuir la revista a todas las personas que estén interesadas y a cambio consiguen revistas a un precio reducido para su posterior distribución. Si estáis interesados buscad información más detallada en www.ecologiapolitica.info o escribid un correo electrónico a secretariado@ecologiapolitica.info

Entidades colaboradoras:



CENSAT Agua Viva
<http://www.censat.org>
Diagonal 24, nº 27 A-42
Bogotá, Colombia



VSF Justicia Alimentaria Global
<http://vsf.org.es>
C/ Floridablanca, 66-72,
08015 Barcelona, España



GOB, Grup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturaleza
<http://www.gobmallorca.com/>
Manuel Sanchis Guarner, 10 bajos, 07004
Palma de Mallorca, Mallorca, España



Ekologistak Martxan
<http://www.ekologistakmartxan.org/>
Ekoetxea C/ pelota 5, bajo.
48005, Bilbao



Observatori del Deute en la Globalització
<http://www.odg.cat>
C/Girona 25, principal, 08010, Barcelona,
España



ENTREPUEBLOS
<http://www.pangea.org/epueblos/>
Plaça Ramon Berenguer El Gran, 1, 3r-10
08002 Barcelona, España



FUHEM
<http://www.fuhem.es>
Duque de Sesto, 40 - 28009, Madrid



Amigos de la Tierra
<http://www.tierra.org/>
Calle Jacometrezo 15, 5º J
28013 Madrid, España



Coordinadora El Rincón-Ecologistas
en Acción
<http://www.ecologistasenaccion.org/elrincon>
Islas Canarias, España



GREENING BOOKS
www.bookdaper.es
bDAP262

Ecología Política 49
Fundació ENT, 2015

MOCHILA ECOLÓGICA - Cálculo de la mochila ecológica de un ejemplar de la publicación

Masa publicación (g)	Huella de carbono (g CO ₂ eq.)	Residuos generados (g)	Consumo agua (L)	Consumo energía (MJ)	Consumo materias primas (g)
253	541	34	4	10	142
Ahorros*:	116	5	1	2	16

* Impacto ambiental ahorrado respecto a una publicación común similar

En este número la revista **Ecología Política** se centra en la Ecología Política vinculada a la soberanía local.

El número incluye artículos de la máxima actualidad. Entre ellos destacan textos que analizan experiencias de autogestión comunitaria, democracia de base y resistencias populares; así como movimientos por la remunicipalización de servicios privatizados, entre otros.

Asimismo incluye artículos sobre redes de resistencia y críticas de libros e informes. En total, más de 20 artículos sobre la temática.

También ponemos a vuestra disposición la web de ecología política: www.ecologiapolitica.info. Visítadla para poder subscribiros a la revista y acceder a la versión electrónica de los primeros 47 números de la revista. Igualmente tenéis a vuestra disposición nuestro twitter (@Revista_Eco_Pol) y facebook (<https://www.facebook.com/revistaecopol>) para manteneros permanentemente informados sobre las principales novedades en el ámbito de la ecología política.

ISSN 1130-6378



9 771130 637008

PVP: 15€